

Contestación de la demanda No. 2024-00085 Comunicación Celular Comcel S. A.

Diego Daniel Vega Orjuela <ddvega@emcali.com.co>

Lun 24/06/2024 16:07

Para: Juzgado 17 Civil Circuito - Valle del Cauca - Cali <j17cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: notificaciones@gha.com.co <notificaciones@gha.com.co>

📎 7 archivos adjuntos (4 MB)

1. Poder especial - EMCALI EICE ESP. - COMCEL S.A..pdf; 3. Resolución de nombramiento y Acta de posesión - Edinson Zambrano Martínez..pdf; 4. Resolución de delegación en materia de representación legal - Edinson Zambrano Martínez..pdf; Contestación de la demanda.pdf; Correo_ Diego Daniel Vega Orjuela - Outlook.pdf; Interposición y sustentación del recurso extraordinario Emcali.pdf; Recurso extraordinario de COMCEL S.A. - Traslado..pdf;

No suele recibir correos electrónicos de ddvega@emcali.com.co. [Por qué esto es importante](#)

Santiago de Cali, 24 de junio de 2024.

Señores:

Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali

Juez

Wilson Ricardo Vásquez Gómez

Correo: j17cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Calle 8 No. 1 – 16.

Referencia:

No. De Proceso	76-001-31-03-017-2024-00085-00
Medio de control	Ejecutivo
Demandante	Comunicación Celular Comcel S. A.
Demandado	Empresa Municipal de Cali – Emcali E.I.C.E E.S.P
Asunto	Contestación a la demanda

Cordial saludo,

DIEGO DANIEL VEGA ORJUELA, abogado en ejercicio, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.018.493.132 expedida en la ciudad de Bogotá D. C., y con tarjeta profesional No. 364.450 expedida por parte del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado especial de las **EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI E.I.C.E ESP**, conforme al poder especial de representación judicial que anexo al presente memorial; de manera muy respetuosa y, dentro de los términos legales, por medio del presente escrito me permito dar contestación a la demanda dentro del proceso ejecutivo de mayor cuantía impetrado por **COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S. A.**, y proponer las correspondientes **EXCEPCIONES AL MANDAMIENTO DE PAGO**, contenido en el auto de fecha 6 de mayo de 2024, a través del cual su despachó libró orden de **MANDAMIENTO DE PAGO**, a favor de la demandada y en contra de mí representada, el cual fue notificada a mí prohijada el 11 de junio de hogaño, conforme a lo siguiente.

Diego Daniel Vega Orjuela.

Abogado contratista.

Dirección Jurídica.
EMCALI EICE ESP.

Por favor no imprima este mensaje si no es necesario. Proteger el medio ambiente es responsabilidad de todos. Este mensaje y cualquier archivo anexo contienen información privilegiada y confidencial de EMCALI EICE ESP, en consecuencia, el que ilícitamente lo use antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones establecidas en la Ley. El uso del mensaje solo está permitido de manera exclusiva e individual para su destinatario. Si usted no es el destinatario de este correo, por favor bórralo inmediatamente y comuníquelo al remitente. EMCALI EICE ESP no se hace responsable de información, opiniones o criterios personales que el usuario transmita mediante el correo corporativo.

Santiago de Cali, 23 de junio de 2024.

Señores:
Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali
Juez
Wilson Ricardo Vásquez Gómez
Correo: j17cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Calle 8 No. 1 – 16.
E. S. D.

Referencia:

No. Proceso	76-001-31-03-017-2024-00085-00
Medio de control	Ejecutivo
Demandante:	Comunicación Celular Comcel S. A.
Demandado	Empresa Municipal de Cali – Emcali E.I.C.E E.S.P
Asunto:	Contestación a la demanda

Cordial saludo,

EDINSON ZAMBRANO MARTÍNEZ, abogado, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.117.497.373, expedida en Florencia - Caquetá; en mi condición de **DIRECTOR JURÍDICO** - Código de cargo No. 905.006, del Área Funcional de Administración de las **EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E E.S.P.**, nombrado mediante la Resolución GG No. 100000052 del 05 de febrero de 2024 y con Acta de posesión No. 010 del 05 de febrero de 2024; actuando con las facultades a mi conferidas mediante la Resolución No. 100000197 del 25 de abril de 2024, *“Por medio de la cual se realiza una delegación en materia de Representación Legal”*; manifiesto a usted, muy respetuosamente, que, confiero **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente al Dr. **DIEGO DANIEL VEGA ORJUELA**, abogado, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.018.493.132 expedida en Bogotá D. C., y, portador de la Tarjeta Profesional No. 364.450 del Consejo Superior de la Judicatura, para que, en nombre y representación de **EMCALI - E.I.C.E. E.S.P.**, ejerza su representación judicial y extrajudicial de la Empresa, en el proceso de la referencia.

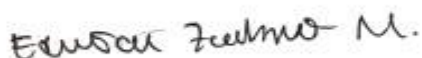
El apoderado queda expresamente facultado para conciliar o no, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la empresa, así como para realizar todas las funciones propias de su encargo como representante, en general, para todas las atribuciones inherentes al presente mandato y/o que se deriven del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 del Código General del Proceso - Ley 1564 del 2012.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley No. 2213 del 2022, se informa que, la dirección de correo electrónico registrada por el apoderado en el Registro Nacional de Abogados, es: diegodanve@hotmail.com; no obstante, para efectos de notificaciones en los procesos de la referencia, el buzón de notificaciones de la Empresa que represento es: notificaciones@emcali.com.co y ddvega@emcali.com.co

Le solicito, muy respetuosamente, se sirva reconocerle personería jurídica al apoderado, en los términos y para los fines aquí señalados.

Otorga,

Acepta,



EDINZON ZAMBRANO MARTÍNEZ
Director Jurídico.
EMCALI - E.I.C.E - E.S.P.



DIEGO DANIEL VEGA ORJUELA.
C.C. No. 1.018.493.132 de Bogotá D. C.
T.P. No. 364.450 del C. S. de la J.

Santiago de Cali, 24 de junio de 2024.

Señores:
Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali
Juez
Wilson Ricardo Vásquez Gómez
Correo: j17cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Calle 8 No. 1 – 16.

Referencia:

No. De Proceso	76-001-31-03-017-2024-00085-00
Medio de control	Ejecutivo
Demandante	Comunicación Celular Comcel S. A.
Demandado	Empresa Municipal de Cali – Emcali E.I.C.E E.S.P
Asunto	Contestación a la demanda

Cordial saludo,

DIEGO DANIEL VEGA ORJUELA, abogado en ejercicio, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.018.493.132 expedida en la ciudad de Bogotá D. C., y con tarjeta profesional No. 364.450 expedida por parte del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado especial de las **EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI E.I.C.E ESP**, conforme al poder especial de representación judicial que anexo al presente memorial; de manera muy respetuosa y, dentro de los términos legales, por medio del presente escrito me permito dar contestación a la demanda dentro del proceso ejecutivo de mayor cuantía impetrado por **COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S. A.**, y proponer las correspondientes **EXCEPCIONES AL MANDAMIENTO DE PAGO**, contenido en el auto de fecha 6 de mayo de 2024, a través del cual su despachó libró orden de **MANDAMIENTO DE PAGO**, a favor de la demandada y en contra de mí representada, el cual fue notificada a mí prohijada el 11 de junio de hogaño, conforme a lo siguiente:

PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE LAS EXCEPCIONES

Señala el artículo 442 de la ley 1564 de 2012, código general del proceso, la procedencia y oportunidad de las excepciones de la siguiente manera:

“Señala el artículo 442 de la ley 1564 de 2012, código general del proceso, la procedencia y oportunidad de las excepciones de la siguiente manera:

(...)

Artículo 442. Excepciones. La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas:

1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo el demandado podrá proponer excepciones de mérito. Deberá expresar los hechos en que se funden las excepciones propuestas y acompañar las pruebas relacionadas con ellas.

(...)"

Es así como se debe tener en cuenta que la notificación personal realizada a mi mandante del auto que libró la orden de pago se efectuó el día 11 de junio de 2024, y conforme a las reglas de la Ley 2213 de 2022, en su artículo 8, el término al término se le puede agregar:

“Artículo 8o. Notificaciones personales. Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.

(...)

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuándo el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.

(...)

PARÁGRAFO 1o. Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación, incluidas las pruebas extraprocesales o del proceso, sea este declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o cualquier otro.

(...)" (Negritas y subrayas, propias)

Aunado a lo enunciado, nos encontramos dentro del término para interponer las correspondientes excepciones, y así continuar con el trámite procesal establecido en el artículo 443 Ibídem.

EXCEPCIONES DE MERITO

Fundamentadas las siguientes según lo dispuesto en los artículos 422¹, 442², 443³ del C.G.P., así como lo propio de los 619⁴, 621⁵ y 784 numeral 7⁶ del Código de comercio y

1 ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO (...).

2 ARTÍCULO 442. EXCEPCIONES. La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas (...).

3 ARTÍCULO 443. TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES. El trámite de excepciones se sujetará a las siguientes reglas (...).

4 ARTÍCULO 619. <DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS TÍTULOS VALORES> (...).

5 ARTÍCULO 621. <REQUISITOS PARA LOS TÍTULOS VALORES> (...).

6 ARTÍCULO 784. <EXCEPCIONES DE LA ACCIÓN CAMBIARIA> (...) 7) Las que se funden en quitas o en pago total o parcial, siempre que consten en el título (...).

demás normas concordantes, así como lo establecido en la se proponen las siguientes medidas exceptivas con carácter de mérito o fondo.

Falta de exigibilidad del título por cumplimiento de requisitos formales.

El artículo 422 del Código General del Proceso establece:

“ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.”

Los títulos ejecutivos deben gozar de dos tipos de condiciones: formales y sustanciales, las primeras exigen que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación (i) sean auténticos y (ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme.

Lo dispuesto para el caso, es conforme a los criterios de la exigencia de la formalidad de la perspectiva del título ejecutivo, en consagrar si este debe ser de contenido singular o complejo, por lo que, el primero estaría dispuesto en un solo documento y el segundo en varios, que para el caso arraigado se desglosa del pago de una factura de honorarios dispuesto por un procedimiento de Arbitraje - Radicación No. A-20220927/0873, en el que se causaron unos valores a favor de la plenaria por el estudio del Contrato de Participación No. 500-GE-CIE-0618-2016 del 17 de mayo de 2016.

De esta síntesis y del conocimiento de como se da el desglose de la creación del título requerido por la parte actora y librado por el despacho, debemos enunciar que la corte Constitucional se ha referido a las condiciones formales y materiales del título ejecutivo y del título complejo en estos términos:

“Los títulos ejecutivos deben gozar de dos tipos de condiciones: formales y sustanciales. Las primeras exigen que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación “(i) sean auténticos y (ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme.” Desde esta perspectiva, el título ejecutivo puede ser singular, esto es, estar contenido o

constituido en un solo documento, o complejo, cuando la obligación está contenida en varios documentos. Las segundas, exigen que el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona. Es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no hacer, que debe ser clara, expresa y exigible. Es clara la obligación que no da lugar a equívocos, en otras palabras, en la que están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan. Es expresa cuando de la redacción misma del documento, aparece nítida y manifiesta la obligación. Es exigible si su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición, dicho de otro modo, si se trata de una obligación pura y simple ya declarada.” (Negrillas y subrayas, propias)

De esta manera, el título ejecutivo debe ser clara, expresa y actualmente exigible, lo que para el caso actual, no aplica, en virtud, a que en el procedimiento que se está adelantando del laudo arbitral, actualmente existe una Interposición y sustentación del recurso extraordinario de anulación en contra del Laudo Arbitral de fecha 05 de marzo de 2024, el cual fue radicado el pasado 1 de mayo de 2024, en el que no deja en firme la decisión tomada, por lo que, no hay existencia en la potestad del valor que se deba causar, y no se cumplen los tres (3) criterios específicos que determina la Ley.

Aunado a lo anterior, no hay relación de la no existencia de voluntad de mí prohijada en la participación del pago de las acreencias correspondientes al Laudo arbitral, ya que a la fecha se está en espera de la decisión del valor que se deba causar entre un 0%, 50% o en su defecto un 100%, dependiendo de lo que determine la sala del laudo, y que en este momento se encuentra suspendido y en revisión del Consejo de Estado, para resolver el recurso extraordinario radicado.

De lo anterior, lo que se concluye, es que, al no existir un título **claro, expreso y actualmente exigible**, Comcel S. A., no puede adelantar procedimientos que afecten el debido proceso⁷ de las actuaciones judiciales, ya que irían en contravía de la Ley y, por ende, vulnerarían los derechos de mí representada.

Procedimiento de solicitud de suspensión del cumplimiento del Laudo Arbitral de fecha 05 de marzo de 2024, para la exigencia del título.

Dentro del procedimiento que se adelanta por las mismas partes dentro del Laudo Arbitral, actualmente, este se encuentra con solicitud de suspensión radicada por parte de Emcali, la cual, se presentó dentro de los términos de Ley, y que a la fecha se encuentra para decidir en el Consejo de Estado, lo que, nos indicaría que todavía no se cuenta con un título ejecutivo que contenga las tres cualidades para su exigencia:

1. **Clara:** la prestación debe ser fácilmente inteligible y debe entenderse en un solo sentido.

7 ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Como quiera que no se cuenta con una decisión que determine el procedimiento del Laudo Arbitral, esta, no tendría el valor de claridad que determina el legislador, por el contrario, estaría en materia de vulneración de los derechos fundamentales que determina la Constitución Política como superior jerárquica de la pirámide Kelseniana, y desvirtuaría el primer punto exigible que debe tener el título.

2. **Expresa:** el crédito del ejecutante y la deuda del ejecutado deben estar expresamente declarados, sin que sea necesario realizar suposiciones.

Actualmente, ninguna de las partes contiene claridad del valor que se deba causar por el procedimiento que se adelantan ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali – Valle del Cauca, ya que, se encuentra en estudio el recurso del artículo 40 de la Ley 1563 de 2012⁸, en el que, se decidieron criterios referentes al procedimiento que este abarca, y en él, se estipulan los valores a causar, por lo que, al estar este en trámite de suspensión, no contaría con la cualidad de “expresamente declarados”, sino que, estaríamos frente a una suposición de valores.

3. **Exigible:** obligación debe ser pura y simple, es decir, no debe estar sujeta a plazo o condición.

Sumado al punto anterior, en el libelo ocupado, no hay existencia determinada de un plazo o condición, por le contrario, al no estar en firme una decisión, no existiría una obligación pura y simple que determine a quien le corresponde un valor específico a causar en el procedimiento.

Buena fe dentro del procedimiento del pago del título.

De la excepción propuesta dentro de la falta de exigibilidad del título, se debe abarcar ahora la buena fe, como un principio contemplado en la normatividad vigente frente a la lealtad procesal, de esto, se determina que la carta magna señala en su artículo 83:

“Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.

Es así que, el tratadista Francisco Gómez Sierra considera que la buena fe, es *“uno de los principios fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás procedan en la misma forma”.*

Lo que conllevamos en este particular, es la buena fe que Emcali demuestra en sus actuaciones, la cual siempre adelanta conforme a los criterios jurídicos y legales que la constituyen, por lo que, no hay una existencia de responsabilidad reflejada a la fecha, al no

⁸ “Artículo 40. Recurso extraordinario de anulación. Contra el laudo arbitral procede el recurso extraordinario de anulación, que deberá interponerse debidamente sustentado, ante el tribunal arbitral, con indicación de las causales invocadas, dentro de los treinta (30) días siguientes a su notificación o la de la providencia que resuelva sobre su aclaración, corrección o adición. Por secretaría del tribunal se correrá traslado a la otra parte por quince (15) días sin necesidad de auto que lo ordene. Vencido aquel, dentro de los cinco (5) días siguientes, el secretario del tribunal enviará los escritos presentados junto con el expediente a la autoridad judicial competente para conocer del recurso”.

existir un título **claro, expreso y actualmente exigible**, que se debe pagar, por el contrario, lo que se viene demostrando, es que a la fecha no existe una exigencia dentro del Laudo al encontrarse este suspendido y en espera a ser resuelto por el Consejo de Estado.

PRUEBAS

Solicito a su señoría de manera respetuosa tener como pruebas las siguientes a fin de ser valoradas:

- Interposición y sustentación del recurso extraordinario de anulación en contra del Laudo Arbitral de fecha 05 de marzo de 2024 (Emcali).
- Interposición recurso de extraordinario (Comcel S. A.).

PETICIÓN

Teniendo en cuenta lo expresado en las razones manifestadas en las excepciones planteadas, solicitó a su señoría, de conformidad a lo expresado en el artículo 443 del C.G.P., las siguientes:

1. Se declaren probadas las excepciones planteadas,
2. Se denieguen las pretensiones manifestadas por la parte actora, por la no existencia del título ejecutivo conforme a las tres causales que lo determinan y se condenen en costas a la misma.

ANEXOS

Acompañan a este escrito:

1. Poder para actuar con sus anexos, y conferido bajo las reglas de la Ley 2213 de 2022.

NOTIFICACIONES

Las recibiré en la secretaría de su Despacho Judicial y/o al correo electrónico: notificaciones@emcali.com.co y ddvega@emcali.com.co, y/o en la dirección: Av. 2 norte # 10 - 70, piso 5, Edificio CAM - Torre EMCALI.

Para su Honorable Despacho.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diego Daniel Vega Orjuela', enclosed within a large, loopy oval shape.

DIEGO DANIEL VEGA ORJUELA.

Apoderado de EMCALI - E.I.C.E - E.S.P.

C.C. No. 1.018.493.132 de Bogotá D. C.

T.P. No. 364.450 del C. S. de la J.

Santiago de Cali, 01 de mayo de 2024.

Señores(as):

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali - Valle del Cauca.

Correo electrónico: ccya@ccc.org.co

Panel Arbitral:

Dr. Iván Ramírez Württemberger.

Presidente.

Dra. Luz Stella Alvarado Orozco.

Árbitro.

Dr. Henry Sanabria Santos.

Árbitro.

Dra. Rubria Elena Gómez Estupiñán.

Secretaria del Tribunal.

Correo electrónico: rubriaelena@gmail.com

Referencia:

Convocante:	Comunicación Celular S. A. - Comcel S. A. , identificada con Nit. No. 800.153.993-7.
Convocada:	Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E E.S.P. , identificada con Nit. No. 890.399.003-4.
Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos:	Arbitraje - Radicación No. A-20220927/0873
Asunto:	Interposición y sustentación del recurso extraordinario de anulación en contra del Laudo Arbitral de fecha 05 de marzo de 2024.

Cordial saludo,

JUAN MANUEL ROJAS, abogado en ejercicio, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.075.226.782 expedida en Neiva – Huila y con Tarjeta Profesional No. 205.537 expedida por parte del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado especial de las **EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI EICE ESP**, conforme al poder especial de representación judicial que anexo al presente memorial; de manera muy respetuosa y, dentro de los términos legales, procedo a interponer y sustentar el recurso extraordinario de anulación en contra del Laudo Arbitral proferido el 05 de marzo de 2024 dentro del expediente de la referencia.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y siguientes de la Ley No. 1563 de 2012, *“Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”* y, con fundamento en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I. OPORTUNIDAD.

El numeral tercero del Acta No. 32 del 13 de marzo de los corrientes, proferida dentro del proceso de la referencia y, por medio de la cual se resolvió las solicitudes de Aclaración, corrección y adición de las partes; ordenó su notificación por correo electrónico, a cada una de las partes y al Ministerio Público¹.

En ese orden de ideas, el mensaje de datos fue remitido el mismo 13 de marzo de 2024, al entonces apoderado especial de EMCALI EICE ESP.

No obstante, tal y como lo ordena el numeral tercero de la referida Acta, la notificación se realizó de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley

¹ **“Tercero:** Notificar por Secretaría esta providencia a las partes y al Señor Agente del Ministerio Público, a través de medios electrónicos, según lo habilita el artículo 23 de la Ley 1563 de 2012, en concordancia con el artículo 9 de la Ley 2213 de 2022.

Notifíquese por correo electrónico.” (Negritas por fuera del texto original)

1563 de 2012², en concordancia con lo establecido en el **artículo 9° de la Ley 2213 de 2022**³.

Por ende, es necesario precisar que, el artículo 1° de la citada Ley 2213 de 2022⁴, señala que las disposiciones de dicho cuerpo normativo que adoptan como legislación permanente el Decreto 806 de 2020, son aplicables, entre otros, a las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales **y a los procesos arbitrales.**

Conforme lo anterior, es aplicable no solamente el artículo 9° de la citada Ley 2213 de 2022, sino la totalidad de las disposiciones de esta.

² “**Artículo 23.**Utilización de medios electrónicos. *En el proceso arbitral podrán utilizarse medios electrónicos en todas las actuaciones y, en particular, para llevar a cabo todas las comunicaciones, tanto del tribunal con las partes como con terceros, para la notificación de las providencias, la presentación de memoriales y la realización de audiencias, así como para la guarda de la versión de las mismas y su posterior consulta.*”

³ “**Artículo 9°. Notificación por estado y traslados.** *Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente, con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva.*

No obstante, no se insertarán en el estado electrónico las providencias que decretan medidas cautelares o hagan mención a menores, o cuando la autoridad judicial así lo disponga por estar sujetas a reserva legal.

De la misma forma podrán surtirse los traslados que deban hacerse por fuera de audiencia.

Los ejemplares de los estados y traslados virtuales se conservarán en línea para consulta permanente por cualquier interesado.

Parágrafo. Cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por Secretaría, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. ”

⁴“ **Artículo 1°. Objeto.** *Esta Ley tiene por objeto adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020 con el fin de implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria, así como las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales **y en los procesos arbitrales.***”

Conforme a lo expuesto, **la notificación electrónica se entiende practicada, de conformidad con el artículo 8° de la Ley en cita, dos (02) días después de recibido el respectivo mensaje de datos⁵**, que en el presente caso, sería el 15 de marzo.

En consecuencia de lo antedicho, el recurso extraordinario de anulación, se está interponiendo y sustentado, dentro del término legal dispuesto al efecto.

Establece el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, que:

***“Artículo 40. Recurso extraordinario de anulación.** Contra el laudo arbitral procede el recurso extraordinario de anulación, que deberá interponerse debidamente sustentado, ante el tribunal arbitral, con indicación de las causales invocadas, dentro de los treinta (30) días siguientes a su notificación o la de la providencia que resuelva sobre su aclaración, corrección o adición. Por secretaría del tribunal se correrá traslado a la otra parte por quince (15) días sin necesidad de auto que lo ordene. Vencido aquel, dentro de los cinco (5) días siguientes, el secretario del tribunal enviará los escritos presentados junto con el expediente a la autoridad judicial competente para conocer del recurso”.* (Negrillas y subrayas, ajenas al texto original).

Ahora bien, como ya se indicó, el Laudo Arbitral objeto del presente recurso extraordinario de anulación, fue notificado en Audiencia del 05 de marzo de 2024, mismo frente al cual, se solicitó su Aclaración, Corrección y Adición, la cual fue resuelta mediante Auto No. 47 del 13 de marzo hogaño.

Luego bien, inicialmente, el término de los 30 días a que hace alusión el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, vencía el 02 de mayo de 2024, no obstante, y, como quiera que se trata de un término de carácter legal, el cual corre para la presentación de un recurso cuyo conocimiento será de cargo de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el mismo tiene la connotación, a su vez, de **término judicial**.

⁵ **“Artículo 8°. Notificaciones personales.** Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.

El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.

*La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos **dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje (...)**”*

Así las cosas, es preciso recordar que, el Consejo Superior de la Judicatura suspendió términos los días 26 y 27 de marzo de 2024 con ocasión de la Vacancia judicial por el receso de Semana Santa, días a los cuales, se debe sumar el día feriado del 01 de mayo de 2024 (Ley 51 de 1983, “*Por la cual se traslada el descanso remunerado de algunos días festivos*”); razón por la cual, el término judicial para la interposición y sustentación del presente recurso extraordinario, **vence el 06 de mayo de la presente anualidad; interponiéndose y sustentándose el mismo, en términos.**

II. ARGUMENTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA EN CONTRA DEL LAUDO ARBITRAL DE FECHA 05 DE MARZO DE 2024.

Atendiendo al principio de taxatividad legal que rige las causales sobre las cuales se debe sustentar el recurso extraordinario de anulación contra Laudos Arbitrales; de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 y de manera preliminar, informo que se acudirá a las siguientes, contenidas en la norma *ibídem*:

“Artículo 41. Causales del recurso de anulación. Son causales del recurso de anulación:

(...)

*2. La caducidad de la acción, **la falta de jurisdicción o de competencia**.*

(...)

*7. **Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho**, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.*

*8. **Contener el laudo disposiciones contradictorias**, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que **estén comprendidas en la parte resolutive** o influyan en ella y hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral.*

(...)

Las causales 1, 2 y 3 sólo podrán invocarse si el recurrente hizo valer los motivos constitutivos de ellas mediante recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia”. (Negrillas y subrayas, ajenas al texto original).

En consecuencia, a continuación, se procederá a sustentar en debida forma, cada una de ellas:

a. Causal: La falta de jurisdicción o de competencia.

En primer lugar, es importante precisar que, el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 - anteriormente transcrito -, exige como requisito para poder alegar la causal de anulación que ahora nos ocupa, el hecho que, durante el trámite arbitral, la misma circunstancia hubiera sido expuesta mediante interposición del recurso de reposición en contra del Auto de asunción de competencia.

Luego bien, como se desprende del mismo Laudo Arbitral de la referencia, el Acta mediante la cual el Tribunal Arbitral asumió competencia, esto es, el Acta No. 09 del 21 de junio de 2023, proferida dentro de la Primera Audiencia de Trámite; fue recurrida en Reposición por el entonces apoderado especial de EMCALI EICE ESP; recurso que fue resuelto mediante Acta No. 10 del 28 de junio de 2023, a través de la cual, el Panel Arbitral NO repuso su decisión y confirmó su propia competencia.

Por tal razón, ostentamos legitimidad procesal, para alegar la causal de Falta de competencia dentro del presente recurso extraordinario de anulación.

De otro lado y, entrando en la materia propiamente dicha de la causal que llama nuestra atención, resulta imprescindible traer a colación el texto exacto de la Cláusula compromisoria pactada entre las partes en el Contrato de compartición No. 500-GE-CIE-0618-2016, suscrito el 17 de mayo de 2016, como quiera que es, precisamente, dicha disposición, la que irroga de competencia y le fija los límites, al Panel Arbitral:

“DÉCIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. - El presente acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de la República de Colombia. Las partes buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa **las diferencias o discrepancias surgidas durante la ejecución del presente Acuerdo** y para el efecto, se pacta el siguiente procedimiento de solución de controversias: (...).

(v) Surtido este término sin llegar a un acuerdo, se convocará un tribunal de arbitramento que funcionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali, que se constituirá, deliberará y decidirá de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali, en la Ley 1563 de 2012 y demás disposiciones concordantes o complementarias, o por las que las modifiquen, adicionen, reglamenten o sustituyan, de acuerdo con las siguientes reglas: los costos del tribunal será asumidos por partes iguales, sin perjuicio de que la Parte vencida reembolse a la otra Parte los gastos en que esta parte incurrió; el tribunal estará conformado por un (1) o por tres (3) árbitros, en este último caso si la cuantía de la controversia supera los 400 SMLMV. Cuando el tribunal esté integrado por (1) un árbitro este deberá ser nombrado de común acuerdo entre las partes; cuando sean tres árbitros, cada parte designará uno de ellos y el tercero será nombrado de común acuerdo entre las partes. En caso que no haya acuerdo en la designación conjunta de un árbitro, este será designado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio

de Cali. Cada árbitro deberá ser abogado colombiano y su decisión será en derecho. En cualquier caso, el fallo de los árbitros tendrá los efectos que la Ley da a tales laudos.” (Negrilla y subrayas, ajenas al texto original).

Como de suyo es entonces, cuando en la Cláusula compromisoria se hace referencia a las *diferencias o discrepancias surgidas durante la ejecución del ... Acuerdo*, no puede hacer referencia o entenderse cosa distinta de las diferencias surgidas entre las partes, frente a la ejecución del objeto contractual pactado y/o cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas de forma expresa, en el Contrato de Compartición No. 500-GE-CIE-0618-2016.

Al efecto, la Cláusula primera del Contrato de Compartición No. 500-GE-CIE-0618-2016, estableció su objeto contractual, consagrando que mediante el mismo se permitía el “(...) *el uso remunerado, no exclusivo, de la infraestructura aérea y subterránea del distribuidor de energía de **EMCALI EICE ESP**, para la prestación de servicios de comunicaciones y/o televisión por parte de **TELMEX***”.

Como bien lo reconoce el Panel Arbitral en el Laudo que hoy es objeto de recurso de anulación, ninguna obligación se pactó en relación con el suministro de energía, a saber:

“Su objeto (cláusula primera (1)) es que Comcel SA utilice a título oneroso la infraestructura destinada por las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE al servicio de Energía Eléctrica para instalar los equipos que utiliza la prestación de servicios de telecomunicaciones, incluyendo televisión, internet y telefonía, siendo el precio mensual (Cláusula quinta (5)) el que resulte de multiplicar la cantidad de usos, conductores, equipos y otros elementos que conforman la infraestructura, por los valores establecidos, anotando que, ni la norma ni las Partes, incluyeron como guarismo para el cálculo de la contraprestación el precio del kilovatio de energía eléctrica consumido por los equipos. La única referencia en ese contrato a dicho servicio, fue el pacto contenido en el numeral 10 de la cláusula séptima (7) según el cual, cuando la Convocante requiera consumo de Energía Eléctrica para los equipos instalados en la infraestructura de Energía Eléctrica, demuestre al supervisor del Contrato cada dos (2) meses el pago de las facturas, infiriéndose de todo ello, que la ausencia de cláusulas en el Contrato de Compartición dirigidas a regular lo referente a la alimentación de los equipos con Energía Eléctrica significa que se trata de una relación jurídica separada pero complementaria¹⁸, pues sin energía eléctrica el Contrato de Compartición no cumple la finalidad para la que el usuario de la infraestructura lo celebró”. (Inciso 4 de la página 30 del Laudo Arbitral de fecha 05 de marzo de 2024) (Negrillas y subrayas, ajenas al texto original).

Pese a lo anterior, el Tribunal de Arbitramento reconoció su propia competencia para conocer y dirimir la controversia planteada por la Convocante, por cuanto consideró que el Contrato de Condiciones Uniformes que regula el suministro de energía, era un contrato coligado y connatural al Contrato de Compartición No. 500-GE-CIE-0618-2016. Así lo estableció en el Acta No. 10 del 28 de junio de 2023,

emitida dentro de la continuación de la primera Audiencia de Trámite, como pasa a verse:

*“El Tribunal tampoco acogió la tesis de la Parte Convocada donde señala que **las pretensiones giran en torno a obligaciones que no son propias del contrato de Compartición, sino de un contrato de Condiciones Uniformes** el cual es un contrato autónomo e independiente regido por la Ley 142 y 143 de 1994 **al que no se hace extensiva la Cláusula Compromisoria pactada**, porque de antiguo, la jurisprudencia colombiana interpretó que el régimen jurídico aplicable de los actos y contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios es el propio del derecho privado y a lo que el usuario y el respectivo prestador convengan o este último disponga en los contratos tipificados como de Condiciones Uniformes². Sin embargo, **la ley no prohíbe que en un mismo contrato celebrado por un prestador de servicios públicos subyazcan diferentes relaciones jurídicas ni que se pacte para la ejecución de un objeto contractual determinado el suministro de energía como obligación accesorio a ellos**, particularmente, como sucede en los contratos denominados Especiales por el artículo 39 de la ley 142 de 1994 que requieren dicho suministro como parte de las obligaciones del prestador del servicio público para que su contraparte contractual logre el fin que busca con su celebración. El contrato de Compartición objeto de esta controversia se tipifica entre los contratos especiales que ordinariamente celebran los prestadores de servicios públicos por el numeral 39.4 de la Ley 142 de 1994, el que aun cuando contiene obligaciones expresamente pactadas, no hace posible afirmar que los sujetos contractuales solo queden obligados a estas, desatendiendo la finalidad que busca cada una de ellas al celebrar dicho contrato, pues esa posición contraviene el principio de la buena fe en materia contractual que dispone que los sujetos contractuales no están obligados solo a lo pactado en el contrato, sino a todo lo que corresponde a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural atendiendo siempre la utilidad común del Contrato.*

***Observa el Tribunal, de acuerdo con el objeto del contrato y con el uso que la Convocante haría de la infraestructura de la Convocada, que el suministro de energía era sustantivo para que el uso de la infraestructura fuera útil para la Convocante, pues sin este, los equipos no funcionarían al no tener fuentes de poder autónomas.** Necesidad del servicio que la Convocada conocía y explica el por qué se impuso contractualmente a la Convocante la obligación de entregarle periódicamente los recibos de pago correspondientes a los consumos.*

*Pero, más allá del hecho de que el servicio de energía eléctrica se rija por las leyes 142 y 143 de 1994 y **las cláusulas impuestas por la Convocada como condiciones uniformes para la prestación de dicho servicio**, debe señalarse que ello no excluye la competencia del Tribunal, pues al fin y al cabo el suministro de energía se enmarcó en las prestaciones derivadas del Contrato objeto de este proceso, a lo cual debe agregarse que las súplicas de la demanda reformada, precisamente tienen su objeto y causa en típicas controversias surgidas con ocasión de dicho vínculo negocial.*

En efecto, la pretensión (2) segunda de la demanda arbitral involucra el Contrato de Compartición No. 500-GE-CIE-0618-2016 del 17 de mayo de 2016 porque está dirigida a que el Tribunal estudie y declare si la Convocada incumplió o no las siguientes obligaciones pactadas en dicho Contrato: (i) Ordinal 10 del numeral 7.1.,

y ordinales 1 y 3 de la cláusula 7.2, ambas de la cláusula séptima, (ii) numeral 10 de la cláusula octava (8) (iii) parágrafo primero de la cláusula novena (9) acompañadas con las pretensiones principales económicas o de condena.

Realizada la comparación entre lo pedido en las precitadas pretensiones con el tenor literal de la Cláusula Compromisoria pactada en la cláusula decimoquinta (15) del citado contrato, surge diáfana la Competencia de este Tribunal, dado que todas las pretensiones se tratan de “s diferencias o discrepancias surgidas durante la ejecución del presente Acuerdo” y por ello, el Tribunal ratificó su decisión de declararse competente.

Tampoco puede perderse de vista que, en el numeral 10 del Ordinal 7.1. de la cláusula séptima (7) del Contrato objeto de este litigio, las Partes **incluyeron la posibilidad de suministrar de energía en caso de que la Convocada (sic) lo solicitara** por ser necesaria para que las fuentes de poder instaladas en la Infraestructura Eléctrica funcionaran **sin pactaran como formalidad la adhesión o suscripción del contrato de condiciones uniformes**. Así, quedó señalado:

“10.- En el evento que TELMEX requiera consumos de Energía para los equipos conectados directamente a las redes de energía de. EMCALI EICE ESP, TELMEX deberá demostrar periódicamente su pago. Para tal efecto, el supervisor requerirá, mínimo cada DOS (2) meses, las facturas debidamente canceladas”.

Estipulación contractual que señala que el suministro de energía si era considerado como parte del contenido prestacional del negocio jurídico materia de arbitraje y las controversias que sobre este se suscitaran se daban en desarrollo de este, motivo por el cual la prueba existente en el plenario deja claro para Tribunal que es competente para conocer las controversias, pues dicha actividad no era extraña, ajena e indiferente al desarrollo contractual, hasta el punto de que fue prevista como una de las prestaciones en cabeza de Empresas Municipales de Cali EICE la obligación de cerciorarse que las facturas emitidas por concepto de energía eléctricas estaban pagadas”. (Negritas y subrayas, ajenas al texto original).

No sobra advertir preliminarmente que, la condena finalmente impuesta a EMCALI EICE ESP, devino exclusivamente del supuesto incumplimiento en la prestación y suministro de energía; como más adelante se profundizará.

Luego bien, basta transcribir los mismos argumentos por los cuales el Tribunal de Arbitramento reconoció su propia competencia, para de ellos mismos, derivar que no le asistía la razón en dicho aspecto.

Manifestó el Tribunal de Arbitramento que, conforme a la ley no [se] prohíbe que en un mismo contrato celebrado por un prestador de servicios públicos subyazcan diferentes relaciones jurídicas ni que se pacte para la ejecución de un objeto contractual determinado el suministro de energía como obligación accesorio a ellos.

No obstante y, de forma contradictoria, dentro del mismo texto anteriormente transcrito, sostuvo que: “... las Partes **incluyeron la posibilidad de suministrar de energía en caso de que la Convocada (sic) lo solicitara** por ser necesaria para

que las fuentes de poder instaladas en la Infraestructura Eléctrica funcionaran ***sin pactaran como formalidad la adhesión o suscripción del contrato de condiciones uniformes (...)***

Razón por la cual, como bien lo advierte el Tribunal de Arbitramento, la Ley no prohíbe que, en efecto, dentro del Contrato de Compartición se pacte, para su eficaz ejecución y cumplimiento, otra clase de obligaciones como serían las propias de un Contrato de Condiciones Uniformes de suministro de Energía, pero, como también lo sostiene el Panel Arbitral, para el concreto caso del Contrato de Compartición No. 500-GE-CIE-0618-2016, FORMALMENTE no se acordó dicha suscripción o adhesión del Contrato de Condiciones Uniformes al Contrato de Compartición que nos ocupa, por ende, mal hizo al extender la voluntad de las partes contratantes e interpretar que se trataban de contratos coligados cuando, en ninguna parte del texto contractual, ello se dejó plasmado. Por igual razonamiento, tampoco se podía extender la Cláusula compromisoria del Contrato de Compartición, a las divergencias surgidas en el Contrato de Condiciones Uniformes de prestación – suministro de energía.

Ahora bien, sostiene el Panel Arbitral que, el suministro de energía era una obligación connatural - sustantiva para el eficaz cumplimiento del objeto contractual del Contrato de Compartición pues, de nada serviría poder hacer uso de la infraestructura eléctrica de Emcali EICE ESP si, los equipos que se instalarían a la misma y que requirieran de energía, no la pudieran obtener.

Dicha aseveración se desvirtúa de dos formas, a saber:

Dentro del Contrato de Compartición No. 500-GE-CIE-0618-2016, se acordó la siguiente obligación:

“10.- En el evento que TELMEX requiera consumos de Energía para los equipos conectados directamente a las redes de energía de. EMCALI EICE ESP, TELMEX deberá demostrar periódicamente su pago. Para tal efecto, el supervisor requerirá, mínimo cada DOS (2) meses, las facturas debidamente canceladas”.

Nótese como de la redacción de la anterior prestación, el suministro de energía era solo una eventualidad, una posibilidad a la cual podría hacer uso la Convocante (Hoy Comcel S.A), sólo en el hipotético caso de que así lo requiriera.

Luego bien, el solo hecho que, el suministro de energía fuera pactado como una mera eventualidad, desvirtúa que, tal prestación fuera, a su vez, connatural - sustantiva al Contrato de Compartición pues, lo sustantivo, lo natural a algo, lo impregna en su todo, lo acompaña siempre, no solo en meros eventos.

Aunado a lo antedicho, se desvirtúa esa con-naturalidad de la prestación del servicio de energía con un específico Contrato de Compartición, por lo mismo sostenido por el Panel Arbitral cuando argumentó que:

*“Aunque no desconoce la inescindibilidad del arrendamiento de la infraestructura con el del suministro de Energía Eléctrica, el Tribunal discrepa de la posición de COMCEL SA, por las razones expuestas en líneas precedentes, **recordando que la misma regulación establece que la alimentación de energía de los equipos instalados en la infraestructura se trata de un Servicio Adicional que puede ser contratado por el Arrendatario de la infraestructura con el mismo Arrendador de manera separada o escoger otro proveedor de Energía dentro de la libertad de selección que le otorga la ley.** Bajo este escenario, la discusión acerca de si el contrato que regula el servicio de Alimentación de Energía Eléctrica es de Condiciones Uniformes o no queda superada por el hecho que los Contratantes no celebraron un contrato de naturaleza diferente dirigido a regular explícitamente dicho Servicio”. (Negritas y subrayas, ajenas al texto original).*

En consecuencia, el error del Panel Arbitral para asumir competencia en este asunto, el cual, como más adelante se precisará, versó exclusivamente en obligaciones derivadas del suministro de energía, es decir, de un Contrato de Condiciones Uniforme NO coligado al de Compartición; fue en confundir la necesidad que, normalmente y por regla general, tiene un arrendatario de infraestructura eléctrica con el suministro de electricidad para el funcionamiento de sus equipos, y asumir que dicha necesidad se encontraba presente y se concretó y/o manifestó específicamente en el Contrato de Compartición No. 500-GE-CIE-0618-2016, pues, como ya se explicó, ello se pactó como una mera posibilidad – eventualidad pudiendo entonces la parte Convocante, en caso de que así lo requiriera, contratar ese suministro de energía con EMCALI EICE ESP **o con otro prestador diferente**; eventualidades y posibilidades al alcance de Comcel S.A. que, por dicha misma razón, explican la NO con-naturalidad de la prestación del servicio - suministro de energía para el Contrato de Compartición objeto del arbitraje, misma razón y fundamento que, se insiste, explica la inviabilidad de que se extendiera la Cláusula compromisoria al Contrato de Condiciones Uniformes (Suministro de energía).

A la anterior conclusión hubiera arribado el Panel Arbitral si, en lugar de acudir a interpretaciones históricas, consultar el espíritu de los contratantes o tergiversar la mala fe de Comcel S.A. en el no reporte de los equipos instalados y atribuírsela a EMCALI EICE ESP, y, por el contrario, se hubiera atendido al sentido claro y natural de las palabras invocadas en el Contrato de Compartición No. 500-GE-CIE-0618-2016.

Un simple análisis de las razones y motivaciones por las cuales se condenó a EMCALI EICE ESP, nos dan la entera razón frente a la incompetencia del Tribunal de Arbitramento en este asunto, como pasa a verse:

¿Se condenó a EMCALI EICE ESP por impedir, obstaculizar o retirar los equipos de Comcel S.A. de su infraestructura eléctrica, los cuales eran el objeto del Contrato de Compartición? Respuesta: No.

¿Se condenó a EMCALI EICE ESP por la desconexión (justificada) de la energía que suministraba a los equipos de Comcel S.A., ante su no reporte y pago oportuno, lo cual es objeto de un Contrato de Condiciones Uniformes? Respuesta: Sí.

En el mismo sentido: ¿La Cláusula compromisoria que le dio competencia al Tribunal de Arbitramento, se encontraba pactada en el Contrato de Compartición o en algún Contrato de Condiciones Uniformes? Respuesta: En el Contrato de Compartición.

Cualquier análisis diferente o adicional que se efectuara para determinar la competencia del Tribunal de Arbitramento en el asunto que nos ocupa, era tratar de tergiversar el sentido claro y diáfano del Contrato de Compartición No. 500-GE-CIE-0618-2016 y, por ende, la voluntad de las partes contratantes.

Bien nos lo enseñaba el Código Civil, cuando regulaba la interpretación de la ley:

“Artículo 27. Interpretación gramatical. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu.

Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento.

Artículo 28. Significado de las palabras. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal”. (Negrillas y subrayas, ajenas al texto original)

b. Causal: Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, **siempre que estén comprendidas en la parte resolutive** o influyan en ella y hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral.

Frente a esta causal de anulación del Laudo Arbitral que es objeto del presente recurso, es importante manifestar que, NO se acude a ella de forma directa sino, en apoyo de la anterior causal de Falta de competencia, como quiera que, en la parte resolutive del Laudo Arbitral del 05 de marzo de 2024, se adoptó una decisión que, precisamente, corrobora la Falta de competencia del Tribunal de Arbitramento para haber asumido el conocimiento de la presente causa y, por ende, contraría esa decisión inicial de asunción de competencia.

Por tal razón, con base en esta causal no se sustentará una pretensión autónoma, propiamente dicha, sino que se adherirá a la que se peticionará para la causal de Falta de competencia.

En efecto, en la parte Resolutiva del Laudo Arbitral proferido dentro de la Radicación No. A-20220927/0873, se determinó:

*“Primero: **Tener por demostradas parcialmente las Excepciones de “Falta de Jurisdicción” y “Falta de Competencia” propuestas por la convocada Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P., en su escrito de contestación de la demanda arbitral reformada, únicamente respecto de las pretensiones primera y segunda de las Pretensiones Condenatorias Principales**, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte considerativa de este Laudo Arbitral”.* (Negrillas y subrayas, ajenas al texto original)

Como sustento de la anterior decisión, en la parte motiva se indicó:

*“En los demás aspectos referidos en el peritaje y su contradicción, el Tribunal observa que **unos conceptos** son de contenido netamente jurídicos para lo que no son útiles y otros **referidos a aspecto de liquidación de valor de energía, respecto de lo cual se itera el Tribunal no tiene competencia para pronunciarse**”.*

(...)

*El Tribunal considera que la reconexión del servicio de energía es un rubro o concepto inherente al Contrato de Condiciones Uniformes y no al Contrato de Compartición que es materia de este proceso; en el primero es que encuentra su regulación y disciplina, pero no en el segundo, por lo que, **siguiendo los planteamientos efectuados en este laudo arbitral en punto de la competencia del Tribunal, limitada al Contrato de Compartición, no accederá a dicha súplica en la medida en que es otro el escenario en donde debió ser discutida**. Por ello, luego de analizado el caudal probatorio y revisado con detenimiento las alegaciones de las partes, ese específico rubro cuya reparación se solicita en el proceso no puede ser abordado con base en el Contrato de Compartición y, en consecuencia, no se adentrará el Tribunal en el estudio de fondo de dicha pretensión por carencia de competencia al efecto”.* (Negrillas y subrayas, ajenas al texto original)

Luego bien, la primera flagrante contradicción en la que se incurre con la prementada decisión es que, el Tribunal de Arbitramento, en el Acta de asunción de conocimiento, como en aquella que resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de aquella; se declaró competente para conocer de LA TOTALIDAD de la controversia planteada por la parte convocante.

Por ende, no podía, en la parte Resolutiva del Laudo Arbitral que nos ocupa, declararse incompetente para conocer de cierta parte de la controversia planteada por la parte Convocante.

Lo anterior, precisamente por vulneración al principio de no contradicción o de identidad, el cual nos enseña que, algo no puede ser y no ser, a la misma vez. Es decir, o el Tribunal de Arbitramento era competente para conocer en todo del asunto que se sometió a su conocimiento, o lo era solo en una parte o no lo era en nada (como efectivamente acontecía); pero no podía, a la misma vez, ser competente para conocer de TODA la controversia y no ser competente para conocer PARTE de dicha controversia.

La segunda gran contradicción en la que se incurrió con la toma de la decisión anteriormente transcrita es que, precisamente, las pretensiones frente a las cuales se declaró incompetente el Tribunal Arbitral, estaban referidas a las pretensiones primera y segunda condenatorias principales, esto es, las relacionadas con la devolución del dinero que pagó Comcel S.A. por lo que denominaba una reconexión ilegal o producto de una suspensión arbitraria - ilegal.

No obstante, EMCALI EICE ESP fue paradójicamente condenado, por lo que denominó el Tribunal de Arbitramento, una suspensión arbitraria e ilegal del servicio o suministro de energía, lo cual, produjo unos daños en los usuarios de Comcel S.A. a quienes, la Convocante tuvo que compensar.

Pues bien, siguiendo la misma línea adoptada para la primera contradicción, no puede ser lógico que, el Tribunal Arbitral se declare impedido para conocer de la devolución de un dinero pagado por una reconexión que, tildó, fue consecuencia de la suspensión arbitraria del servicio de energía pero, a su vez, termine condenando a EMCALI EICE ESP, precisamente, por esa misma suspensión denominada arbitraria y, mucho menos, cuando los perjuicios a los que se le condenó no fueron causados directamente a Comcel S.A. sino que, fueron causados y pagados en compensación, a la comunidad universal de sus servicios, es decir, unos perjuicios indirectos o accesorios de terceros, ajenos a la relación contractual del Contrato de Compartición.

Lo anterior, igualmente, en acatamiento estricto de la máxima que nos enseña que la suerte de lo accesorio sigue la de lo principal, para este caso, si existió incompetencia para pronunciarse sobre el pago directo por una reconexión del servicio, producto de una suspensión arbitraria del suministro de energía; los perjuicios a terceros que dicha suspensión hubiera ocasionado, también debían seguir la misma suerte del pago principal de reconexión y, por ende, el Panel Arbitral declararse incompetente sobre los mismos.

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, insistimos en la Falta de competencia absoluta del Tribunal de Arbitramento para haber conocido de la controversia puesta a su consideración por parte de Comcel S.A., insistencia que es perfectamente viable, de conformidad con lo sostenido por la H. Sala Plena de la Corte Constitucional, en sentencia SU 174 de 2007, a saber:

*“En efecto, el numeral 2 del artículo 147 del Decreto 1818 de 1998, que reprodujo el texto del artículo 124 de la Ley 446 de 1998, dispone que en la primera audiencia de trámite, ‘el Tribunal resolverá sobre su propia competencia mediante auto que sólo es susceptible de recurso de reposición’. Si los árbitros se declaran incompetentes, el efecto previsto en la ley es que ‘se extinguen definitivamente los efectos del pacto arbitral’ (artículo 124 de la Ley 446 de 1998). **Esta competencia básica no implica, por supuesto, que los árbitros sean los únicos jueces con potestad para establecer el alcance de su propia competencia. Las decisiones del tribunal arbitral sobre su propia competencia también pueden ser objeto de recursos judiciales como el de anulación,** con base en la causal contenida en el numeral 8 del artículo 38 del Decreto 2279 de 1989 (el cual fue compilado en el numeral 8 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998) y en el numeral 4 del artículo 72 de la Ley 80 de 1993 (el cual fue compilado en el numeral 4 del artículo 230 del Decreto 1818 de 1998)” (Negrillas y subrayas, ajenas al texto original).*

c. Causal: Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.

Como ya se ha dejado entrever de la argumentación en precedencia, la decisión del Tribunal de Arbitramento NO se sustentó en estipulaciones y/u obligaciones contractuales contenidas en el Contrato de Compartición No. 500-GE-CIE-0618-2016 si no que, para poder fundamentar la condena que finalmente se impuso en contra de EMCALI EICE ESP, el Panel Arbitral, tuvo que extender la interpretación de la Cláusula Compromisoria contenida en el Acuerdo de Compartición, no solo hasta la relación jurídica del Contrato de Condiciones Uniformes sino también, hasta las relaciones contractuales de la Convocante, Comcel S.A., con sus usuarios de los servicios de Telecomunicaciones, internet y televisión; ajenos todos ellos, de forma total, a mi procurada.

Ahora bien, en el Laudo Arbitral fechado el 05 de marzo de 2024, se resolvió lo siguiente:

“(…)

Tercero: *Acceder parcialmente a las pretensiones primera, segunda y tercera declarativas principales de la demanda arbitral reformada presentadas por la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., en contra de las Empresas Municipales de Cali EMCALI E.I.C.E. E.S.P.y, por ende, **DECLARAR** que:*

- i) **Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.**, es civil y contractualmente responsable por incumplir las obligaciones contractuales como legales que rigen el Contrato de Compartición No. 500-GE-CIE-0618-2016 del 17 de mayo de 2016, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte considerativa de este Laudo Arbitral.
- ii) **Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.**, incumplió las obligaciones contractuales pactadas en el Contrato de Compartición No. 500-GE-CIE-0618-2016 del 17 de mayo de 2016, respecto de los numerales 3º del punto 7.2 de la Cláusula Séptima, el 10º de la Cláusula Octava, el parágrafo primero de la cláusula novena y cláusula décimo quinta, de conformidad y bajo el entendido de lo expuesto por el Tribunal en las consideraciones.
- iii) **Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.**, incumplió las obligaciones legales que rigen el Contrato de Compartición No. 500-GE-CIE-0618-2016 del 17 de mayo de 2016, esto es, los siguientes artículos: numeral 9.3 del artículo 9º y 30º de la Ley 142 de 1994 y el artículo 4.11.1.8 de la Resolución CRC 5890 de 2020, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa.

(...)

Sexto: Acceder a la pretensión sexta de las pretensiones declarativas principales de la demanda arbitral reformada presentada por la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., en contra de las Empresas Municipales de Cali EMCALI E.I.C.E. E.S.P.y, por ende, **DECLARAR** que, con ocasión al incumplimiento contractual y legal del Contrato de Compartición No. 500-GE-CIE-0618-2016 del 17 de mayo de 2016 por parte de la Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P., se causó daños y perjuicios a Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte considerativa de este Laudo Arbitral.

Séptimo: Acceder parcialmente a la pretensión séptima declarativa principal de la demanda arbitral reformada presentada por la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., en contra de las Empresas Municipales de Cali EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y, por ende, **DECLARAR** que los referidos daños y perjuicios ocasionados a la convocante, están constituidos por la compensación a usuarios afectados por la suspensión del servicio de energía a las fuentes de poder debidamente indexados, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte considerativa de este Laudo Arbitral.

(...)

Décimo: Acceder parcialmente a la pretensión tercera condenatoria principal de la demanda arbitral reformada, en el sentido de, **CONDENAR** a las Empresas Municipales de Cali EMCALI E.I.C.E. E.S.P., a **PAGAR** en favor de la convocante Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., la suma de \$1.091.609.799 debidamente indexada a la fecha del Laudo Arbitral, suma que asciende a la suma de **MIL**

TRESCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE. (\$1.304.936.606,00), en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte considerativa de este Laudo Arbitral.

(...)

Décimo Segundo: Condenar en costas a la parte convocada Empresas Municipales de Cali EMCALI E.I.C.E. E.S.P. en favor de la convocante, Comunicación Celular Comcel S.A., por valor de **SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE. (\$797.229.616), por las razones expuestas en la parte considerativa de este Laudo Arbitral.**

Décimo Tercero: Sin lugar a la aplicación de la sanción prevista en el inciso cuarto del artículo 206 del Código General del Proceso ni tampoco de la pena prevista en el párrafo del mismo artículo, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte considerativa de este Laudo Arbitral.

(...)"

Para arribar a las anteriores decisiones, el Panel Arbitral consideró, entre otras cosas, que:

*"De consiguiente, a las claras, se advierte que la buena fe no es un principio de efímera y menos de irrelevante figuración en la escena jurídica, por cuanto está presente, in extenso, amén que con caracterizada intensidad, durante las etapas en comento, tanto más si la relación objeto de referencia es de las tildadas de "duración" [...] Quiere decir lo anterior que para evaluar si un sujeto determinado actuó o no de buena fe, resulta imperativo examinar, en cada una de las precitadas fases, la conducta por él desplegada, pero de manera integral, o sea en conjunto, dado que es posible que su comportamiento primigenio, en estrictez, se ciña a los cánones del principio rector en cita y ulteriormente varíe, en forma apreciable y hasta sorpresiva, generándose así su inequívoco rompimiento. De allí que la buena fe no se pueda fragmentar, en orden a circunscribirla tan sólo a un segmento o aparte de una fase, por vía de ejemplo: la precontractual – o parte de la precontractual–, ya que es necesario, como corresponde, auscultarla in globo, según se indicó, valorando las diversas oportunidades que los interesados tuvieron para actuar con lealtad, corrección (correttezza) y diligencia, según sea el caso. Al fin y al cabo, sin excepción, ella se predica de la integridad de eslabones que, analizados en retrospectiva, conforman la cadena contractual (iter contractus), rectamente entendida. No es gratuito que el citado artículo 863 del Código de Comercio, expressis verbis, establezca un débito de comportamiento que cobija todo el "... período precontractual", sin distingo de ninguna especie"*²⁹

(...)

Inclusive, la buena fe se proyecta cuando en desarrollo de una relación jurídica los particulares o la administración no cumplen los procedimientos legal o contractualmente establecidos para la toma de una decisión que afecte a su contraparte contractual.

(...)

*Todos los testimonios recibidos durante este trámite arbitral, encuentran su común denominador en que **el desacuerdo entre las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE y COMCEL S.A., tuvo su génesis en la instalación por parte de la última en la infraestructura de la primera, de equipos para prestar el Servicio Público de Comunicaciones de manera irregular amparado en el contrato de compartición No. 500-GE-CIE-0618 de 2016 el cual desembocó en una discrepancia en cuanto al consumo real de Energía Eléctrica**, la posterior suspensión imprevista de dicho Servicio mientras se desarrollaban tratativas para superar la controversia, condicionando las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE su restablecimiento a que COMCEL SA pagara una suma de dinero en la que estaba en desacuerdo.*

(...)

*Lo relativo al no reporte de equipos utilizados con conexiones de fuentes de poder sin autorización de las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE, la cláusula novena (9) y su parágrafo primero deben ser interpretadas armónicamente con el procedimiento dispuesto por el artículo 4.11.1.8 de la Resolución CRC 5890 del 24 de enero de 2020 cuando el usuario de la Infraestructura Eléctrica no acceda al pago de facturas por los Servicios Adicionales que recibe del Operador de Telecomunicaciones, caso de mora en el cual, **el Arrendatario (sic) de la Infraestructura podrá “suspender provisionalmente el acceso y uso de la infraestructura eléctrica, previo aviso a la CRC y al proveedor de redes o servicios de telecomunicaciones con no menos de (15) quince días hábiles de anticipación y hasta tanto se supere la situación que generó la suspensión.** Lo anterior sin perjuicio de que la CRC en ejercicio de sus funciones, de oficio o a solicitud de parte, solicite información adicional para efectos de hacer un seguimiento a la suspensión informada.”*

Lo anterior significa que si bien es un derecho del arrendador de la Infraestructura suspender el servicio de Alimentación de energía que provee al Arrendatario de esta como Usuario de un Servicio Adicional, no le permite hacerlo intempestivamente sino que debe haber una notificación expresa y suficiente antes de realizar la suspensión pues por tratarse de un acto administrativo definitivo debe permitirse al Arrendador (sic) de la Infraestructura que es Usuario del Servicio Público de Energía Eléctrica ejercer su derecho constitucional y legal al debido proceso.

(...)

10. Por lo demás, en la sentencia C-150 de 2003, al examinar la constitucionalidad del párrafo del artículo 130 de la Ley 142 de 1994, adicionado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001, en virtud del cual las empresas de servicios públicos están obligadas a suspender el servicio del usuario o suscriptor que incumpla “su obligación de pagar oportunamente los servicios facturados dentro del término previsto en el contrato, el cual no excederá dos períodos consecutivos de facturación”, la Corte sostuvo que esta prerrogativa era constitucional. No obstante, especificó que lo era siempre y cuando en su aplicación a situaciones concretas **se respetara “el derecho al debido proceso de los usuarios de buena fe, específicamente los derechos de defensa y contradicción”**. Y el respeto por estos derechos significa, según esta misma decisión de la Corte, el derecho de “los usuarios o suscriptores [a] contradecir efectivamente tanto las facturas a su cargo⁴² como el acto mediante el cual se suspende el servicio⁴³ y también obligan a las empresas prestadoras de servicios públicos a observar estrictamente el procedimiento que les permite suspender el servicio⁴⁴. El derecho al debido proceso incorpora también el derecho a que se preserve la confianza legítima **del usuario de buena fe** en la continuidad de la prestación del servicio si éste ha cumplido con sus deberes”.

(...)

12. En efecto, el derecho al debido proceso de los usuarios o suscriptores de servicios públicos no es un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de los demás derechos fundamentales. Estos últimos se salvaguardan si existe una prestación eficiente y continua de servicios públicos domiciliarios de calidad. El derecho al debido proceso sirve para evitar posibles errores de las empresas prestadoras de servicios públicos, en tanto les da oportunidad de conocer información y opiniones de los usuarios, que pueden resultar útiles o necesarias para determinar si debe suspenderse, terminarse o cortarse un servicio público domiciliario. Así, el derecho a un recurso contribuye a evitar que se le suspenda o corte el servicio al propietario de un inmueble por deudas con la empresa de servicios, **cundo no esté obligado a pagar por ellas debido a su buena fe**. El derecho a un recurso también podría evitar que al propietario de un inmueble se le suspenda el servicio, de suerte que no se cause como efecto un desconocimiento de derechos constitucionales a sujetos de especial protección.⁴⁹ También contribuiría a impedir la suspensión de servicios que sean precisos para el funcionamiento de hospitales u otros establecimientos especialmente protegidos,⁵⁰ o para que no se afecten gravemente las condiciones de vida de toda una comunidad.

(...)

... Gustavo Tamayo Arango, asesor externo de la Convocante, expresó que COMCEL y EMCALI acordaron “(...) dejar eso en manos de un amigable componedor que fuera experto en materia de energía y que técnicamente que dijera cuánto se había consumido en esos re aforos y cuánto correspondía”, a lo que

agregó que **elaboró, por encargo de las partes, “un contrato de transacción para que firmáramos las partes” que, a pesar de haberse remitido a la Convocada, nunca fue firmado por COMCEL, declaración que es coincidente con lo expresado por Juan Pablo Vinueza e Hilda María Pardo Hasche**” (Negrillas y subrayas, ajenas al texto original).

Con la finalidad de no perder de vista los argumentos hasta ahora transcritos de la parte motiva del Laudo Arbitral que nos ocupa, así como para brindarle coherencia y organización al presente recurso; es importante resaltar cómo, el Tribunal de Arbitramento, reconoce que el conflicto suscitado entre EMCALI EICE ESP y COMCEL S.A., “(...) ... , **tuvo su génesis en la instalación por parte de la última en la infraestructura de la primera, de equipos para prestar el Servicio Público de Comunicaciones de manera irregular amparado en el contrato de compartición No. 500-GE-CIE-0618 de 2016 el cual desembocó en una discrepancia en cuanto al consumo real de Energía Eléctrica ...**”

Es decir, el Panel Arbitral, reconoce de manera primigenia y amparado en las declaraciones vertidas en el proceso que, la mala fe en la instalación de los equipos NO reportados a EMCALI EICE ESP, provino inicialmente de la parte convocante, es decir, de Comcel S.A., única parte beneficiada en que dichos equipos no generaran reporte sobre consumo de energía.

De igual manera se resalta la jurisprudencia citada por el mismo Panel Arbitral, referente a que, la buena fe se debe examinar de manera integral, no se puede fragmentar en las partes del proceso por cuanto, como resulta lógico en procedimientos que se extienden en el tiempo, dichos comportamientos pueden variar.

Luego de hacerse referencia al proceso de arreglo directo que estaban entablando las partes para dirimir las diferencias en cuanto a los consumos de energía por parte de los equipos no reportados e, incluso, tras advertir que se realizó un borrador de un contrato de transacción que NO FIRMÓ COMCEL; brilla por su ausencia, cualquier valoración de dicha conducta desplegada por la parte convocante y, los consecuentes perjuicios que, una negociación indefinida en el tiempo pudieran acarrear para el acreedor de esos costos de energía, es decir, para EMCALI EICE ESP.

Finalmente, de forma abrupta, sin mediar consideración legal y/o en derecho alguna, se puede ir advirtiendo como, el Panel Arbitral, empieza a inclinar la balanza en contra de la parte convocada, esto es, EMCALI EICE ESP, para reprochar de esta, léase bien, que no necesariamente tuvo que ejercer su derecho a suspender los

servicios y/o suministro de energía, por cuanto, en su sentir, la buena fe también se proyecta “(...) *cuando en desarrollo de una relación jurídica los particulares o la administración **no cumplen los procedimientos legal o contractualmente establecidos** para la toma de una decisión que afecte a su contraparte contractual*”.

La anterior conclusión, por cierto, totalmente contradictoria con los antecedentes jurisprudenciales también citados por el mismo Panel Arbitral (sentencia C-150 de 2003); mismos que referían que esos derechos a la suspensión del suministro de energía, pueden ceder **ante usuarios de buena**; caso que no aplicaba para COMCEL S.A., por cuanto, como ya se argumentó, el mismo Tribunal de Arbitramento consideró que la instalación de equipos no reportados, inicialmente realizada por la parte convocante, **fue IRREGULAR.**

Continúa el Tribunal de Arbitramento, sosteniendo en la parte motiva del Laudo Arbitral fechado el 05 de marzo de 2024:

*“Las pruebas recaudadas no permiten concluir que las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE, **hubiera agotado el debido proceso frente al acto específico de suspensión de la alimentación de las fuentes de poder con energía**, notificando a COMCEL SA de dicha decisión, de acuerdo a lo previsto por la Ley 1437 de 2011, porque lo probado y alrededor de lo que giró el debate probatorio, fue que la discusión, se circunscribió al valor de la energía eléctrica siendo frente a este agotada la vía administrativa quedando en firme un acto donde fue fijado el valor a pagar por concepto de energía, el cual no fue sometido por ninguna de las partes a control jurisdiccional.*

*Es que el Procedimiento y Plazo de requerimiento contemplado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, **tiene como finalidad proteger al consumidor final del servicio de Telecomunicaciones por ser Público y Esencial** lo que es un factor preponderante que deben tener en cuenta los Contratantes en Compartición antes de tomar cualquier decisión que ponga en riesgo de suspensión del Servicio Público, porque **todas ellas deberán estar orientadas siempre a que el Usuario o Consumidor no quede desprovisto de este.** Por tanto, cualquier conducta que no permita utilizar los equipos destinados para prestar el servicio de telecomunicaciones atenta contra el principio general de los servicios que es que sea continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo, cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que exijan tomar la decisión.*

(...)

Del incumplimiento

El Parágrafo Único del artículo 4.11.1.8 de la resolución 5890 del 24 de enero del 2020 ordena a todos los involucrados en Contratos de Compartición, inclusive a los que prestan servicios adicionales, **que no suspendan o terminen el acceso y uso de la infraestructura eléctrica**, como tampoco esos servicios adicionales sin notificación previa a la Comisión; **norma que aunque está estipulada para la suspensión del acceso y retiro de elementos por la no transferencia oportuna de pagos, al tocar el procedimiento que protege la continuidad de los servicios de energía, debe tomarse en cuenta por analogía para suplir la laguna legal, como sobre el sistema de suspensión de fluido eléctrico en relación con los contratos de compartición**. Ello sumado, a que por referirse particularmente este proceso al Servicio Adicional de Energía Eléctrica, debieron seguirse los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional, para la suspensión del servicio de energía, que prevé la notificación a COMCEL SA como Usuario del servicio adicional de energía y el agotamiento de la vía administrativa.

De las pruebas documentales y testimoniales recaudadas en este proceso se concluye que las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE incumplió las anteriores obligaciones de notificar a la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica, y los lineamientos jurisprudencialmente estipulados para notificar a COMCEL SA como Usuario del servicio de energía eléctrica que es un criterio interpretativo obligatorio del artículo 140 de la ley 142 de 1994 que fue integrada por voluntad de las partes al Contrato de Compartición como legislación aplicable.

Si bien las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE no interactuaron físicamente con la infraestructura instalada interviniéndola, trasladándola o cortándola, al suspender el servicio adicional de Energía Eléctrica que es esencial para el funcionamiento de los equipos instalados en la infraestructura tuvo un efecto similar pues inhabilitó el uso de los equipos al punto que repercutió en los Usuarios del Servicio Público de Telecomunicaciones.

Si se observa que tal hecho fue realizado con el único propósito de forzar el pago de las sumas de dinero en mora sin cumplir el procedimiento establecido en el artículo 4.11.1.8 de la resolución 5890 del 24 de enero de 2020 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el debido proceso reconocido para el caso de Suspensión por la jurisprudencia constitucional colombiana, **es para el tribunal claro que ese derecho legal que tiene el proveedor del Servicio de Alimentación de Energía Eléctrica quedó deslegitimizado ocasionando desde el instante de la Suspensión, el incumplimiento del contrato de Compartición**, de las disposiciones regulatorias incorporadas a este y lo que es peor, de los principios fundantes en materia contractual como es la cláusula general de la buena fe y aparejado a esto, **a los usuarios de COMCEL SA de no verse privados del servicio de telecomunicaciones contratado con esta última**.

Ello al extremo que como único mecanismo que tuvo COMCEL SA para restablecer el servicio a sus usuarios fue pagar la suma de dinero exigida unilateralmente por Emcali y a resarcir a sus clientes en dinero el tiempo durante el cual no tuvo las

fuentes de poder habilitados para prestar el servicio de Telecomunicaciones. Conducta esta de las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE que este Tribunal considera que es reprochable jurídicamente, tipifica abuso del derecho derivado de la vulneración en concurso de los derechos fundamentales a la buena fe y el debido proceso, por lo que cumpliendo la finalidad resarcitoria que ocupa esta clase de acciones, hará en contra de las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI las declaraciones de condena que presenta en la parte resolutive de este Laudo.

El Tribunal Arbitral se ocupará de hacer referencia a las pruebas más relevantes que orientaron su decisión:

(...)

Sus declaraciones fueron suficientes para demostrar que entre las partes se estaba adelantando un trámite de negociación con intención inequívoca de llegar a un arreglo transaccional para superar las diferencias relativas a la cantidad de fuentes de poder y consumo de energía y paralelamente a ello que **Emcali adelanto una actuación administrativa para definir el valor de la energía a pagar que fue objeto de recursos que culminaron con la inhibición por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos para resolver la controversia**, lo que hizo aún más relevante el proceso de negociación adelantado de común acuerdo el cual fue truncado por la decisión de Emcali de suspender el fluido eléctrico a las fuentes de poder. Pero los testigos no probaron que además del agotamiento de la vía administrativa en cuanto al consumo de Energía, cuando tomaron la decisión de Suspender la Alimentación de las Fuentes de Poder, notificaran previamente a COMCEL SA de tal circunstancia en la forma prevista por la ley 1437 de 2011. Las únicas referencias que los testigos hicieron a la Suspensión fue para describir que era una orden que automáticamente generaba el Sistema y el señor John Jairo Toro informó que ese día fue una desconexión programada y masiva de lo que se infiere que las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE tenían planeada la suspensión, pero, en lugar de notificar a su contraparte, prefirieron hacerlo de manera oculta lo que pone en entredicho la Buena Fe contractual con la que acompañaron su actuación.

(...)

Es claro entonces que se encuentra probada la omisión en el cumplimiento de las prestaciones contractualmente adquiridas por EMCALI para dirimir el número de fuentes o elementos no autorizados que afectaban la re-facturación de los servicios adicionales de energía contratados con EMCALI y el límite temporal para el cobro retroactivo.

(...)

Por ello, la aludida compensación es, sin lugar a dudas, un perjuicio de raigambre contractual, en su modalidad de daño emergente, producto del incumplimiento de

las obligaciones en cabeza de EMCALI y, por ende, cabe ordenar su reparación. La genera la vulneración al debido proceso del campo del Contrato de Compartición, puesto que si a tiempo, **hubiesen dirimido los desacuerdos que en este surgieron, no habrían llegado a la instancia de la suspensión que provocó este costo**. No se trata pues, de un perjuicio conjetural fruto de especulaciones, sino de uno cierto, efectivamente causado en su existencia y cuantía con el dictamen pericial aportado al proceso por la Convocante, elaborado por la firma MarkUp Consultores, como se explicó.

(...)

En el cuerpo del presente laudo el Tribunal tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto de su competencia, declarándose competente por corresponder parte de la controversia a la relación que surgió del contrato de Compartición, en el cual se determinan las fuentes de poder generadoras del servicio adicional de energía que **por vacíos procedimentales para su control respecto del número de fuentes autorizadas, ocasionaron el conflicto respecto de la alimentación de energía**.

Como se puede apreciar de lo anteriormente transliterado, nuevamente el Panel Arbitral, de forma sorpresiva e incomprensible, invierte y/o tergiversa los criterios de la buena fe contractual para concluir que, por el hecho de existir unos vacíos procedimentales para el control respecto del número de fuentes autorizadas, lo que ocasionó el conflicto respecto de la alimentación, consumo y costo de la energía adicional no reportada; a EMCALI EICE ESP, le asiste culpa o mala fe en ello.

Sostener una teoría y conclusiones de esas equivale, guardando las justas proporciones, a culpar a la víctima de hurto por no cerrar la puerta de la casa o por no guardar su celular en la calle. Se debe recordar al respecto y, en eso sí coincidimos con el Tribunal de Arbitramento que, la actuación irregular que dio origen a todo este conflicto y controversia fue la INSTALACIÓN IRREGULAR Y NO REPORTADA a EMCALI EICE ESP, de unas fuentes de poder, por parte de COMCEL S.A., a quien, se insiste, era la única parte que no le convenía que se realizaran esos reportes adicionales de consumo de energía, luego bien, se reitera, dicha actuación irregular no puede ser trasladada a EMCALI EICE ESP ni, mucho menos, generar derechos y beneficios a la parte que la ocasionó, pues las actuaciones irregulares NO son fuente de derecho.

De otro lado, bastante reprochable es la analogía que realiza el Tribunal de Arbitramento para poder contar con alguna clase de sustento jurídico y, de esa forma, proceder a sancionar y condenar a EMCALI EICE ESP dentro de la causa de la referencia. Sobre el particular, se sostuvo en el Laudo Arbitral que:

“Del incumplimiento

*El Parágrafo Único del artículo 4.11.1.8 de la resolución 5890 del 24 de enero del 2020 ordena a todos los involucrados en Contratos de Compartición, inclusive a los que prestan servicios adicionales, **que no suspendan o terminen el acceso y uso de la infraestructura eléctrica**, como tampoco esos servicios adicionales sin notificación previa a la Comisión; **norma que aunque está estipulada para la suspensión del acceso y retiro de elementos por la no transferencia oportuna de pagos**, al tocar el procedimiento que protege la continuidad de los servicios de energía, debe **tomarse en cuenta por analogía para suplir la laguna legal, como sobre el sistema de suspensión de fluido eléctrico en relación con los contratos de compartición**”.*

Resulta notorio y evidente que, ante la falta de norma o estipulación contractual alguna que fuera incumplida por EMCALI EICE ESP en el marco del Contrato de Compartición, en tanto como el mismo Laudo lo reconoce, “(...) **las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE no interactuaron físicamente con la infraestructura instalada interviniéndola, trasladándola o cortándola** (...)”; así como siendo muy conscientes de que no tenían competencia para pronunciarse sobre la relación jurídica de Condiciones Uniformes que regulaba el suministro de energía a las fuentes de poder de COMCEL S.A.; les resultó muy adecuado (y hasta fácil), por analogía, traer normas de dicho Contrato de Condiciones Uniformes al Contrato de Compartición objeto de la presente controversia y proceder a sancionar, con la evidente vulneración de la prohibición del uso de la analogía jurídica cuando de sanciones y penas se trata, en tanto, cualquier sanción, multa, pena, etc., tiene el carácter de reserva legal.

Nótese cómo en el siguiente extracto de la parte motiva del Laudo Arbitral, el Tribunal de Arbitramento insiste, con grandes esfuerzos, en equiparar la intervención o retiro de equipos (propio del Contrato de Compartición) con la suspensión del suministro de energía (propio de la relación jurídica del Contrato de Condiciones Uniformes); todo ello, para poder contar con algún tipo de fundamento jurídico que les permitiera condenar a EMCALI EICE ESP, como finalmente ocurrió:

*“Lo relativo al no reporte de equipos utilizados con conexiones de fuentes de poder sin autorización de las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE, **la cláusula novena (9) y su parágrafo primero deben ser interpretadas armónicamente con el procedimiento dispuesto por el artículo 4.11.1.8 de la Resolución CRC 5890 del 24 de enero de 2020** cuando el usuario de la Infraestructura Eléctrica no acceda al pago de facturas por los Servicios Adicionales que recibe del Operador de Telecomunicaciones, caso de mora en el cual, **el Arrendatario (sic) de la Infraestructura podrá “suspender provisionalmente el acceso y uso de la infraestructura eléctrica, previo aviso a la CRC y al proveedor de redes o servicios de telecomunicaciones con no menos de (15) quince días hábiles de anticipación y hasta tanto se supere la situación que generó la suspensión**. Lo anterior sin perjuicio de que la CRC en ejercicio de sus funciones, de oficio o a solicitud de parte, solicite información adicional para efectos de hacer un seguimiento a la suspensión informada.” (Negritas y subrayas, ajenas al texto original).*

Ni qué decirse cuando, como producto de lo que el Panel Arbitral denominó una tardanza entre las partes para solucionar los conflictos suscitados por el tema de los equipos no autorizados o no reportados a EMCALI EICE ESP y, sin considerar, como ya se advirtió, que fue COMCEL S.A. quien finalmente no suscribió el contrato de transacción proyectado al respecto; en el Laudo Arbitral objeto del presente recurso, finalmente se culpa a la parte convocada – EMCALI EICE ESP, por dicha demora, como si en su calidad de acreedor, le conviniera y fuera culpa suya, tal tardanza. Sobre el particular, se sostuvo en el Laudo objeto de reproche:

“Por ello, la aludida compensación es, sin lugar a dudas, un perjuicio de raigambre contractual, en su modalidad de daño emergente, producto del incumplimiento de las obligaciones en cabeza de EMCALI y, por ende, cabe ordenar su reparación. La genera la vulneración al debido proceso del campo del Contrato de Compartición, puesto que si a tiempo, hubiesen dirimido los desacuerdos que en este surgieron, no habrían llegado a la instancia de la suspensión que provocó este costo. No se trata pues, de un perjuicio conjetural fruto de especulaciones, sino de uno cierto, efectivamente causado en su existencia y cuantía con el dictamen pericial aportado al proceso por la Convocante, elaborado por la firma MarkUp Consultores, como se explicó”. (Las negrillas y subrayas, ajenas al texto original)

De cara a todo lo anteriormente expuesto, resulta claro que, la decisión adoptada mediante el Laudo Arbitral del 05 de marzo de 2024, en lo absoluto correspondió a una decisión en derecho o con fundamentos jurídicos propiamente dichos, al menos no aplicables al Contrato de Compartición y, lo que realmente se realizó fue, una decisión en Equidad para garantizar o reparar unos daños ocasionados a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, televisión y celular de COMCEL S.A., mismos que resultan ajenos a EMCALI EICE ESP en la relación contractual (Contrato de Compartición), objeto del presente Arbitraje; **decisión en Equidad que simplemente se disfrazó bajo las denominaciones de Buena fe y Analogía, aun cuando, se reitera, la decisión adoptada, lo debió ser, única y exclusivamente en derecho, conforme se pactó en la cláusula compromisoria, a saber:**

“DÉCIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. - El presente acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de la República de Colombia. Las partes buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias o discrepancias surgidas durante la ejecución del presente Acuerdo y para el efecto, se pacta el siguiente procedimiento de solución de controversias: (...).

(v) Surtido este término sin llegar a un acuerdo, se convocará un tribunal de arbitramento que funcionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali, que se constituirá, deliberará y decidirá de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali, en la Ley 1563 de 2012 y demás disposiciones concordantes o complementarias, o por las que las modifiquen, adicionen, reglamenten o sustituyan,

*de acuerdo con las siguientes reglas: los costos del tribunal serán asumidos por partes iguales, sin perjuicio de que la Parte vencida reembolse a la otra Parte los gastos en que esta parte incurrió; el tribunal estará conformado por un (1) o por tres (3) árbitros, en este último caso si la cuantía de la controversia supera los 400 SMLMV. Cuando el tribunal esté integrado por (1) un árbitro este deberá ser nombrado de común acuerdo entre las partes; cuando sean tres árbitros, cada parte designará uno de ellos y el tercero será nombrado de común acuerdo entre las partes. En caso que no haya acuerdo en la designación conjunta de un árbitro, este será designado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali. **Cada árbitro deberá ser abogado colombiano y su decisión será en derecho.** En cualquier caso, el fallo de los árbitros tendrá los efectos que la Ley da a tales laudos.” (Negrilla y subrayas, ajenas al texto original).*

III. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO ARBITRAL DE FECHA 05 DE MARZO DE 2024 (INCISO TERCERO DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY 1563 DE 2012).

Para el caso concreto se cumplen los dos condicionamientos previstos en el artículo 42 de la Ley 1563 de 2012, para tener por suspendidos los efectos del Laudo Arbitral.

Cierto es que, el recurso de anulación es de naturaleza extraordinaria y, por ende, su formulación, por regla general, no afecta la obligatoriedad del Laudo Arbitral, sin embargo, el mencionado artículo 42 establece una excepción a dicha premisa, al disponer en su inciso tercero que, “...*la interposición y el trámite del recurso extraordinario de anulación no suspenden el cumplimiento de lo resuelto en el laudo, salvo cuando la entidad pública condenada solicite la suspensión*”.

Es clara la citada norma al establecer una precisa excepción a la regla general de obligatoriedad y ejecutoriedad del Laudo Arbitral, previendo al respecto que, habrá lugar a la suspensión de sus efectos, “... cuando la condena haya sido impuesta a cargo de una entidad pública y sea esta la que solicite su suspensión”¹; de manera que, tal suspensión no depende de circunstancias distintas a la simple verificación objetiva de los dos requisitos o condicionamientos antedichos, estos son, (i) que en el laudo se hubiere impuesto una condena en contra de una entidad pública y (ii) que ésta solicite la suspensión de lo resuelto en dicha providencia.

Ahora bien, en cuanto a las exigencias formales para solicitar la suspensión en comento, el Consejo de Estado se ha encargado de precisar que dicha petición debe presentarse junto con el recurso de anulación correspondiente, sea en el mismo escrito o en documento separado, enfatizando al respecto que la ley “... *no exigió sustentar la petición de suspensión del cumplimiento del laudo arbitral, [de ahí que]*

para acceder a la medida solo se requiere que la entidad pública condenada la solicite en la oportunidad señalada en la ley”2.

Para el Consejo de Estado, es claro que, si la ley no exige la fundamentación o el sustento de la solicitud de suspensión de lo decidido en el Laudo Arbitral, mal haría el Juez en exigir que dicha petición sea argumentada. Se dijo en este sentido lo siguiente:

“El artículo 27 del Código Civil establece que cuando el sentido de la ley sea claro no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. De ahí que, si la ley no impuso la carga de sustentar la petición de la suspensión del laudo arbitral, no puede el intérprete exigir una “carga argumentativa” que no fue prevista expresamente por el legislador.

(...)

De otro lado, la evolución sobre del tratamiento legal de los requisitos para la suspensión en favor de las entidades públicas muestra que, contrario a la imposición de exigencias adicionales, el legislador las ha ido suprimiendo para facilitar el mecanismo en favor de las entidades públicas.”3

Se advierte entonces que, en el caso concreto, procede la solicitud y el decreto de la suspensión del cumplimiento del Laudo Arbitral proferido el 05 de marzo de 2024, y aclarado el 13 de marzo de la misma anualidad; habida cuenta que, de un lado, en dicha providencia resultó condenada EMCALI EICE ESP, cuya naturaleza corresponde a una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden municipal, prestadora de servicios públicos domiciliarios y, de otra parte, a que es esta Entidad pública quien, solicita mediante el presente memorial, la suspensión del cumplimiento del Laudo Arbitral.

De igual manera, la solicitud que nos ocupa, es presentada en la oportunidad establecida legalmente para formular y sustentar, el recurso de anulación.

No sobra advertir que, contra EMCALI EICE ESP, se dispuso en el Laudo Arbitral ya mencionado que:

“(...)

Tercero: *Acceder parcialmente a las pretensiones primera, segunda y tercera declarativas principales de la demanda arbitral reformada presentadas por la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., en contra de las Empresas Municipales de Cali EMCALI E.I.C.E. E.S.P.y, por ende, **DECLARAR** que:*

- i) Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.,** es civil y contractualmente responsable por incumplir las obligaciones contractuales como legales que rigen el Contrato de Compartición No. 500-GE-CIE-0618-2016 del

17 de mayo de 2016, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte considerativa de este Laudo Arbitral.

- ii) **Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.**, incumplió las obligaciones contractuales pactadas en el Contrato de Compartición No. 500-GE-CIE-0618-2016 del 17 de mayo de 2016, respecto de los numerales 3º del punto 7.2 de la Cláusula Séptima, el 10º de la Cláusula Octava, el parágrafo primero de la cláusula novena y cláusula décimo quinta, de conformidad y bajo el entendido de lo expuesto por el Tribunal en las consideraciones.
- iii) **Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.**, incumplió las obligaciones legales que rigen el Contrato de Compartición No. 500-GE-CIE-0618-2016 del 17 de mayo de 2016, esto es, los siguientes artículos: numeral 9.3 del artículo 9º y 30º de la Ley 142 de 1994 y el artículo 4.11.1.8 de la Resolución CRC 5890 de 2020, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa.

(...)

Sexto: Acceder a la pretensión sexta de las pretensiones declarativas principales de la demanda arbitral reformada presentada por la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., en contra de las Empresas Municipales de Cali EMCALI E.I.C.E. E.S.P.y, por ende, **DECLARAR** que, con ocasión al incumplimiento contractual y legal del Contrato de Compartición No. 500-GE-CIE-0618-2016 del 17 de mayo de 2016 por parte de la Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P., se causó daños y perjuicios a Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte considerativa de este Laudo Arbitral.

Séptimo: Acceder parcialmente a la pretensión séptima declarativa principal de la demanda arbitral reformada presentada por la sociedad Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., en contra de las Empresas Municipales de Cali EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y, por ende, **DECLARAR** que los referidos daños y perjuicios ocasionados a la convocante, están constituidos por la compensación a usuarios afectados por la suspensión del servicio de energía a las fuentes de poder debidamente indexados, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte considerativa de este Laudo Arbitral.

(...)

Décimo: Acceder parcialmente a la pretensión tercera condenatoria principal de la demanda arbitral reformada, en el sentido de, **CONDENAR** a las Empresas Municipales de Cali EMCALI E.I.C.E. E.S.P., a **PAGAR** en favor de la convocante Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., la suma de \$1.091.609.799 debidamente indexada a la fecha del Laudo Arbitral, suma que asciende a la suma de **MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE. (\$1.304.936.606,00)**, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte considerativa de este Laudo Arbitral.

(...)

Décimo Segundo: Condenar en costas a la parte convocada Empresas Municipales de Cali EMCALI E.I.C.E. E.S.P. en favor de la convocante, Comunicación Celular Comcel S.A., por valor de **SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE. (\$797.229.616)**, por las razones expuestas en la parte considerativa de este Laudo Arbitral.

Décimo Tercero: Sin lugar a la aplicación de la sanción prevista en el inciso cuarto del artículo 206 del Código General del Proceso ni tampoco de la pena prevista en el parágrafo del mismo artículo, en los estrictos términos y por las razones expuestas en la parte considerativa de este Laudo Arbitral.

(...)"

Así las cosas, con el objetivo de aguardar por la decisión del recurso extraordinario de anulación que ahora se formula en contra del Laudo Arbitral en cuestión, de manera formal, respetuosa y del todo ajustada a lo prescrito en el artículo 42 de la Ley 1563 de 2012; solicito la suspensión del cumplimiento del Laudo Arbitral de fecha 05 de marzo de 2024, proferido en las diligencias de la referencia; suspensión que, según lo ha indicado el Consejo de Estado⁴, opera *ipso iure*, desde el momento mismo en que se presenta su petición, sin perjuicio del estudio y la decisión que se adoptará, al resolver el recurso extraordinario de anulación.

IV. PRETENSIONES.

Previo a elevar las pretensiones correspondientes, solicito muy respetuosamente a la Secretaría del Panel Arbitral que, corra traslado del presente recurso a mi contraparte, por el término de 15 días, sin necesidad de Auto que así lo ordene, conforme lo establecido en el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012.

PRIMERA: Se suspenda el cumplimiento del Laudo Arbitral de fecha 05 de marzo de 2024, proferido dentro del Arbitraje de la referencia, conforme a la solicitud realizada en los acápites en precedencia.

SEGUNDA: De conformidad con la causal segunda del artículo 41 de la Ley 1563 de 2022, sustentada mediante el presente memorial de recurso extraordinario de anulación, esto es, la relacionada con *La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia*, la cual se apoyó también para su sustentación con la causal octava de la norma *ibídem*, esto es, *Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutive ...*; solicito de forma muy respetuosa que, se decrete su configuración y, por ende, se

declare la nulidad del Laudo, conforme al inciso primero del artículo 43 de la Ley 1563 de 2022.

De igual manera y, como producto de lo anterior, que se remita el expediente al Juez Contencioso correspondiente, para que se continúe con su trámite, de acuerdo con lo normado en el inciso segundo del artículo en comento.

ÚNICA SUBSIDIARIA DE LA SEGUNDA PRINCIPAL: En caso de no accederse a la pretensión segunda principal, solicito se decrete la configuración de la causal de anulación de que trata el numeral séptimo del artículo 41 de la Ley 1563 de 2022, esto es, por *Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo*; de conformidad con lo sustentado en los acápites en precedencia.

Producto de lo anterior, que se declare la nulidad del Laudo Arbitral de fecha 05 de marzo de 2024 y, se nos permita convocar un nuevo Tribunal Arbitral.

TERCERA: Se ordene las restituciones a que haya lugar producto de la anulación del Laudo Arbitral, entre ellas, la consagrada en el inciso cuarto del artículo 48 de la Ley 1563 de 2022, esto es: *Si el recurso de anulación prospera con fundamento en las causales 3 a 5 y 7 previstas en esta ley, los árbitros reembolsarán a las partes la segunda mitad de los honorarios recibidos.*


V. ANEXOS.

1. Poder especial de representación, a mi conferido, junto con sus anexos de ley.

VI. NOTIFICACIONES.

Las recibiré en la Secretaría de su Despacho y/o en la dirección Av. 2 norte # 10-70, piso 5, Edificio CAM - Torre EMCALI y/o en el buzón de notificaciones judiciales de la Empresa: notificaciones@emcali.com.co y/o en el correo registrado en el SIRNA: jumaror@hotmail.com

Cordialmente,


JUAN MANUEL ROJAS (JmR).
C.C. No. **1.075.226.782** de Neiva - Huila.
T.P. No. **205.537** del C. S. de la J.

RE: Solicitud de otorgamiento de poder proceso No. 2024-00085 Comunicación Celular Comcel S. A.

Edinson Zambrano Martinez <edzambrano@emcali.com.co>

Lun 24/06/2024 15:52

Para: Diego Daniel Vega Orjuela <ddvega@emcali.com.co>

Se aprueba el poder, para los fines en él previstos.

Cordialmente,

EDINSON ZAMBRANO MARTÍNEZ

Director Jurídico - EMCALI EICE ESP

CAM, Torre Emcali, Piso 5°

57 (602)899 9999 - Ext. 3136

De: Diego Daniel Vega Orjuela <ddvega@emcali.com.co>

Enviado: domingo, 23 de junio de 2024 17:19

Para: Edinson Zambrano Martinez <edzambrano@emcali.com.co>

Asunto: Solicitud de otorgamiento de poder proceso No. 2024-00085 Comunicación Celular Comcel S. A.

Estimado Dr. Edinson Zambrano, buenas tardes.

Cordial saludo,

Conforme a la asignación del proceso de la referencia, remito el poder para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Diego Daniel Vega Orjuela.

Abogado contratista.

Dirección Jurídica.

EMCALI EICE ESP.

Por favor no imprima este mensaje si no es necesario. Proteger el medio ambiente es responsabilidad de todos.

Este mensaje y cualquier archivo anexo contienen información privilegiada y confidencial de EMCALI EICE ESP, en consecuencia, el que ilícitamente lo use antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones establecidas en la Ley. El uso del mensaje solo está permitido de manera exclusiva e individual para su destinatario. Si usted no es el destinatario de este correo, por favor bórralo inmediatamente y comuníquelo al remitente. EMCALI EICE ESP no se hace responsable de información, opiniones o criterios personales que el usuario transmita mediante el correo corporativo.

Por favor no imprima este mensaje si no es necesario. Proteger el medio ambiente es responsabilidad de todos.

Este mensaje y cualquier archivo anexo contienen información privilegiada y confidencial de EMCALI EICE ESP, en consecuencia, el que ilícitamente lo use antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones establecidas en la Ley. El uso del mensaje solo está permitido de manera exclusiva e individual para su destinatario. Si usted no es el destinatario de este correo, por favor bórralo inmediatamente y comuníquelo al remitente. EMCALI EICE ESP no se hace responsable de información, opiniones o criterios personales que el usuario transmita mediante el correo corporativo.



RUBRIA ELENA GOMEZ E. <rubriaelena@gmail.com>

Referencia: Proceso Arbitral - Demandante: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. - Demandado : EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - Radicado : A-20220927/ 0873 Asunto : Recurso Extraordinario de Anulación

1 mensaje

Luis Fernando Salazar <lfsalazar@syrabogados.com>

23 de abril de 2024, 15:20

Para: "ccya@ccc.org.co" <ccya@ccc.org.co>, "rubriaelena@gmail.com" <rubriaelena@gmail.com>

Cc: "marinospina@hotmail.com" <marinospina@hotmail.com>, "procjudam18@procuraduria.gov.co"

<procjudam18@procuraduria.gov.co>, "soguzman@procuraduria.gov.co" <soguzman@procuraduria.gov.co>,

"csolanilla@procuraduria.gov.co" <csolanilla@procuraduria.gov.co>, "notificaciones@emcali.com.co"

<notificaciones@emcali.com.co>, Dora Sofía Morales Soto <dora.morales@claro.com.co>, FELIPE ALEJANDRO GARCIA

AVILA <felipe.garcia@claro.com.co>

Buenas tardes,

Como apoderado especialmente designado por la sociedad **COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A.**, adjunto al presente mensaje de datos estoy remitiendo a ustedes los siguientes documentos con destino al proceso arbitral citado en la referencia:

1. Memorial -en formato PDF- por medio del cual interpongo, formulo y sustento, de manera oportuna y con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, el **RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN**, en contra del Laudo arbitral que fuera proferido el cinco (5) de marzo de 2024, por el Tribunal de Arbitramento.
2. Copia del poder a mi conferido por **COMCEL S.A.** el cual fue radicado por dicha sociedad el día de hoy en el canal digital indicado por el Tribunal, con el lleno de los requisitos previstos en la Ley 2213 de 2022.
3. Certificado de Existencia y Representación legal de **COMCEL S.A.**, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.
4. Certificado de "Paz y Salvo", expedido por abogado **ROBERTO ZORRO TALERO**, anterior apoderado de **COMCEL S.A.**

Copia del presente mensaje de datos remito a la dirección electrónica indicada por el apoderado de **EMCALI** y a los demás sujetos procesales como lo impone el numeral 14 del artículo 78 del CGP.


Agradeceré a todos la confirmación de su recibo.


Cordialmente,





Luis Fernando Salazar López
Avenida 9 # 103 A 36, Oficinas 601C y 602A
PBX: (571) 6199699
E-mail: lfsalazar@syrabogados.com / syrabogados@icloud.com
Síguenos en Twitter: @syrabogados
Bogotá, DC, Colombia

4 adjuntos

- 

Poder Dr. Luis Fernando Salazar - Anulacioin Laudo Emcali.pdf
514K
- 

Certificado de existencia y reptesentacioën legal Comcel - marzo 2024[73].pdf
299K
- 

PAZ Y SALVO honorarios Tribunal Arbitral COMCEL vs EMCALI.pdf
103K
- 

COMCEL - RECURSO DE ANULACION - EMCALI- 2024..pdf
585K

Doctores

Dr. Iván Ramírez Württemberg - presidente

Dra. Luz Stella Alvarado Orozco - árbitro

Dr. Henry Sanabria Santos - árbitro

Dra. Rubria Elena Gómez Estupiñán - secretaria

ccya@ccc.org.co

rubriaelena@gmail.com

Cali – Valle del Cauca

E. S. D.

Referencia	:	Proceso Arbitral
Demandante	:	COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A.
Demandado	:	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P
Radicado	:	A-20220927/ 0873
Asunto	:	Recurso Extraordinario de Anulación

LUIS FERNANDO SALAZAR LÓPEZ, abogado en ejercicio, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.083.331 expedida en Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional de Abogado 12.386 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, con correo electrónico: lfsalazar@syrabogados.com, debidamente inscrito en el Registro Nacional de Abogados, obrando en mi condición de apoderado de **COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.**, (en adelante también “**COMCEL**”, “**la Convocante**” o “**Demandante**”), según poder que con el lleno de los requisitos previstos en la ley 2213 de 2022 me ha sido conferido por su representante legal **SANTIAGO PARDO FAJARDO**, para el presente trámite y el cual acompaño para que me sea reconocida personería suficiente, por medio del presente escrito y estando en tiempo para ello, interpongo **RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN** en

contra del Laudo arbitral proferido el cinco (5) de marzo de 2024, por el Tribunal de Arbitramento (en adelante también el “**Tribunal**”) que fuera conformado para dirimir las controversias entre **COMCEL** y las **EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P** (en adelante también “**EMCALI**”, “**Convocada**” o “**Demandada**”), cumpliendo para ello con todos los requisitos y condiciones señalados en la Ley 1563 de 2012, así:

A. OPORTUNIDAD PARA INTERPONER EL RECURSO:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, el recurso extraordinario de anulación debe interponerse dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que resuelva sobre su aclaración, corrección o adición.

El Tribunal aquí conformado profirió su Laudo arbitral el día cinco (5) de marzo de 2024, el cual fue objeto de solicitudes de aclaración, corrección y adición, propuestas por ambas partes, las cuales fueron resueltas por medio del Auto No. 47 de 13 de marzo de 2024.

En ese sentido, el término para interponer el presente recurso extraordinario comenzó a correr el catorce (14) de marzo y vence tan solo el veintinueve (29) de abril de 2024; por tanto, que el presente recurso se interpone de manera oportuna.

B. SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN:

ÚNICA CAUSAL DE ANULACIÓN INVOCADA:

Como única causal de anulación del laudo impugnado invoco la prevista en

el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, que dispone:

“Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esa circunstancia aparezca de manifiesto en el Laudo”

(i) Introducción al cargo:

Como se demostrará a lo largo de este escrito, solicito a los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali que declaren que el Tribunal Arbitral de la referencia incurrió en la causal invocada, toda vez que al proferir el laudo arbitral impugnado falló en conciencia y no en derecho, como era su deber:

- a) Al haber negado las Pretensiones Quinta Declarativa y Primera y Segunda de Condena de la Demanda Reformada; y,
- b) Al haberse apartado del régimen jurídico aplicable dándole prevalencia al fuero interno de los árbitros, quienes sobrepusieron su *“leal saber y entender”* sobre las reglas procesales y probatorias vigentes que son reglas de orden público y de riguroso cumplimiento.¹

(ii) Alcance del recurso de anulación:

El presente RECURSO DE ANULACIÓN tiene un alcance parcial pues única y exclusivamente está dirigido a obtener la nulidad de los apartados relacionados con la denegatoria de las Pretensiones Quinta Declarativa y

¹ Artículo 13 del CGP

Primera y Segunda de Condena de la Demanda Reformada, atinentes al reconocimiento de perjuicios a favor de **COMCEL**.

En todo lo demás, el laudo deberá mantenerse incólume pues no es objeto de reproche en sede de anulación.

Al respecto, el Consejo de Estado ha indicado que el recurso de anulación puede formularse y debe prosperar de manera parcial, cuando los vicios alegados y demostrados sólo afecten una porción de lo decidido por los árbitros en el laudo arbitral. Así, en la Sentencia de 3 de octubre de 2019, radicado 64318, Consejera Ponente Marta Nubia Velásquez Rico, se indicó que:

“Por ello, aunque el alcance impuesto por la sentencia SU 173 de 2015 situó la causal de fallo en conciencia en un extremo de ocurrencia muy reducida⁴⁸, este es un caso en el que se configura respecto de la condena impuesta por concepto de la sanción del juramento estimatorio, toda vez que no fue soportada en el requisito previsto en el artículo 206 del CGP ni en las actuaciones negligentes o temerarias que se debieron señalar en el laudo arbitral. (...)

*De acuerdo con las consideraciones anteriores, **prospera la causal de anulación parcial por el fallo en conciencia.**”* (Subrayas fuera del original)

Por lo dicho, nada obsta para que, en efecto, el recurso de anulación se concentre de manera exclusiva en los apartados que de manera precisa se individualizan en este escrito.

(iii) Anotación preliminar sobre la Causal de “fallo en conciencia o equidad”

El Tribunal que se conformó para dirimir en derecho las controversias aquí suscitadas, fue convocado en virtud de la cláusula compromisoria contenida en el Contrato de Compartición No. 500-GE-CIE-0618-2016 (en adelante el “**Contrato de Compartición**”), en la cual se estableció por los contratantes que el fallo arbitral debería ser en derecho.

En efecto, en su literalidad, la cláusula decimoquinta del referido contrato, establece lo siguiente:

“DÉCIMO QUINTA: (...) En caso que no haya acuerdo en la designación conjunta de un árbitro, este será designado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali. Cada árbitro deberá ser abogado colombiano y su decisión serán en derecho (...)
(Subrayas y negrillas propias)

Lo anterior quiere decir, sin lugar a dudas, que el Tribunal de Arbitraje sólo estaba facultado para juzgar y resolver las controversias sometidas a su consideración, en “derecho”² y no en conciencia, esto es, con estricta sujeción al ordenamiento jurídico imperante, al acervo probatorio recaudado en el proceso³ y, actualmente, a la jurisprudencia de las Altas Cortes,⁴ siendo anulable, por consiguiente, toda decisión que se haya

² Por demás, al ser EMCALI una entidad pública, la decisión arbitral debía ser obligatoriamente en derecho aunque no existiese pacto expreso (art. 1 de la Ley 1563 de 2012)

³ Sobre la indebida valoración probatoria como causal de nulidad del laudo arbitral, ha dicho el Consejo de Estado que: “*Así mismo, la jurisprudencia de la Corporación predica que se ha fallado en conciencia cuando se decide sin pruebas de los hechos que sustentan las pretensiones o las excepciones, es decir, sin tener en consideración las pruebas que obran en el plenario.*” Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia de 19 de septiembre de 2022. Radicado 68159.

⁴ Sobre la obligatoriedad del precedente, entre otras, Sentencia C- 634 de 2011.

fundado únicamente en el fuero interno de los árbitros, en su leal saber y entender, en normas derogadas o en interpretaciones legales absurdas o descontextualizadas que desconozcan el espíritu del legislador, el orden constitucional y las reglas de orden público.

Así mismo, se considera proferida en conciencia o en equidad, aquella decisión que carezca de un grado mínimo de fundamentación sobre sus decisiones o determinaciones.

Para que el laudo sea proferido en derecho, no basta, entonces, con que en él se mencionen normas, sentencias o doctrinas, sino que, por el contrario, estas, a su vez, deben ser pertinentes, vigentes y válidas para desatar la cuestión litigiosa sometida por las partes al conocimiento de los árbitros.

La simple enunciación de un concepto jurídico o la mera utilización de términos legales no conlleva ni supone un “fallo en derecho”, si tales afirmaciones no están en verdadera consonancia con lo probado y lo argumentado por las partes en el proceso.

Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que:⁵

“De esta manera, surge la primera acepción de la expresión que aproxima de manera casi natural la idea de fallo en conciencia: Es el que no se soporta en el derecho, debiendo hacerlo, o apoyándose en el derecho no lo hace en el vigente sino en el derogado, en el declarado nulo o inexecutable o el que se apoya en normas, principios o criterios jurídicos que no existen o carecen de vigencia y validez”

⁵ Consejo de Estado. Sección Tercera. Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero. Sentencia de 8 de agosto de 2008. Radicado: 11001-03-26-000-2012-00010-00(43089)

Definición en la que se advierte que no es suficiente con que se motive el laudo aduciendo o plasmando conceptos jurídicos, sino que, estos, a su vez, deben gozar de pertinencia o coherencia con el problema jurídico a resolver.

Bajo esta premisa, corresponde al juez de anulación la labor de indagar e inspeccionar sobre la contundencia y necesidad de los conceptos y argumentos esgrimidos en el laudo, a fin de confrontar su rectitud a la luz del ordenamiento jurídico vigente, de lo probado por las partes y del mérito otorgado por los árbitros.

En esta línea, el Consejo de Estado también ha expresado que:⁶

“La referencia al derecho en realidad debe constituir fundamento de lo que se resuelve y no de tratarse de una simple anotación descontextualizada del hilo argumentativo que en verdad conduce la resolución del caso”

También en la sentencia de 8 de agosto de 2012, la misma sección destacó que:⁷

“Lo que cabe advertir a este respecto, sobre el que no existe tarifa legal o jurisprudencial, es que esa ponderación corresponde hacerla caso a caso, y que a priori no se puede sostener que por usar una

⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de junio de 2007, expediente 32896.

⁷ Expediente 43089.

cualquiera de las fuentes del ordenamiento jurídico el laudo se dictó en derecho; ni que por usar una sola no lo es”.

No puede, entonces, el juez de anulación negarse a verificar la causal de “fallo en conciencia o equidad” por el simple hecho de que los árbitros hubieren realizado en el laudo algunas referencias formales al derecho positivo, sino que, se insiste, éste debe verificar que esas consideraciones jurídicas y probatorias resulten aplicables, coherentes y contextualizadas con el objeto de la litis.⁸

Al respecto, y de una manera contundente, el Consejo de Estado, en la sentencia de 22 de diciembre de 2022 expresó lo siguiente:⁹

“Por otra parte, el Consejo de Estado también ha precisado que no basta la mención de normas de derecho positivo para que el laudo pueda calificarse como proferido “en derecho”, sino que es necesario que las normas invocadas como sustento de la decisión tengan relación directa con el objeto de la litis, de modo que no debe tratarse de una simple referencia descontextualizada, pues de esta manera el fallo tendría la apariencia de estar sustentado en el ordenamiento jurídico, pese a que las normas invocadas no tengan relación alguna con el caso planteado”

⁸ Una primera aproximación este deber de verificación a cargo del Juez de Anulación se tuvo en el Salvamento de Voto que hizo a la Sentencia de 10 de junio de 2009, expediente: 1100103260002008-00032-00 (35.288). Consejera Ponente: Myriam Guerrero de Escobar *“deberá tenerse en cuenta que también se configura la causal de fallo en conciencia cuando el juez no obstante haber hecho referencia al derecho positivo y efectuado la valoración de la prueba en forma detallada y conjunta y de armonizarla en debida forma, finalmente y sin razón que lo justifique, se aparta de ella y falla a su leal saber y entender, manteniéndose al margen de su contenido y de lo que se ha demostrado a través de su análisis”*

⁹ Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Consejero Ponente: Dr. Nicolás Yepes Corrales. Radicado: 68135.

También el Tribunal Superior de Bogotá, en consonancia con los planteamientos citados, ha indicado que el laudo arbitral será anulable cuando, debiendo ser en derecho, aparece de bulto que los árbitros se apartaron *“del rigorismo de la valoración probatoria y de las normas sustantivas, precisamente por tener como asidero la íntima convicción, la prudencia y lo justo”*¹⁰

En ese sentido, un laudo arbitral que debe proferirse en derecho, resulta anulable, total o parcialmente, cuando los árbitros se han apartado y alejado de las normas sustanciales y probatorias que están llamadas a gobernar la contienda, sin que sea al viable que el juez de anulación se abstenga de hacer una verificación integral por el simple hecho de que en el laudo arbitral los árbitros hubieren esbozado, en simple apariencia, algunas normas o pruebas.

Y es que sería un desatino considerar que la interpretación irracional de una norma, o la falta o indebida valoración de las pruebas o la aplicación inane de la ley, comportan un juicio en derecho, exento de cualquier intervención por parte del juez de anulación, cuando puede resultar evidente y palmario que más allá de la motivación imperfecta dada por los árbitros el laudo, ello sólo obedece a su convicción interna.¹¹

¹⁰ Tribunal Superior de Bogotá. Sala Civil. Sentencia de 23 de enero de 2024. Radicado 2023-02741-00

¹¹ En esta misma línea, dijo el Consejo de Estado en reciente sentencia de 30 de noviembre de 2023, radicado 70124, que el laudo será en conciencia cuando: “(...) *la decisión se haya tomado con ausencia de fundamento jurídico o **cuando la fundamentación jurídica presentada por el Panel Arbitral no sustente lógicamente la decisión**, y (3) cuando en esta se observe una total ausencia de un análisis probatorio o cuando el Laudo haga **referencia a pruebas que no fundamenten objetivamente la decisión***” (Negrillas fuera del original)

En otras palabras, por el simple hecho de que los árbitros hubiesen invocado en el laudo arbitral algunos códigos, principios y posturas académicas, el juez de anulación no pierde competencia para examinar si la decisión arbitral fue proferida en equidad o conciencia, toda vez que, aunque la motivación navegue en apariencia sobre los arquetipos jurídicos, puede suceder que el examen probatorio o las conclusiones finales sean sencillamente el reflejo amañado de la equidad o del entender de los árbitros.¹²

Así las cosas, en este asunto se pasará a demostrar, a continuación, que en el laudo impugnado, la mayoría de los árbitros, para negar el reconocimiento de las indemnizaciones a favor de **COMCEL**, que fueron debidamente probadas en el proceso, se alejaron de manera absoluta y completa del acervo probatorio y dejaron sin motivación estas decisiones, haciendo prevalecer su convencimiento interno sobre el ordenamiento jurídico que estaban obligados a aplicar.

En ese sentido, a continuación, en este escrito, se demostrará:

- a) Que la decisión de los árbitros de negar las Pretensiones Quinta Declarativa y Primera de Condena contenidas en la reforma de la demanda, fue fruto de una decisión en conciencia y en equidad pues no tuvo una motivación suficiente;

¹² Así muy acertadamente lo estableció la Consejera de Estado Dra. Myriam Guerrero de Escobar en el Salvamento de Voto al que ya se hizo referencia de la Sentencia de 10 de junio de 2009, expediente: 1100 103260002008-00032-00 (35.288): *“deberá tenerse en cuenta que también se configura la causal de fallo en conciencia cuando el juez no obstante haber hecho referencia al derecho positivo y efectuado la valoración de la prueba en forma detallada y conjunta y de armonizarla en debida forma, finalmente y sin razón que lo justifique, se aparta de ella y falla a su leal saber y entender, manteniéndose al margen de su contenido y de lo que se ha demostrado a través de su análisis”*

- b) Que la decisión arbitral fue en conciencia por cuanto el Tribunal no valoró las pruebas obrantes en el expediente y despreció el acervo probatorio incorporado oportunamente al expediente;
 - c) Que la decisión de los árbitros de negar la Pretensión Quinta Declarativa y Primera de condena contenidas en la reforma de la demanda fue, de cualquier modo, en conciencia pues los árbitros no solicitaron ni decretaron pruebas de oficio, estando el Tribunal obligado a ello.
 - d) Que la decisión de los árbitros de negar la Pretensión Segunda de Condena de la reforma de la demanda, también fue en conciencia y equidad, por ser contraria a los actos propios del tribunal.
- (iv) Para negar las Pretensiones Quinta Declarativa y Primera de Condena el Tribunal falló en conciencia al no haber motivado suficientemente su decisión y por desconocer de forma absoluta el acervo probatorio.**

Como se deriva de una atenta lectura del Laudo impugnado, el Tribunal Arbitral encontró plenamente que **EMCALI** ciertamente incumplió el Contrato de Compartición, en detrimento de **COMCEL**, por cuanto, quedó acreditado, y así consta en el expediente, que dicha Entidad Pública desatendió gravemente las cláusulas contractuales, las regulaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el debido proceso, para forzar, de una manera abusiva, a **COMCEL** al pago de unas sumas dinero.

En ese sentido, se expuso de manera tajante y contundente el Tribunal lo siguiente en el laudo impugnado:¹³

“Si bien las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE no interactuaron físicamente con la infraestructura instalada interviniéndola, trasladándola o cortándola, al suspender el servicio adicional de Energía Eléctrica que es esencial para el funcionamiento de los equipos instalados en la infraestructura tuvo un efecto similar pues inhabilitó el uso de los equipos al punto que repercutió en los Usuarios del Servicio Público de Telecomunicaciones.

Si se observa que tal hecho fue realizado con el único propósito de forzar el pago de las sumas de dinero en mora sin cumplir el procedimiento establecido en el artículo 4.11.1.8 de la resolución 5890 del 24 de enero de 2020 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el debido proceso reconocido para el caso de Suspensión por la jurisprudencia constitucional colombiana, es para el tribunal claro que ese derecho legal que tiene el proveedor del Servicio de Alimentación de Energía Eléctrica quedó deslegitimizado ocasionando desde el instante de la Suspensión, el incumplimiento del contrato de Compartición, de las disposiciones regulatorias incorporadas a este y lo que es peor, de los principios fundantes en materia contractual como es la cláusula general de la buena fe y aparejado a esto, a los usuarios de COMCEL SA de no verse privados del servicio de telecomunicaciones contratado con esta última. Ello al extremo que como único mecanismo que tuvo COMCEL SA para restablecer el servicio a sus usuarios fue pagar la suma de dinero exigida unilateralmente por Emcali y a resarcir a sus clientes en dinero

¹³ Laudo arbitral de 5 de marzo de 2024. Página 46.

el tiempo durante el cual no tuvo las fuentes de poder habilitados para prestar el servicio de Telecomunicaciones. Conducta esta de las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE que este Tribunal considera que es reprochable jurídicamente, tipifica abuso del derecho derivado de la vulneración en concurso de los derechos fundamentales a la buena fe y el debido proceso, por lo que cumpliendo la finalidad resarcitoria que ocupa esta clase de acciones, hará en contra de las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI las declaraciones de condena que presenta en la parte resolutive de este Laudo”

Sin embargo, al descender al análisis del reconocimiento de los perjuicios irrogados a **COMCEL**, y especialmente al abordar las Pretensiones Quinta Declarativa¹⁴ y Primera de Condena¹⁵ de la demanda reformada, en las que, de manera general, se buscaba que **EMCALI** le pagara “la suma de COP\$18.310.391.372, más los intereses remuneratorios y/o moratorios causados sobre esa suma desde el momento en que fue recibida por EMCALI y hasta la fecha en que dicha suma sea restituida a COMCEL o aquella suma que resulte probada, por concepto del pago obtenido de manera constreñida e ilegal”, el Tribunal las despachó negativamente, sin mayor fundamentación y con un manifiesto y absoluto desprecio del acervo probatorio allegado al expediente de manera oportuna y con citación y

¹⁴ Pretensión Quinta Declarativa: “Declárese que los pagos efectuados por COMCEL valor de COP\$7.887.745.626 y COP\$12.234.780.70011, dentro de los cuales se encuentra comprendido el pago de la suma de COP\$18.310.391.372, carecen de causa legítima y fueron obtenidos de manera constreñida e ilegal por parte de EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P, en completo incumplimiento y desconocimiento del contrato de compartición.

¹⁵ Pretensión Primera de Condena: “Como consecuencia del incumplimiento referido, Condénese a EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P., a pagar en favor de COMCEL S.A. de la suma de COP\$18.310.391.372, más los intereses remuneratorios y/o moratorios causados sobre esa suma desde el momento en que fue recibida por EMCALI y hasta la fecha en que dicha suma sea restituida a COMCEL o aquella suma que resulte probada, por concepto del pago obtenido de manera constreñida e ilegal.

audiencia de ambas partes, e ignorando y omitiendo, por completo, hacer cualquier referencia a las pruebas incorporadas al expediente.

En efecto, para negar la indemnización de los COP\$18.310.391.372, reclamados en la reforma de la demanda por **COMCEL**, el Tribunal se limitó escuetamente a indicar en el laudo arbitral impugnado, lo siguiente:

“La ausencia de certeza del daño patrimonial relacionado con la pretensión primera principal condenatoria hace que no haya causa para que este Tribunal condene a la convocada al pago de COP \$18.310.391.372.”¹⁶

El anterior párrafo fue la única manifestación que hicieron los árbitros para resolver sobre la aludida pretensión indemnizatoria, sin más. En esos únicos renglones el Tribunal resolvió uno de los puntos más importantes de la controversia, omitiendo hacer cualquier motivación, explicación o argumentación al respecto.

Nótese que el Tribunal se limitó, simple y llanamente, a indicar que no había certeza del daño reclamado, pero no explicó ni fundamentó cómo llegó a esa conclusión.

En esas escasas tres líneas, sin mayor profundización y sin siquiera hacer una referencia a las pruebas oportunamente allegadas al expediente, desestimó el resarcimiento de un perjuicio, sin exponer las razones, detalles, valoraciones y silogismos que supuestamente le permitieron arribar a esa determinación.

¹⁶ Laudo arbitral de 5 de marzo de 2024. Página 53.

De una lectura integral del laudo se advierte que el Tribunal arbitral no motivó – siendo su obligación- las razones de hecho y de derecho en virtud de las cuales encontró que el daño reclamado no tenía certeza, incurriendo con ello, no solo en una desatención de los preceptos procesales obligatorios, sino en un fallo en conciencia, en el cual imperó el convencimiento y fuero interno de la mayoría de los árbitros.

Dicho en otras palabras, la negativa a reconocer la indemnización de *COP\$18.310.391.372* reclamada por **COMCEL**, es el típico ejemplo de un “fallo en conciencia” porque los árbitros impartieron justicia según su convencimiento interno y en lo que, a su juicio, entendieron como “adecuado”, sin llegar a explicar, ni siquiera mínimamente, las razones por las cuales llegaron a esa supuesta “ausencia de certeza” del daño, omitiendo hacer cualquier referencia en el laudo impugnado a las alegaciones de las partes, a lo probado y a lo debatido en el proceso, y sin explicar por qué razón echaron de menos esa “certeza”, ya fuera en su cuantía o causación, o en cualquiera otro de sus criterios de procedencia.

En ese sentido, salta a la vista y de manera patente, que esa decisión no fue objeto de la justificación necesaria que debe imperar en los fallos en derecho.

Si bien es cierto que el deber de los jueces motivar las sentencias y de exponer razonadamente las conclusiones,¹⁷ y de indicar en ellas el valor que se le asignó a cada medio probatorio,¹⁸ no implica necesariamente que deban escribir extensas consideraciones, estas sí deben contener, al menos,

¹⁷ Art. 280 del CGP

¹⁸ Art. 176 del CGP

una exposición detallada, clara y sucinta, de los argumentos y silogismos que permitieron arribar a las determinaciones que se consignaron en su parte resolutive.

No basta, entonces, con negar o conceder una pretensión o excepción – como aquí ocurrió- sino que, adicionalmente, el fallo debe contener *“la explicación de ese paso entre pruebas y hechos, a través de la sana crítica, la aplicación de reglas de inferencia plausibles, y los criterios de escogencia entre hipótesis de hecho alternativas”*¹⁹

La verdad es que no se entiende por qué razón en un laudo arbitral que debe ser proferido en derecho, donde resulta obligatoria la exposición razonada de sus fundamentos, el Tribunal se limitó a negar la supuesta certeza del daño, sin hacer ninguna alusión, a los siguientes puntos:

- a) Los árbitros han debido exponer una explicación – así fuera simple- del concepto de la “certeza” del daño que no encontraron acreditado.
- b) No hay en el laudo impugnado una sola explicación de por qué las pruebas arrimadas al acervo probatorio no eran suficientes o pertinentes para dar por acreditada esa “certeza”. Tampoco se expuso un silogismo lógico entre las probanzas, las alegaciones y las conclusiones.
- c) Tampoco hizo ninguna referencia el Tribunal en el laudo impugnado a que el pago de los *COP\$18.310.391.372* a cargo de **COMCEL** y a favor de **EMCALI** fue objeto de pronunciamiento en los hechos 27, 29, 42, 44 y 60 de la Reforma a la Demanda, los cuales no fueron desconocidos en la Contestación de la Demanda. Por ende, se trataba de una situación fáctica plenamente admitida por ambas partes, lo que ameritaba un mayor pronunciamiento.

¹⁹ Corte Constitucional, Sentencia T- 214 de 2012, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

- d) No se hizo en el laudo impugnado ninguna referencia a que con en el Dictamen Pericial que fuera aportado por **COMCEL**²⁰ y elaborado por la empresa **MARKUP CONSULTORES S.A.S**, se acreditó y demostró fehacientemente el pago por parte de **COMCEL** de la suma **COP\$18.310.391.372** a favor de **EMCALI**, dictamen pericial en el cual también se tasaron los intereses causados.
- e) Tampoco se hizo en el laudo impugnado ninguna referencia a los Alegatos de Conclusión y al Concepto del Ministerio Público sobre este tema.

Así las cosas, no cabe duda alguna acerca de que el laudo arbitral impugnado, en lo que corresponde a la resolución de la pretensión indemnizatoria de COP\$18.310.391.372, fue proferido en conciencia, debiendo ser en derecho, porque el Tribunal omitió inexcusablemente su deber de motivar su decisión de forma razonada y sustentada, para en su lugar, exponer una única conclusión denegatoria, sin mayores fundamentaciones o explicaciones y sin el razonamiento mínimo que exige la Ley procesal, de acuerdo con el convencimiento y fuero interno de la mayoría de los árbitros.

A riesgo de ser reiterativo, el Laudo arbitral impugnado deja muchas dudas en su motivación y fundamentación por las siguientes razones:

- ¿Cuáles fueron las omisiones probatorias que le impidieron al Tribunal encontrar certeza en el daño pretendido?
- ¿Por qué razón los documentos obrantes en el plenario y las aseveraciones de las partes dejaron de ser evaluadas por el Tribunal?

²⁰ Expediente Digital: Documento 066.2. Dictamen Pericial Convocante.

- ¿Por qué no existía certeza del daño si no era objeto de discusión que en efecto **COMCEL** le había pagado COP\$18.310.391.372 a **EMCALI**, como consecuencia de unas actuaciones que el mismo Laudo calificó de antijurídicas?
- ¿Qué valor probatorio se le asignó al dictamen pericial y a los documentos que hacían referencia al pago de los COP\$18.310.391.372, el cual fue plenamente controvertido por ambas partes?

Todas estas dudas que surgen del Laudo impugnado y que no se pueden resolver legalmente, permiten colegir, una vez más, que al momento de proferir el fallo los árbitros no motivaron ni razonaron su decisión – a pesar de que era su deber sino que, simplemente, hicieron prevalecer valer su fuero interno y su conciencia acerca de lo que consideraron justo.

El derecho positivo no permite que los jueces puedan tomar este tipo de decisiones, por mínimas que sean, sin que se exterioricen las explicaciones de rigor sobre sus razonamientos.

Se insiste: **una decisión sin una motivación y argumentación mínima constituye un fallo en conciencia y, para el presente caso, da lugar a la anulación de lo decidido.**

Por si lo anterior fuera poco, además de la falta de motivación, es evidente que el Tribunal desatendió por completo las pruebas del expediente relacionadas con la pretensión indemnizatoria de **COMCEL** de obtener el pago de COP\$18.310.391.372, pruebas estas que los árbitros despreciaron e ignoraron por completo y respecto de las cuales no explicaron por qué no les generaban la “certeza” que echaron de menos en el laudo impugnado.

El fallo en derecho es aquél en el que la decisión jurídica contenida en él es la expresión de las pruebas que obran en el expediente y de su proceso de valoración según las reglas legales y la sana crítica.

Así las cosas, habrá fallo en conciencia cuando la convicción de los árbitros deriva de pruebas que carecen de soporte valorativo o se aleja por completo de ellas.

Sobre este punto, también ha dicho el Consejo de Estado:²¹

“Debe advertirse, sin embargo, frente a esta último requisito, que la posibilidad de que el aspecto probatorio de un proceso arbitral configure una violación al deber de fallar en derecho, radica en que los árbitros estimen y asuman las pruebas y su apreciación con absoluto desdén, capricho o desconocimiento de las reglas básicas que el derecho ofrece para su valoración, convirtiéndose, auténticamente, en una violación al deber de fallar según las reglas jurídicas, expresadas a través de los medios de convencimiento de que disponen los árbitros”

Ahora, la principal regla de valoración probatoria a la que deben someterse los árbitros y los jueces es a aquella que reza que los elementos probatorios producidos o incorporados al proceso deberán evaluarse en su conjunto²² esto es, que la convicción del sentenciador no puede depender de una o de algunas pruebas, sino que debe indagar en lo que todas y cada una de ellas puedan aportar, en su conjunto, a la construcción de la verdad material,

²¹ Sentencia de 7 de febrero de 2008. Exp. 33.811, citada en la Sentencia de 8 de agosto de 2008. Radicado: 11001-03-26-000-2012-00010-00(43089)

²² Artículo 176 del CGP.

indicando en su providencia el mérito que le asignó a cada una y la credibilidad que ellas le generaron.

En el presente caso, el Tribunal no hizo ninguna referencia o valoración sobre las pruebas relacionadas con el pago que **COMCEL** le efectuó a **EMCALI** por la suma de COP\$18.310.391.372 pues, en el laudo impugnado, el Tribunal simplemente se limitó a decir que no había certeza, sin indicar el valor que le dio a cada medio de prueba incorporado válidamente al expediente y sin llegar a explicar por qué no le generaban el convencimiento necesario.

Así las cosas, el reproche que aquí se plantea, **no busca discutir o combatir la valoración que el Tribunal le dio a las pruebas, pues es sabido que ello no es permitido, lo que se pretende es comprobar que el Tribunal, de manera caprichosa y por su solo querer, NO VALORÓ NINGUNA DE LAS PRUEBAS RELACIONADAS con la pretensión indemnizatoria y se limitó a negarla, sin mayor fundamentación o argumentación.**

Para demostrar que el Tribunal despreció por completo el acervo probatorio y se limitó a negar la pretensión indemnizatoria de condenar a COP\$18.310.391.372 sin el raciocinio adecuado, se tiene que fueron desatendidas por completo las siguientes pruebas que fueron oportunamente incorporadas al proceso:²³

- a) La resolución 46414130-1 (Prueba 2 de la Demanda) por el cual **EMCALI** impuso una sanción a **COMCEL** por valor de COP\$18.310.391.372.

²³ Artículo 164 del CGP

- b) Dictamen pericial elaborado por **MARKUP** en el cual se hace constar el pago de los COP\$18.310.391.372 a cargo de **COMCEL** y a favor de **EMCALI**, así como los perjuicios causados.
- c) Manifestaciones de ambas partes (**COMCEL** y **EMCALI**), en los Hechos de la demanda reformada y en su contestación, donde no ellas discuten el pago de los COP\$18.310.391.372 y así lo admiten.
- d) Manifestaciones de los testigos **HILDA MARÍA PARDO HASCHE**, **JUAN PABLO VINUEZA** y **GUSTAVO TAMAYO ARANGO**, quienes explican y acreditan los diversos pagos realizados por **COMCEL** como consecuencia del proceder ilegal y arbitrario de **EMCALI**, según fue reconocido en el mismo Laudo impugnado.

Aunque todas estas pruebas demuestran y acreditan fehacientemente los pagos realizados por **COMCEL**, el Tribunal no las apreció, como era su deber, ni les dio el mérito que les correspondía ni explicó en el laudo impugnado por qué razón las descartaba o por qué no tenían la vocación probatoria para demostrar la certeza del daño que echó de menos al denegar en el laudo impugnado la pretensión indemnizatoria.

Así las cosas, es evidente que el Tribunal omitió su deber legal de indicar el valor que le asignó a cada elemento probatorio²⁴, y con ello dio a entender que su convicción surgió espontáneamente, con total desprecio de las pruebas y sin abordar la argumentación necesaria para avalar o descartar las pruebas, según su análisis en conjunto.

²⁴ Artículo 176 del CGP

Desde luego que la desidia probatoria del Tribunal y la falencia argumentativa del laudo impugnado conducen a demostrar que se falló en conciencia, con total desprecio de las reglas jurídicas que permean la actividad judicial, en tanto que la decisión de denegar la pretensión quinta declarativa y primera de condena (relacionadas con el pago de COP\$18.310.391.372.), no fue el resultado de valorar el acervo probatorio, sino que se estructuró en el querer interno de los árbitros, quienes, sin mayores justificaciones, se limitaron a alegar una supuesta falsa de “certeza” que jamás fue explicada.

Es más, en el salvamento de voto al Laudo, el árbitro disidente, a diferencia de sus colegas, expuso razonada y detalladamente las razones por las cuales con las pruebas arrimadas al expediente sí resultaba pertinente proferir una condena en contra de **EMCALI** y a favor de **COMCEL**, así:

“13.12. Las pruebas en el expediente revelaron que COMCEL se encontraba en conversaciones con EMCALI para solucionar un conflicto que no emanaba del Contrato de Condiciones Uniformes, sino del Contrato de Compartición, entre otras razones, porque así lo había señalado la Superintendencia de Servicios Públicos en la Resolución 20218500553355 del 5 de octubre de 2021, hasta el punto que se estaba discutiendo la elaboración de un contrato de transacción, del cual ya existía un borrador, por lo que EMCALI rompió en forma intempestiva esas negociaciones adelantadas con ocasión del Contrato de Condiciones Uniformes y acudió, por sí y ante sí, a la desconexión del servicio de energía de las fuentes de poder para obtener de esta forma el pago que, en su sentir, se adeudaba por COMCEL.

13.13. *Por lo anterior, estimo que la pretensión orientada a que se devuelva, restituya o pague por EMCALI a favor de COMCEL la suma pagada el día 6 de febrero de 2022, estaba llamada a prosperar, dado que se está en presencia de un perjuicio indemnizable a la luz de la responsabilidad contractual.*

13.4. *En efecto, se trata de una suma que se recibió por EMCALI sin que se respetaran las disposiciones negociales establecidas para tal fin y, por ende, COMCEL no debía pagar hasta tanto no se surtieran los pasos, etapas y procedimientos necesarios para establecer el valor adeudado, de suerte que su pago constituye una lesión o menoscabo al patrimonio de la Convocante. En consecuencia, al estar en presencia del incumplimiento de las obligaciones en cabeza de EMCALI derivadas del Contrato de Compartición y de un perjuicio claramente determinado en cuanto a su existencia y cuantía, para el suscrito existía suficiente sustento para ordenar su pago en la suma de \$12.234.780.700,00, debidamente indexada a la fecha del Laudo.”*

En conclusión, salta a la vista, según lo explicado en este acápite, que la decisión del Tribunal de denegar las Pretensiones Quinta Declarativa y Primera de Condena (relacionadas con la indemnización de perjuicios a favor de **COMCEL**) fue tomada en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, por cuanto:

- a) La conclusión denegatoria en el laudo arbitral impugnado no estuvo precedida de una argumentación razonada como lo exige la Ley procesal; y
- b) Porque hubo una desatención de la totalidad del acervo probatorio que el Tribunal se negó a valorar en conjunto, omitiendo indicar el mérito que le asignó a las pruebas pertinentes.

Aclaro que con el presente recurso extraordinario no se ataca el fondo del asunto, sino apenas los vicios eminentemente procesales en que incurrió el Tribunal arbitral y la forma como los árbitros expusieron su convencimiento sobre el asunto.

- (v) La denegatoria de las Pretensiones Quinta Declarativa y Primera de Condena fue tomada en conciencia, debiendo ser en derecho, pues el Tribunal ha debido cumplir con su deber de solicitar y decretar pruebas de oficio.**

Si en gracia de discusión se aceptase que la motivación y fundamentación del Tribunal arbitral para negar las pretensiones Quinta Declarativa y Primera de Condena (relacionadas con el pago de COP\$18.310.391.372) fue suficiente, habría que indicar que, de cualquier manera, también incurrió el Tribunal en un fallo en conciencia, toda vez que, en lugar de negar indemnización esperada, ha debido decretar pruebas de oficio, tal como se lo imponen los artículos 169 y siguientes del Código General del Proceso.

Es decir, el Tribunal falló en conciencia, por cuanto, a pesar de estar obligado por los ritos procesales a decretar pruebas de oficio para tasar la indemnización reclamada por **COMCEL**, omitió dicho deber, desatendiendo las cargas procedimentales que la ley le impone para proferir sentencia.

Reitero que en este caso no se trata de reabrir el debate probatorio, sino de enrostrar el error del Tribunal que, en lugar de cumplir con sus deberes procedimentales, prefirió darle prevalencia a su fuero interno, alegando una supuesta falta de “certeza” que se habría podido subsanar con el decreto de las pruebas de oficio.

De antaño la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que también se incurre en vicios de valoración probatoria cuando el Juez, estando obligado a ello, no acude a sus poderes oficiosos para decretar las pruebas que estime procedentes.

Sobre el punto, y sólo a manera ilustrativa, puede traerse colación lo dicho en la sentencia de 22 de agosto de 2000, radicado 6047, bajo el siguiente tenor:

“[Q]ue se incurre en error de derecho cuando el fallador ‘aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producción; o cuando, viéndolas en la realidad que ellas demuestran, no las evalúa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente prohíbe para el caso; o cuando, requiriéndose por la ley una prueba específica para demostrar determinado hecho o acto jurídico, no le atribuye a dicho medio el mérito probatorio por ella señalado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificación de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. Por cuanto en ninguna de estas hipótesis se trata de que el sentenciador deje de ver las pruebas que obran en el proceso o suponga las que no existen en él, sino de que en la tarea valorativa de ellas infringe las normas legales que regulan su producción, su conducencia o su eficacia, los errores en que incurre no son de hecho sino de derecho’ (G. J., t. CXLVII, página 61)”.

Recuérdese que en el imperio del Código de Procedimiento Civil, la facultad de decretar pruebas de oficio era sumamente excepcional y potestativa del

sentenciador de turno, tal y como se desprendía de una lectura de su artículo 180; ²⁵no obstante, el Código General del Proceso, en la redacción de su artículo 170, dispuso categóricamente que el Juez “deberá” ordenarlas, por su propia iniciativa y a favor del proceso, para esclarecer plenamente los hechos materia de controversia.

No en vano, la Corte Constitucional, en sede de tutela, ha decantado lo siguiente:²⁶

“El decreto oficioso de pruebas no es una mera liberalidad del juez, es un verdadero deber legal. De acuerdo a esta Corporación[90], el funcionario deberá decretar pruebas oficiosamente: (i) cuando a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia; (ii) cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o (iii) cuando existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar su decisión del sendero de la justicia material; (iv) cuidándose, en todo caso, de no promover con ello la negligencia o mala fe de las partes[91].” (Se destaca)

De acuerdo con lo anterior, cuando el Juzgador desatiende su deber legal de solicitar y decretar pruebas de oficio, estando dentro de los supuestos que lo obligaban a ello, incurre en un evidente vicio ***in procedendo*** por infringir las disposiciones legales que le permitían la producción y valoración de los elementos de convicción.

²⁵ Artículo 180 del C.P.C: “Podrán decretarse pruebas de oficio, en los términos probatorios de las instancias y de los incidentes, y posteriormente, antes de fallar”

²⁶ Sentencia T- SU 768 de 2014, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

Es decir, con esa omisión se afecta el contenido mismo de la sentencia, como quiera que se omite una ritualidad para la valoración probatoria que, por las circunstancias del caso, el juez debía propiciar por su propia cuenta.

La Corte Suprema de Justicia también ha resuelto en múltiples casos sobre el error de derecho por la omisión en el decreto y práctica de pruebas de oficio, explicando detalladamente que ese defecto en puridad constituye una barrera de acceso a la justicia.

Es así como en providencia de 15 de junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia, hizo un recuento jurisprudencial que, por su importancia, se cita en extenso:²⁷

“La Corte Suprema de Justicia ha tenido la oportunidad, en multitud de ocasiones, de evaluar el tema y, ha expuesto:

Ahora bien, el deber de decretar y practicar pruebas de oficio (arts. 37, num. 4º, 179 y 180 C. de P.C.), cuando ‘la utilidad y necesidad de la prueba, surgiera de la misma ley, por ésta exigirla imperativamente, o de las circunstancias propias del proceso respectivo, como cuando indubitadamente conduce al hallazgo de la verdad real y a determinar la decisión final’ (Sentencia de casación de 5 de mayo de 2000, expediente 5165), se impone en los casos ‘en que es obligatorio ordenarlas y practicarlas, como por ejemplo la genética en los procesos de filiación o impugnación; la inspección judicial en los de declaración de pertenencia; el dictamen pericial en los divisorios; las indispensables para condenar en concreto por frutos,

²⁷ Radicado SC7824

intereses, mejoras o perjuicios, etc. De análogo modo para impedir el proferimiento de fallos inhibitorios y para evitar nulidades’, eventos, en los cuales, ‘es ineludible el ‘decreto de pruebas de oficio’, so pena de que una omisión de tal envergadura afecte la sentencia’ (cas. civ. sentencia de 15 de julio de 2008, [SC-069-2008], exp. 1100131030422003-00689-01).

Específicamente, el legislador establece el expresado deber tratándose de la condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, por cantidad y valor determinados a cuyo propósito ‘[c]uando el juez considere que no existe prueba suficiente para la condena en concreto, decretará de oficio, por una vez, las pruebas que estime necesarias para tal fin’ (artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989, art. 1º, num. 137) y su omisión, considerada la naturaleza instrumental de la norma, ‘orientadora de la actividad procesal del juez’ (cas. civ. sentencia de 25 de febrero de 2005, exp. 7232), puede tipificar un error de derecho (Cas. Civ. 12 de septiembre de 1994, expediente 4293)’ (Sent. Cas. Civ. de 13 de abril de 2005, Exp. No. 1998-0056-02, reiterada en Sent. Cas. Civ. de 29 de noviembre de 2005, Exp. No. 01592-01)’ (cas.civ. sentencia de 12 de diciembre de 2006, [SC-174-2006], Expediente No. 11001-31-03-035-1998-00853-01) denunciable ‘a través de la vía del recurso extraordinario de casación apoyado en la causal primera, por la transgresión de normas de disciplina probatoria que conducen fatalmente a la violación de preceptos sustanciales, obviamente en el entendido de que se reúnan los demás requisitos de procedibilidad, y la preterición de tales medios de convicción tenga trascendencia para modificar la decisión adoptada’ (cas.civ. sentencia de 15 de julio de 2008, [SC-069-2008], exp.1100131030422003-00689-01) y, en determinadas hipótesis, de

desconocer el derecho a la prueba integrante del debido proceso, ‘constituye nulidad procesal, en los términos del numeral 6º del artículo 140 del C. de P.C.’ (cas. civ. sentencia de 28 de junio de 2005, [SC-136-2005], exp. 7901), ‘que puede alegarse inmediatamente después de ocurrida en la actuación siguiente (art. 143, inc. 5º C.P.C.); pero en el evento en que tampoco haya existido esta oportunidad, por haberse proferido ya sentencia de segunda instancia, dicha irregularidad puede alegarse en casación’ (cas. civ. de 22 de mayo de 1998, exp. 5053, reiterada en la sentencia de 28 de junio de 2005), más no un yerro fáctico –hace notar la corte-(CSJ SC 29 de abril de 2009, Ref. Exp. 2002-00435-01).

Dicha Corporación, recientemente, volvió a revisar el punto y dijo lo siguiente:

“También se produce este desfase cuando el sentenciador, sin razón y existiendo serios motivos para que lo haga, no acude a las facultades conferidas por los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil de decretar pruebas de oficio necesarias en la verificación de ‘los hechos relacionados con las alegaciones de las partes’, sin que ello conlleve suplir las cargas desatendidas por estas y que le son propias, sino el esclarecimiento de aquellas situaciones que obstruyen el deber de administrar pronta y cumplida justicia, pero siempre y cuando esa omisión tenga relevancia en la forma como se desató el pleito.

Es así como su práctica se hace imprescindible, entre otros, en asuntos de filiación, para verificar la relación genética de los involucrados; en los trámites de pertenencia, donde es obligatoria la inspección judicial del bien, salvo cuando se trata de viviendas de interés social; y cuando se requieren para imponer una condena

resarcitoria integral, al ocasionar un perjuicio que debe ser indemnizado.

Sin embargo, una recriminación por este sendero sólo se verifica si el medio de convicción está claramente sugerido o insinuado en el expediente, porque de no ser así, se estaría desconociendo la discrecionalidad con que cuenta el fallador al respecto. Ello ocurre, por ejemplo, cuando obra la prueba aunque indebidamente aducida o incorporada, hipótesis en la cual, de ser trascendente en la decisión, se hace imperioso regularizarla, porque de no hacerlo se produce una grave desatención de los elementos que conforman el plenario.

De antaño tiene explicitado la Sala que ‘uno de los avances más importantes que ha tenido el derecho procesal ha sido el de darle al juez o magistrado que tiene a su cargo el trámite de determinada controversia judicial la potestad de decretar pruebas de oficio. El proceso en estas circunstancias, si bien conserva su naturaleza dispositiva, morigera su estructura a través de la prerrogativa que se le concede al funcionario con el fin de acudir en la búsqueda de la llamada verdad real, con la cual pasa de simple espectador del debate entre los litigantes a convertirse en el director del mismo con plenos poderes, aunque respetando, como es obvio, las reglas aplicables fijadas por el legislador (...) El tema de la prueba de oficio hay que estudiarlo desde dos frentes que son disímiles, aunque se complementan (...) El primero hace referencia a los casos en los cuales por expreso mandato del legislador es obligatorio e ineludible el ‘decreto de pruebas de oficio’, so pena de que una omisión de tal envergadura afecte la sentencia, pudiendo ser aniquilada a través de la vía del recurso extraordinario de casación apoyado en la causal primera, por la transgresión de normas de disciplina probatoria que

conducen fatalmente a la violación de preceptos sustanciales, obviamente en el entendido de que se reúnan los demás requisitos de procedibilidad, y la preterición de tales medios de convicción tenga trascendencia para modificar la decisión adoptada (...) El punto fue recientemente analizado por la Corporación, en la sentencia N° 069 de 15 de julio de 2008, expediente 000689-01, en la que se precisó que 'no sólo es una facultad que tiene el juez sino que también es un deber, mucho más si se tiene en cuenta que hay algunos casos en que es obligatorio ordenarlas y practicarlas, como por ejemplo la genética en los procesos de filiación o impugnación; la inspección judicial en los de declaración de pertenencia; el dictamen pericial en los divisorios; las indispensables para condenar en concreto por frutos, intereses, mejoras o perjuicios, etc. De análogo modo para impedir el proferimiento de fallos inhibitorios y para evitar nulidades' (...) El segundo alude a las situaciones procesales en las cuales el juez, en aras de resolver el asunto sometido a su composición, puede usar la facultad discrecional de acudir a dicho mecanismo con el fin de aclarar los puntos oscuros o confusos que interesan al proceso (...) Es cierto que, en principio, el decreto de pruebas de oficio no es un mandato absoluto que se le imponga fatalmente al sentenciador, puesto que él goza de una discreta autonomía en la instrucción del proceso, circunstancia por la que no siempre que se abstenga de utilizar tal prerrogativa equivale a la comisión de su parte de un yerro de derecho. Además, no puede perderse de vista que hay casos en los cuales la actitud pasiva u omisiva del litigante que tiene la carga de demostrar determinada circunstancia fáctica, es la generadora del fracaso, bien de las pretensiones ora de sus defensas, por haber menospreciado su compromiso en el interior de la tramitación y en las oportunidades previstas por el legislador (...) Además, no puede perderse de vista, tal como lo tiene definido la jurisprudencia de la

Sala, que para que pueda acusarse válidamente mediante la presente vía de impugnación extraordinaria una sentencia por haber incurrido en error de derecho respecto de una prueba y, más concretamente, por no haber decretado alguna de oficio dentro de la discrecionalidad que le es propia al juzgador, es requisito inexcusable, insoslayable e imperativo que la misma obre en el expediente, pues, de no hallarse físicamente en él no es válido aceptar una acusación de dicho talante' (sentencia de 24 de noviembre de 2008, exp. 1998-00529-01. En iguales términos fallos de 15 de diciembre de 2009, expedientes 1999-01651-01 y 2006-00161-01) (CSJ SC 21 de octubre de 2013, Exp. 2009-00392-01).

Tal es la tendencia, día a día, de transformar la manera de cumplir la labor judicial que, las diferentes codificaciones adoptadas en los últimos tiempos, tienden, marcadamente, a comprometer al juzgador a modificar su rol en la dirección del pleito" (negrillas y subrayas del original)

De acuerdo con estos precedentes, no cabe duda alguna acerca de que el error procedimental por no haberse decretado pruebas de oficio, se configura con la presencia de dos supuestos:

- a) Que dicha potestad oficiosa tenga por finalidad, entre otras, procurar una condena en concreto de los daños, perjuicios y frutos; y
- b) Que la Parte interesada haya tenido un interés real y eficiente de cumplir con su carga probatoria pero que, a pesar de ello, no haya sido suficiente para generar suficiente certeza sobre el hecho que se pretendía demostrar.

Si habiéndose acreditado los anteriores elementos, el Sentenciador pretermitió su deber legal de decretar y practicar las pruebas de oficio, la providencia estará incurso en un error *in procedendo*, enjuiciable, como ya se explicó, en sede de anulación, por haber incurrido en un fallo en conciencia, ante la desatención de las ritualidades procesales.

Aplicando lo anterior al caso concreto, se tiene que el Tribunal Arbitral declaró que **EMCALI** obró de manera inadecuada respecto de **COMCEL** y que desatendió las reglas contractuales, reglamentarias y jurisprudenciales, para forzar a esta última a hacer un pago indebido.

No obstante, al momento de tasar los perjuicios solicitados en la pretensión quinta declarativa y primera de condena, el Tribunal, de manera infundada y sin mayor argumentación, se limitó a indicar que no existía “certeza” del daño relacionado con la restitución de los COP\$18.310.391.372.

De suerte que en el laudo impugnado el Tribunal impuso su conciencia y su noción de “justicia”, al denegar los perjuicios desestimando los medios de convicción allegados por **COMCEL**, sin proceder a concretarlos mediante el ejercicio del deber oficioso que le correspondía, según los ya mentados artículos 169, 170 y 171 del Código General del Proceso, error este que se hace más notorio si se tiene en cuenta que el hecho nocivo y la concreción de un perjuicio fueron alegados insistentemente, a tal punto que se decretó un dictamen pericial sobre ello.

La inaplicación del régimen probatorio por parte del Tribunal Arbitral se evidencia, entonces, en que hizo un esfuerzo argumentativo por desechar las pruebas del caso (sin explicar el por qué) y, de paso, omitió su deber legal de suplir esa deficiencia probatoria a través de los pedimentos de oficio

necesarios que le concedía la ley para así lograr cuantificar el perjuicio material que **COMCEL** había sufrido y que, por cuestiones puramente instrumentales, le fue negado por una supuesta falta de certeza.

Este comportamiento del Tribunal, conllevó a una evidente transgresión de los artículos 169, 170 y 171 del C.G.P y a la materialización del error procedimental endilgado.

Para mayor claridad, también aparece acreditado que sí se reunían los dos supuestos que habilitaban la intervención oficiosa del juez, así:

- a) En primer lugar, la Parte Demandante fue diligente en la consecución de la prueba técnica que cuantificara los perjuicios materiales, dando cumplimiento a los artículos 226 y 227 del Código General del Proceso, a cuyo efecto aportó una Experticia detallando e individualizando los perjuicios materiales sufridos con el pago de COP\$18.310.391.372; así mismo varios testigos declararon sobre el tema.

Así las cosas, la facultad oficiosa del Tribunal no tenía por finalidad suplir las cargas procesales de la demandante ni reemplazarla en su actividad procesal, sólo era necesaria para concretar unos perjuicios cuya cuantía estaba en vilo.

- b) En segundo lugar, el tema que está pendiente es uno de aquellos que la jurisprudencia acepta como susceptible de verificación por prueba de oficio, esto es, la concreción de la condena de unos perjuicios materiales. Su *“propósito no es otro que concretar la condena a que haya lugar, en lugar de extender un pronunciamiento adverso o negativo del derecho*

reclamado, por la sola razón de carecer o no existir elementos demostrativos para esa concreción”²⁸

De esta manera, si el Tribunal hubiera decretado las pruebas de oficio pertinentes, habría podido establecer el daño sufrido por **COMCEL**, con lo cual se habría dado aplicación al artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y a las normas procedimentales que gobiernan la expedición de sentencias.

En otras palabras: el laudo impugnado fue en conciencia porque el Tribunal desatendió las normas de producción probatoria que lo obligaban a solicitar pruebas de oficio, en lugar de negar tajantemente la pretensión.

(vi) El Tribunal falló en conciencia, debiendo ser en derecho, al denegar la pretensión segunda de condena de la Demanda Reformada por una supuesta falta de competencia.

El Tribunal negó la Pretensión Segunda de Condena de la Demanda Reformada por cuanto a su modo de ver no era competente para resolver sobre ella.

Sin embargo, esa decisión resultó sorpresiva y fundada en criterios eminentemente subjetivos, pues el mismo Tribunal, mediante el Auto de 21 de junio de 2023, se declaró plenamente competente para conocer de todas las pretensiones y excepciones del caso.

Este proceder contradictorio, sorpresivo y que desconoce el principio de preclusión que rige en materia procesal, permite advertir que la mayoría de

²⁸ Sentencia de 15 de junio de 2016, radicado SC7824, de la Corte Suprema de Justicia, sala civil.

los árbitros fallaron conforme a lo que determinaron como justo en su fuero interno y no con aplicación de los conceptos jurídicos imperantes.

En efecto, durante el desarrollo de la Primera Audiencia de Trámite, el Tribunal expidió el Auto No. 13²⁹ de 21 de junio de 2023, en el que se declaró competente para conocer y resolver *“de las controversias contractuales contenidas en la reforma de la demanda arbitral, en su contestación, en el escrito con el cual se describió el traslado de las excepciones de la contestación a la demanda reformada y de la objeción formulada al juramento estimatorio”*.

Decisión que fue ratificada en su totalidad en el Auto No. 15 de 28 de junio de 2023³⁰.

Por lo tanto, habiéndose el Tribunal declarado competente para resolver en derecho de todo el conflicto, no podía apartarse, sorpresiva y caprichosamente, de ese precedente, pues con ello incurrió en una denegación de justicia.

Las decisiones de la Primera Audiencia de Trámite (Competencia y Pruebas) constituyen el pilar fundamental sobre el que las Partes deben moverse, de ahí que no pueda cambiarse abruptamente de postura.

Inclusive, en la página 16 del Laudo arbitral impugnado, el Tribunal ratificó su competencia plena así:

²⁹ Expediente Digital: 040. ActaNo.09_ Primera Audiencia de trámite.

³⁰ Expediente digital: 041. ActaNo.10_Continuación Audiencia de trámite.

“Así las cosas, el Tribunal no encuentra causal legal para tomar una decisión acerca del tema de la competencia, contraria a la tomada sobre el particular en la primera audiencia de trámite, por lo que termina este punto afirmando que es competente para conocer de las controversias de que da cuenta la demanda arbitral”

No obstante, de manera sorpresiva y contraviniendo sus actos propios, el Tribunal al abordar la Pretensión Segunda de Condena, modificó tajantemente su criterio y se declaró incompetente para resolverla, trayendo a colación puntos nuevos que no habían sido tratados por las Partes:

“El Tribunal considera que la reconexión del servicio de energía es un rubro o concepto inherente al Contrato de Condiciones Uniformes y no al Contrato de Compartición que es materia de este proceso; en el primero es que encuentra su regulación y disciplina, pero no en el segundo, por lo que, siguiendo los planteamientos efectuados en este laudo arbitral en punto de la competencia del Tribunal, limitada al Contrato de Compartición, no accederá a dicha súplica en la medida en que es otro el escenario en donde debió ser discutida. Por ello, luego de analizado el caudal probatorio y revisado con detenimiento las alegaciones de las partes, ese específico rubro cuya reparación se solicita en el proceso no puede ser abordado con base en el Contrato de Compartición y, en consecuencia, no se adentrará el Tribunal en el estudio de fondo de dicha pretensión por carencia de competencia al efecto.”

Este cambio abrupto de posición, que, se insiste, es sorpresivo y atentatorio de la buena fe, así como de los principios de preclusión, se hizo sin mayor justificación y sin exponer en detalle los motivos del cambio.

En este caso, el Tribunal estaba obligado a una carga argumentativa mayor, pues debía contradecir sus actos propios, lo que lo obligaba a indicar detalladamente por qué su posición inicial había sido la incorrecta.

Sin embargo en este caso, el Tribunal se limitó a indicar que no era competente para conocer de la Pretensión Segunda de Condena, sin mayores esfuerzos interpretativos y sin dilucidar por qué los Autos 15 y 19 -ya ejecutoriados- (en los que el Tribunal se declaró plenamente competente) no resultaban aplicables a la Pretensión Segunda de Condena.

Ese comportamiento del Tribunal, de denegar una pretensión por falta de competencia, cuando su entendimiento previo había sido otro, indica que al momento de fallar los árbitros sobrepusieron su fuero interno y sus apreciaciones subjetivas, sin otorgar la motivación y sustento requeridos.

Esto se explicaría en el salvamento de voto del árbitro disidente, en los siguientes términos:

“4. En consecuencia, a juicio del suscrito árbitro, la declaración total de competencia vertida en las anteriores providencias adoptadas por unanimidad y con criterios fundamentados, implicaba que el Tribunal asumiera el estudio de fondo de las pretensiones declarativas y de condena formuladas como principales, las cuales se encaminaron a declarar la responsabilidad de EMCALI por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Compartición No. 500-GE-CIE-0618- 2016 del 17 de mayo de 2016 y la consecuencial reparación de los perjuicios causados.

5. Por ello, no comparto que, a pesar de la declaración inicial de competencia, en el Laudo la decisión mayoritaria haya sido la de considerar que no existe competencia para decidir la pretensión

segunda de condena, esto es, a la que apuntaba a la indemnización del daño causado por los costos que pagó COMCEL por la reconexión contraria a las estipulaciones pactadas en el contrato materia del proceso y por ser contrarias al mandato general de buena fe que debe gobernar todas las relaciones negociales.

6. Por las razones expuestas en el auto de asunción de competencia, insisto en que la totalidad de las Controversias que se debaten en este proceso se derivan del Contrato de Compartición No. 500-GE-CIE-0618-2016 del 17 de mayo de 2016 y no en el Contrato de Condiciones Uniformes, por lo que el Tribunal es competente para conocer de todas ellas.

7. Destaco al respecto, lo expresado en la Superintendencia de Servicios Públicos mediante Resolución No. 20218500553355 del 5 de octubre de 2021, señaló lo siguiente:

“(...) el contrato suscrito entre EMCALI y COMCEL para el presente asunto, cuyo objeto no es suministrar el servicio público domiciliario a quien habite de manera temporal o permanente un inmueble, ni se presta a un suscriptor para satisfacer sus necesidades básicas en su sitio de domicilio o trabajo, sino que es una energía eléctrica que se toma de la red eléctrica del distribuidor EMCALI E.I.C.E. E.S.P. para conectar UNOS EQUIPOS LLAMADOS FUENTES DE PODER que permiten prestar servicios de televisión a usuarios de COMCEL S.A (...).

Por lo expuesto, la controversia suscitada en el presente caso, no constituye uno de los actos enmarcados dentro de los eventos señalados en el artículo 154 de la ley 142 de 1994, en la medida en que no se ha afectado los actos de negación del contrato, suspensión, corte o facturación que se deriven de la prestación del servicio público

domiciliario o la ejecución del contrato de condiciones uniformes del servicio público, pues en este caso, la controversia es respecto a dineros adeudados por concepto de energía eléctrica suministrada a un operador de telecomunicaciones bajo un contrato que no es el de condiciones uniformes o de servicios públicas domiciliarios.” (Subraya y negrilla fuera del texto original).

8. Aunque la Superintendencia de Servicios Públicos no revocó expresamente la resolución impugnada, dejó claro que lo relacionado con el consumo de energía que estaba en discusión entre las partes se enmarcaba en el vínculo jurídico derivado del Contrato de Compartición, circunstancia a partir de la cual COMCEL, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, entendió que ese era el escenario en el que debía solucionarse la controversia. No fue un capricho, una conducta descuidada o desprovista de fundamento la que llevó a las partes, en especial a COMCEL, a entender que se estaba en presencia de una controversia originada en el Contrato de Compartición. Fue con base en lo anterior, se insiste, en que el Tribunal asumió competencia y debió resolver de fondo la pretensión segunda de condena.”

Así las cosas, la falta de una argumentación sólida para respaldar este cambio de postura sugiere que el Laudo, en lo que se refiere a denegar la pretensión segunda de condena, se fundamentó en criterios eminentemente subjetivos y, de paso, incongruentes con lo que el mismo Tribunal previamente había decidido.

La ausencia de una motivación adecuada sobre el cambio arbitrario de postura entre la Primera Audiencia de Trámite y el Laudo, materializa un fallo en conciencia, carente de sustento, que debe anularse para que, en su lugar, se profiera un nuevo laudo que resuelva de manera completa la

pretensión, atendiendo a la declaración de competencia que previamente se había emitido.

C. PRETENSIONES:

Por todo lo anteriormente expuesto, solicito al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali que, en sede de anulación, acceda a las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Declarar que la decisión de los árbitros de negar las Pretensiones Quinta Declarativa y Primera y Segunda de Condena de la demanda reformada, contenida en el laudo arbitral de 5 de marzo de 2024, fue una decisión tomada en conciencia o equidad, debiendo ser derecho, por todas, algunas o alguna de las razones descritas en este memorial.

SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración, se decrete la nulidad de los numerales Quinto, Octavo y Noveno de la Parte Resolutiva del Laudo arbitral de 5 de marzo de 2024.

TERCERO: Que se condene ejemplarmente a **EMCALI** al pago de la totalidad de los gastos y costas del proceso, incluidas las correspondientes agencias en derecho.

D. ANEXOS:

Acompaño al presente escrito, los siguientes:

1. Copia del poder que se me confirió para formular el presente recurso a nombre de **COMCEL S.A.**, el cual fue remitido directamente por **COMCEL**

desde su buzón oficial de correo electrónico para recibir notificaciones personales, al canal digital indicado por el Tribunal Arbitral para recibir notificaciones, cumpliendo así con la totalidad de los requisitos previstos en la ley 2213 de 2022.

2. El certificado de existencia y representación legal de **COMCEL S.A.**, expedido por la Cámara de comercio de Bogotá.
3. Certificado de “paz y Salvo” por concepto de honorarios, expedido por el Doctor **ROBERTO ZORRO TALERO**.

<p>E. OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN Y SUSTENTACION DEL RECURSO DE ANULACIÓN</p>

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la ley 1563 de 2012, el presente recurso extraordinario de anulación lo presento debidamente sustentado y de manera oportuna ante el Tribunal de Arbitramento, si se considera que lo radico en los canales digitales dispuestos por el propio Tribunal y su secretaria para recibir escritos y memoriales.

El término concedido por la ley para sustentar el recurso de anulación tan solo vence el próximo 29 de abril de 2014.

<p>F. <u>NOTIFICACIONES PERSONALES:</u></p>
--

Todas las que se nos deban hacer las recibiremos así:

1. **COMCEL S.A.** y su representante legal, **RODRIGO DE GUSMAO RIBEIRO**, en la Carrera 68 A. No 24 B – 10 de esta ciudad de Bogotá D.C., o en el correo electrónico: notificaciones@claro.com.co
2. El suscrito apoderado en la secretaria de su Despacho o mis oficinas particulares ubicadas en la Avenida 9 No. 103 A - 36, oficina 601 C de la ciudad de Bogotá, en el teléfono 6199699, o en el siguiente correo electrónico debidamente inscrito en el Registro Nacional de Abogados: lfsalazar@syrabogados.com

Cordialmente,



LUIS FERNANDO SALAZAR LÓPEZ
CC. 19.083.331 de Bogotá
T.P. # 12.386



ZORRO TALERO
- ABOGADOS -

PAZ Y SALVO

El suscrito abogado **ROBERTO ZORRO TALERO**, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, mediante el presente documento declaro y hago constar que la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR – COMCEL S.A. se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto del pago de los honorarios correspondientes al TRIBUNAL DE ARBITRAJE No. A-20220927/0873 - COMCEL S.A. vs EMCALI E.I.C.E. E.S.P., que fue adelantado ante la CAMARA DE COMERCIO DE CALI y donde fungieron como árbitros los doctores Luz Stella Alvarado Orozco, Iván Ramirez Württemberger y Henry Sanabria Santos.

Se expide en Bogota D.C., el 23 de abril de 2024.

Cordialmente,

ROBERTO ZORRO TALERO

C.C No. 19.324.951 de Bogotá

T.P. No 75.328 del C. S. de la J.

Bogotá, abril de 2024.

Doctores

Dr. Iván Ramírez Würtemberger– Presidente.

Dra. Luz Stella Alvarado Orozco- Árbitro.

Dr. Henry Sanabria Santos– Árbitro.

Dra. Rubria Elena Gómez Estupiñán- Secretaria

E.S.D.

Referencia : Proceso Arbitral de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. vs
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P

Radicado Interno :A-20220927/ 0873

Asunto : Poder Especial

SANTIAGO PARDO FAJARDO, mayor edad de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.425.417 de Bogotá, actuando en calidad de representante legal suplente de COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A., según consta en el certificado de existencia y representación legal que obra en el expediente, por medio del presente escrito manifiesto a ustedes que confiero poder especial, amplio y suficiente, al Doctor LUIS FERNANDO SALAZAR LÓPEZ, quien también es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.083.331 expedida en Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional de Abogado 12.386 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que formule, sustente y lleve hasta su finalización el recurso extraordinario de anulación contra el Laudo Arbitral proferido el día 5 de marzo de 2024, en el procedimiento de la referencia, cuyas solicitadas de aclaración, corrección y adición, propuestas por fueron negadas por medio del Auto No. 47 de 13 de marzo de 2024.

En ejercicio de su encargo el apoderado tendrá las más amplias facultades inherentes al mandato judicial de acuerdo con lo previsto en el Art. 77 del C.G.P., incluyendo pero no limitado a las de presentar el recurso extraordinario de anulación, interponer toda clase de recursos ordinarios y extraordinarios que sean procedentes; así como las de recibir, conciliar, transigir, comprometer, desistir y sustituir o delegar este poder en abogado de su confianza. Este poder también incluye las facultades pertinentes para obrar ante el Tribunal que conozca del aludido recurso de anulación.

Atentamente,
DocuSigned by:

Santiago Pardo Fajardo
C8E4C986876A45F...

SANTIAGO PARDO FAJARDO

C.C. 80.425.417 de Bogotá

Representante Legal Suplente COMCEL SA

Acepto

LUIS FERNANDO SALAZAR LÓPEZ

CC. 19.083.331 de Bogotá

TP. 12.386

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21
Recibo No. AA24274713
Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, EXISTE UNA PETICIÓN EN TRÁMITE, LA CUAL PUEDE AFECTAR EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE CONSTA EN EL MISMO.

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Sigla: COMCEL S A
Nit: 800.153.993-7
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00487585
Fecha de matrícula: 18 de febrero de 1992
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 22 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo I. NIIF Plenas.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 68A # 24B - 10
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: notificacionesclaro@claro.com.co
Teléfono comercial 1: 7429797
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 68A # 24B - 10
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: notificacionesclaro@claro.com.co
Teléfono para notificación 1: 7429797
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

E.P. No. 588, Notaría 15 de Santa Fe de Bogotá del 14 de febrero de 1.992, inscrita el 18 de febrero de 1.992 bajo el número 356.007 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: SOCIEDAD COLOMBIANA DE TELEFONIA CELULAR S.A. CE LULAR S.A. SIGLA CELULAR S.A.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 3799 de la Notaría 25 de Bogotá D.C. Del 21 de diciembre de 2004, inscrita el 27 de diciembre de 2004 bajo el número 969083 del libro IX, aclarada por la escritura pública No. 143 de la Notaría 25 de Bogotá D.C. Del 20 de enero de 2005, inscrita el 27 de enero de 2005 bajo el número 974105 del libro IX, la sociedad de la referencia se fusionó con las sociedades OCCIDENTE Y CARIBE CELULAR S. A. OCCEL S. A. y EMPRESA REGIONAL DE COMUNICACIONES CELULARES DE LA COSTA ATLANTICA S. A. CELCARIBE S.A. absorbiéndolas.

Que por Escritura Pública No. 1061 de la Notaría 41 de Bogotá D.C., del 28 de mayo de 2019, inscrita el 31 de Mayo de 2019 bajo el número 02472324 del libro IX, la sociedad de la referencia (absorbente) absorbe mediante fusión a la sociedad TELMEX COLOMBIA S A la cual se disuelve sin liquidarse.

Por Escritura Pública No. 4276 del 1 de noviembre de 2023 de la Notaría 41 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de Noviembre de 2023 , con el No. 03040186 del Libro IX, mediante fusión la sociedad: COMUNICACION CELULAR S.A - COMCEL S.A. (absorbente), absorbe a la sociedad: INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S.A. ESP. - INFRACEL S.A. ESP. (absorbida).

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE

Mediante Oficio No. 159/2022-00302-00 del 30 de enero de 2023, el Juzgado 11 Civil Del Circuito de Cali (Valle del Cauca), inscrito el 17 de Febrero de 2023 con el No. 00203376 del libro VIII, ordenó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia, dentro del proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual No. 760013103-011-2022-00302-00 de Yeferson Andrés Lozano Paredes C.C. 1.144.192.024, contra COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. CLARO NIT. 800.153.993-7.

Mediante Oficio No. 00736 del 08 de septiembre de 2023, el Juzgado 07 Civil Municipal de Oralidad de Barranquilla (Atlántico), inscrito el 25 de Septiembre de 2023 con el No. 00209732 del libro VIII, ordenó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia, dentro del proceso verbal de menor cuantía No. 0800140530072023-00117-00 de KPEC S.A.S. NIT. 900.130.891-8, contra COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. NIT. 800.153.993-7.

Mediante Oficio No. 029 del 09 de febrero de 2024, el Juzgado 02 Civil del Circuito de Cartago (Valle del Cauca), inscrito el 15 de Febrero de 2024 con el No. 00214751 del libro VIII, ordenó la inscripción de la demanda en la sociedad de la referencia, dentro del proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual No. 76-147-31-03-002-2024-00008-00 de Freiman Andrés Yusty Jaramillo C.C. 1.114.209.216, Yessica Joana Feijoo López C.C. 1.114.121.759 y Olga Cecilia Jaramillo Correa C.C. 13.013.752, contra SEGUROS SURAMERICANA DE SEGUROS "SURA" NIT. 890.903.407-9, CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P. NIT. 800.249.860-1 y COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A NIT. 800.153.993-7.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 14 de febrero de 2082.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tiene como objeto social el ejercicio de las siguientes

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

actividades: El objeto principal de la sociedad es la prestación y comercialización de servicios de comunicaciones, así como la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones dentro o fuera de Colombia, incluyendo, pero sin limitarse, tales como los servicios de telefonía móvil, móvil celular valor agregado, telemáticos, portadores, teleservicios, de difusión y de portador y demás a personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado y que se encuentren autorizadas por las leyes de Colombia y la contratación y con tal propósito podrá emprender todas las actividades relacionadas con dichos servicios, o que le sean conexas o complementarias, así como prestar toda clase de servicios relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones, con varias tecnologías existentes o que puedan llegar a existir en el futuro. Adicionalmente el objeto social de la compañía comprenderá comprar, vender arrendar y comercializar toda clase de bienes; importar y exportar toda clase de bienes y servicios, así como también prestar a terceros servicios de administración, de consultoría, de asesoría, de intermediación y de asistencia técnica; del mismo modo, la sociedad podrá prestar servicios y desarrollar actividades de cualquier tipo de corresponsalia, tales como bursátil, la bancaria y la cambiaria; y en general las demás autorizadas por la ley. Así mismo, la sociedad podrá: (I) Llevar a cabo el desarrollo de actividades y la prestación y comercialización de redes y servicios de comunicaciones dentro o fuera de Colombia. Así como prestar y comercializar toda clase de servicios relacionados con la tecnologías de la información y las comunicaciones; incluyendo la prestación y comercialización de cualquier clase de redes y servicios de comunicaciones en las diferentes modalidades de gestión que permita la legislación colombiana en cualquier orden territorial; (II) Construir, diseñar, explotar, usar, instalar, ampliar, ensanchar, expandir, renovar; modificar o revender redes y servicios de comunicaciones y sus diferentes elementos, para uso privado o público, nacionales o internacionales, y con al propósito podrá emprender todas las actividades relacionadas con dichos servicio, que le sean conexas o complementarias; (III) Diseñar, instalar, poner en funcionamiento y comercializar toda clase de equipos y sistemas eléctricos y electrónicos, y con tal propósito podrá emprender todas las actividades relacionadas con dichos servicios y/o productos, o que te sean conexas o complementarias; (IV) Desarrollar actividades de construcción, administración, comercialización y explotación e bienes muebles e inmuebles, incluyendo pero sin limitarse a edificios, centros comerciales, parqueaderos, locales comerciales,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

establecimientos de comercio, locales para oficinas, apartamentos para vivienda y edificaciones para hotelería; turismo y actividades comerciales, y con tal propósito podrá emprender todas las actividades relacionadas con dichos servicios, o que le sean conexas o complementarias; (V) Prestar servicios de banca móvil, billetera virtual y pagos electrónicos; (VI) Prestar servicios de apoyo a las operaciones de servicios postales de pago de operadores postales de pago habilitados y registrados ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá: A) Comprar; vender y alquilar los bienes muebles necesarios para el desarrollo normal de su objeto social; B) Comprar; vender; importar, exportar, adquirir u obtener a cualquier título y utilizar; toda clase de bienes y servicios relacionados con su objeto social; C) Celebrar contratos de venta, compra, permuta, arrendamiento, usufructo y anticresis sobre inmuebles; constituir y aceptar prendas e hipotecas; tomar o dar dinero en mutuo, con interés o sin él, respecto a operaciones relacionadas con su objeto social, y dar en garantía sus bienes muebles e inmuebles; D) Girar, adquirir, cobrar, aceptar, protestar, cancelar o pagar letras de cambio, cheques, pagarés y en general cualesquiera títulos valores y aceptarlos en pago; E) Celebrar contratos de sociedad con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, ya sea mediante la constitución de otras empresas o la adquisición de acciones o cuotas o partes de interés, F) Celebrar toda clase de negocios, actos o contratos conducentes para la realización de los fines sociales o que complementen su objeto social principal; G) Presentarse a licitaciones públicas o privadas, subastas, en el país o en el exterior y hacer las ofertas correspondientes suscribir los contratos resultantes de las mismas; H) Solicitar ser admitida en concordato, si a ello hubiere lugar. Adicionalmente, en desarrollo del objeto la sociedad podrá: (I) Concesión, operación distribución, asesoría y asistencia técnica del servicio de televisión abierta o cerrada por suscripción, radiodifundida, cableada y satelital, y de señales incidentales codificadas que intervienen dentro del espectro electromagnético y servicios de telecomunicaciones, concurrentes con el servicio de televisión por cable; igualmente el servicio de telefonía básica pública conmutada para la transmisión de cualquier tipo de red con acceso generalizado al público a nivel nacional, departamental y municipal ya sea directamente o en asocio con terceros o mediante contratos de riesgo compartido o en consorcio o uniones temporales y con tal propósito podrá emprende todas las actividades relacionadas con dichos servicios, o que le sean conexas

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

complementarias. (II) Vender toda clase de bienes muebles, de contado o a plazos actuar como intermediario en la venta de bienes y servicios, y con tal propósito poder emprender todas las actividades relacionadas con dichos servicios, o que le sea conexas o complementarias. (III) Prestar servicios de soporte administrativo, financiero tecnológico y de administración de recurso humano, y con tal propósito poder emprender todas las actividades relacionadas con dichos servicios, o que le sean conexas o complementarias. (IV) Ensamblar, diseñar, instalar poner en funcionamiento y distribuir comprar, vender y comercializar toda clase de equipos, productos, elementos y sistemas relacionados con las telecomunicaciones, electricidad electrónica, informática y afines, y con tal propósito podrá emprender todas las actividades relacionadas con dichos servicios, o que le sean conexas complementarias. (V) Prestar servicios de asesoría técnica, mantenimiento de equipo y redes, y consultoría en los ramos de electricidad, electrónica, informática, telecomunicaciones y afines, y con tal propósito podrá emprender todas las actividades relacionadas con dichos servicios, o que le sean conexas o complementarias. (VI) Transmitir o prestar servicios de transmisión digitalizada o analógica de información de cualquier naturaleza, incluida, pero sin limitarse a la de imágenes, textos y sonidos para toda clase de aplicaciones tales como videoconferencias, correo electrónico, acceso a bases de datos, financieras y telebanca, y con tal propósito podrá emprender todas las actividades relacionadas con dichos servicios, o que le sean conexas o complementarias. (vii) Emitir y recibir signas, señales, escritos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza para la prestación de servicios de comunicaciones, previas las autorizaciones de la Ley, y con tal propósito podrá emprender todas las actividades relacionadas con dichos servicios, o, que le sean conexas o complementarias. (VIII) Proyectar, instalar y equipar una red de telecomunicaciones de cubrimiento nacional mediante el empleo de elementos propios o de conexiones a redes nacionales y extranjeras con todos sus componentes, con sujeción a las licencias y permisos obtenidos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o de las autoridades pertinentes cuando a ello hubiere lugar. (IX) Utilizar el espectro electromagnético, las rampas ascendentes y descendentes de los segmentos satelitales cuyos servicios se encuentren debidamente coordinados para el respectivo país y los demás elementos de dichos segmentos, todo con arreglo a las normas vigentes sobre esta materia, así como prestar el servicio de provisión de segmento espacial a terceros. (X) La edición de libros,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

revistas, folletos o coleccionables seriados o publicaciones en base de papel o publicados en medios electromagnéticos de carácter científico o cultural, así como la distribución, venta, importación y/o comercialización de los mismos. (XI) Elaboración diseño de todo tipo de publicación escrita de carácter cultural y científico, tales como libros, revistas, folletos o coleccionables seriados o publicaciones en base de papel o publicados en medios electromagnéticos de carácter científico o cultural. (XII) Diagramación, encuadernación y publicación de todo tipo de publicaciones escrita de carácter cultural y científico, tales como libros, revistas, folletos o coleccionables arlados o publicaciones en base de papel o publicados en medios electromagnéticos le carácter científico o cultural. (XIII) Importación, venta y distribución de todo tipo de publicación escrita de carácter cultural y científica, tales como libros, revistas, folletos coleccionables seriados. (XIV) Solicitar tramitar, desistir y renunciar ante el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación o ante las demás entidades correspondientes, las respetivas licencias, trámites y autorizaciones para la ejecución de su objeto social. (XV) Llevar a cabo todas las actividades vinculadas con la publicación, venta y/o distribución de los productos que elabore. (XVI) Prestar servicio de asesoría en las materias afines con su objeto social y en materia financiera, administrativa, legal operativa. En desarrollo de su objeto la sociedad podrá ejecutar todas las actividades y actos necesarios para su logro y desarrollo, tales como: A) Ensamblar, diseñar instalar poner en funcionamiento y distribuir comprar vender y comercializar toda clase de equipos, productos, elementos y sistemas relacionados con las telecomunicaciones electricidad, electrónica, informática y afines; B) Promover y fundar establecimientos, almacenes, depósitos o agencias en Colombia o en el exterior; C) Adquirir a cualquier título toda)clase de bienes muebles o inmuebles, arrendarlos, enajenarlos o gravarlos. D) Obtener y explotar concesiones, privilegios, marcas,)nombres comerciales patentes, invenciones o cualquier otro bien incorporal, siempre que sean afines a objeto principal; E) Efectuar toda clase de operaciones de crédito activo o pasivo, girar, aceptar endosar recibir cobrar, descontar, adquirir, pignorar y pagar toda clase de instrumentos negociables; F) Celebrar toda clase de actos o contratos que se relacionen con el objeto social principal y participar en licitaciones y concursos público y privados o contrataciones directas; G) Celebrar toda clase de operaciones financieras, sin que ello implique intermediación financiera; H) Importar exporta realizar operaciones de comercio nacional e

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

internacional, así como representa agenciar y distribuir toda clase de bienes y servicios, relacionados con el objeto social principal; I) Invertir los excedentes de tesorería en valores que sean fácilmente realizables; J) Comprar o constituir sociedades de cualquier naturaleza; incorporarse en sociedades constituidas y/o fusionarse con ellas, siempre que dichas sociedades tengan objetivos equivalentes, similares o complementarios al objeto social de la sociedad; K) Registrar marcas, nombres comerciales y demás derechos de propiedad intelectual o industrial en Colombia y/o en otros países, usarlas bajo licencias de terceros; L) Transigir, conciliar, desistir y apelar las decisiones de los árbitros, de amigables compondores, o cualquier decisión judicial o administrativa; M) En general celebrar y ejecutar todos los actos o contratos civiles, mercantiles o de cualquier naturaleza que resulten convenientes al interés social, sea en su propio nombre, o por cuenta de terceros, o en participación con ellos, y siempre y cuando tengan relación directa con el objeto principal antes enunciado; N) comprar y vender acciones o derechos sociales, así como bienes muebles e inmuebles siempre que se haga con el único propósito de preservar y proteger el patrimonio social; O) Celebrar operaciones de mutuo con sociedades vinculadas, esto es, controladas por la sociedad o por las mismas sociedades que controlan ésta última, sin perjuicio de las autorizaciones que de requieran según estos estatutos, y sin que ello implique intermediación financiera. La sociedad podrá constituirse garante de obligaciones diferentes de las suyas propias, previo el cumplimiento de las autorizaciones y requisitos de estos estatutos. El desarrollo del objeto social de la compañía y la realización de todos los actos relacionados, conexos, complementarios o accesorios se regirán por el derecho privado, salvo que la Ley disponga lo contrario. Parágrafo: La empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A E.S.P - ETB S.A. E.S.P. mantendrá como mínimo dos (2) acciones en COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A, mientras mantenga la obligación para COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A de contar con un operador de telefonía fija dentro de sus accionistas.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$1.515.029.845.244,00
No. de acciones : 1.515.029.845.244,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor nominal : \$1,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$1.515.029.845.244,00
No. de acciones : 1.515.029.845.244,00
Valor nominal : \$1,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$1.515.029.845.244,00
No. de acciones : 1.515.029.845.244,00
Valor nominal : \$1,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración de la compañía, su representación legal y la gestación de sus negocios estarán a cargo del presidente quien tendrá cuatro (4) suplentes, quienes podrán actuar a nombre de la sociedad en cualquier tiempo mientras no se cancele su inscripción en el registro mercantil, sin que deba acreditarse en ningún caso una falta temporal, accidental o absoluta del presidente para que sus suplentes, como representantes legales puedan actuar válidamente en nombre de la sociedad con las mismas facultades y atribuciones del presidente. El presidente y sus cuatro (4) suplentes serán designados por la junta directiva. Las funciones del presidente y de los vicepresidentes serán establecidas por la junta directiva, sin perjuicio de las funciones que para esos cargos más adelante se establecen en estos estatutos. *** Sin perjuicio de lo anterior, la representación judicial de la sociedad en procesos ejecutivos de cualquier clase, podrá ser ejercida por el director de operaciones o por el gerente de cobranzas de la compañía. Así mismo, la representación judicial de la compañía, podrá ser ejercida por el gerente de protección comercial o por el gerente de reclamaciones del cliente o por el gerente de cobranzas. Para todos los efectos relacionados con cualquier trámite y diligencia que sea necesario adelantar en audiencias de conciliación prejudiciales o extraprocesales y en cualquier proceso judicial, arbitral o administrativo iniciado por o contra la sociedad, incluyendo pero sin limitarse a interrogatorios de parte, audiencias de conciliación, declaraciones, testimonios, pruebas, contestaciones, alegatos y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

cualquier otra actuación procesal, la representación legal de la sociedad podrá ser ejercida por el vicepresidente jurídico, el gerente jurídico, o por cualquiera de los abogados de la vicepresidencia jurídica de la compañía, según certificación que para el efecto expida la dirección de gestión humana de la compañía, o por el gerente de protección comercial; o por el director de planeación y diseño o por el director de operación y mantenimiento para asuntos de carácter técnico.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

A más de las facultades y deberes que ocasionalmente le asignen la asamblea o la Junta Directiva, el presidente tendrá las siguientes funciones: 1: Cumplir las decisiones de la asamblea y de la Junta Directiva. 2: Representar legalmente a la sociedad ante las autoridades de cualquier orden o naturaleza y ante otras personas jurídicas o naturales, hiera o dentro de juicio, con amplias facultades generales para el buen desempeño de su cargo, y con los poderes especiales que exige la ley para transigir, comprometer y desistir y para comparecer inclusive en juicio en donde se dispute la propiedad de bienes inmuebles, salvo los casos en que se requerirá autorización especial conforme a la ley o a los presentes estatutos. Sin perjuicio de lo anterior, la representación judicial de la sociedad en procesos ejecutivos de cualquier clase, y exclusivamente para participar en las audiencias de conciliación y absolver interrogatorios de parte que se lleven a cabo dentro de los mismos, podrá ser ejercida por el director de operaciones o por el gerente de cobranzas de la compañía. Así mismo, la representación judicial de la compañía, exclusivamente para efectos de dar respuesta a las acciones de tutela que sean instauradas en su contra y a las peticiones, quejas, reclamos y recursos que presenten los usuarios de los servicios de telecomunicaciones que preste la sociedad, podrá ser ejercida por el gerente de protección comercial o por el gerente de reclamaciones del cliente o por el gerente de cobranzas. Para todos los efectos relacionados con cualquier trámite y diligencia que sea necesario adelantar en audiencias de conciliación prejudiciales o extraprocesales y en cualquier proceso judicial, arbitral o administrativo iniciado por o contra la sociedad, incluyendo pero sin limitarse a interrogatorios de parte, audiencias de conciliación, declaraciones, testimonios, pruebas, contestaciones, alegatos y cualquier otra actuación procesal, la representación legal de la

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21**

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

sociedad podrá ser ejercida por el vicepresidente jurídico, el gerente jurídico, o por cualquiera de los abogados de la vicepresidencia jurídica de la compañía, según certificación que para el efecto expida la dirección de gestión humana de la compañía, o por el gerente de protección comercial; o por el director de planeación y diseño o por el director de operación y mantenimiento para asuntos de carácter técnico. 3: Manejar los asuntos y operaciones de la sociedad, tanto los externos como los concernientes a su actividad interna y, en particular, las operaciones, la contabilidad, la correspondencia y la vigilancia de sus bienes, todo dentro de las orientaciones e instrucciones emanadas de la asamblea y de la Junta Directiva. 4: Celebrar cualquier clase de acto o contrato para el desarrollo del objeto social de la compañía, pero para negocios de cuantía superior a cien mil (100.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, el presidente requerirá autorización previa y expresa de la Junta Directiva. 5: Nombrar y remover libremente a las personas que deban desempeñar los empleos creados por la empresa. 6: Constituir apoderados especiales para atender los asuntos judiciales y extrajudiciales, así como las tramitaciones que deban adelantarse ante las autoridades de cualquier orden, con la autorización previa de la Junta Directiva cuando esta se requiera. 7: Mantener frecuentemente informada a la Junta Directiva de la compañía sobre el funcionamiento de la sociedad y suministrarle los datos y documentos que aquella solicite. 8: Preparar y ejecutar el presupuesto aprobado por la Junta Directiva de la sociedad. 9: Ordenar y aprobar y estudios comerciales de factibilidad. 10: Decidir sobre los asuntos comerciales, financieros, técnicos y administrativos de la compañía que no requieran aprobación de la Junta Directiva. 11: Coordinar y controlar la gestión comercial de la compañía y mantener las relaciones públicas de la misma. 12: Organizar, dirigir y controlar el funcionamiento interno de la compañía. 13: Velar por que se lleven correctamente la contabilidad y los libros de la sociedad, autorizar y suscribir los balances e informes periódicos y someterlos a la consideración de la junta lo mismo que los estados financieros. 14: Presentar a la consideración de la Junta Directiva informe sobre la marcha de la compañía y sobre su situación comercial, técnica, administrativa y financiera. 15: Presentar anualmente y en forma oportuna a la Junta Directiva y a la Asamblea de Accionistas las cuentas, el inventario, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, junto con un informe general sobre la marcha de los negocios sociales durante el ejercicio inmediatamente anterior, las innovaciones introducidas y aquellas por cometerse en el futuro para

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

el cabal cumplimiento del objeto social. 16: Determinar la inversión de los fondos disponibles que no sean necesarios para las operaciones inmediatas de la sociedad. 17: Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la sociedad. 18: Fijar el número de empleos dependientes de la presidencia que demande el buen servicio de la compañía, con base en la planta de personal aprobada por la Junta Directiva y determinar su régimen de remuneración. 19: Ejercer las demás funciones legales y estatutarias y las que le asignen o deleguen la Asamblea General o la Junta Directiva. 20: Comparecer ante notario para legalizar las decisiones de la asamblea o de la Junta Directiva que requieran elevarse a escritura pública. 21. Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la Asamblea General de accionistas o Junta Directiva las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular. 22. Presentar a la Asamblea General de Accionistas un informe de identificación y calificación de riesgos, preparado por él o por una sociedad calificadora de valores si fuere el caso, y que hará parte integral del informe de gestión presentado al final de cada ejercicio contable. 23. Diseñar y determinar la forma en que se deberán revelar al público los estándares mínimos de información exigidos por las autoridades competentes, siempre que la sociedad esté obligada a ello. 24. Asumir la responsabilidad del control interno de la compañía e incluir en su informe de gestión los hallazgos relevantes que surjan durante el desarrollo de las actividades de control interno.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 450 del 15 de enero de 2024, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de enero de 2024 con el No. 03056671 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Presidente	Rodrigo De Gusmao Ribeiro	C.E. No. 302784

Por Acta del 26 de agosto de 2009, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de agosto de 2009 con el No. 01322263

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadosselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer	Alejandro	Cantu
Suplente Del	Jimenez	P.P. No. G18666954
Presidente		

Por Acta No. 434 del 9 de marzo de 2023, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de mayo de 2023 con el No. 02975395 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Tercer	Rafael Couttolenc Urrea	P.P. No. G22563297
Suplente Del		
Presidente		

Por Acta No. 221 del 10 de noviembre de 2009, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de noviembre de 2009 con el No. 01339850 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Cuarto	Fernando	Gonzalez
Suplente Del	Apango	C.E. No. 306817
Presidente		

Por Acta No. 352 del 16 de mayo de 2017, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 25 de mayo de 2017 con el No. 02227893 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal (Abogado De La Vicepresidencia Juridica)	Alvaro Jose Tovar Reyes	C.C. No. 94317564
Representante Legal (Abogado	Alejandro	Joya
Aparicio		C.C. No. 1010189106

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De La
Vicepresidencia
Juridica)

Por Acta No. 367 del 23 de julio de 2018, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de agosto de 2018 con el No. 02362358 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal (Abogado De La Vicepresidencia Juridica)	Fernando Andres Perdomo Cordoba	C.C. No. 1144033575

Por Acta No. 375 del 30 de mayo de 2019, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de junio de 2019 con el No. 02474392 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal (Abogado De La Vicepresidencia Juridica)	Javier Mauricio Manrique Casas	C.C. No. 11257516
Representante Legal (Abogado De La Vicepresidencia Juridica)	Adriana Marquez Acosta	C.C. No. 20422828
Representante Legal (Abogado De La Vicepresidencia Juridica)	Lina Marcela Miranda Jaramillo	C.C. No. 1088244076
Representante Legal (Abogado De La Vicepresidencia Juridica)	Mayle Milena Muñoz Sinning	C.C. No. 55234052

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De La
Vicepresidencia
Juridica)

Representante Ana Cristina Mendez C.C. No. 34568871
Legal (Abogado Gutierrez
De La
Vicepresidencia
Juridica)

Por Acta No. 392 del 2 de marzo de 2020, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de marzo de 2020 con el No. 02560989 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante	Natalia Correa Medina	C.C. No. 43166772
Legal (Abogado		
De La		
Vicepresidencia		
Juridica)		

Por Acta No. 401 del 8 de marzo de 2021, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de marzo de 2021 con el No. 02671573 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante	Johana Villanueva	C.C. No. 52824581
Legal (Abogado	Rodriguez	
De La		
Vicepresidencia		
Juridica)		

Representante	Andres Lisimaco Velez	C.C. No. 1110486889
Legal (Abogado	Hernandez	
De La		
Vicepresidencia		
Juridica)		

Por Acta No. 406 del 12 de julio de 2021, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de julio de 2021 con el No. 02724481

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal (Abogado De La Vicepresidencia Juridica)	Felipe Alejandro Garcia Avila	C.C. No. 1030551017

Por Acta No. 409 del 25 de octubre de 2021, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de octubre de 2021 con el No. 02758116 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal (Abogado De La Vicepresidencia Juridica)	Lina Marcela Ardila Ortiz	C.C. No. 1022378898

Por Acta No. 420 del 11 de mayo de 2022, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de mayo de 2022 con el No. 02840044 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal (Abogado De La Vicepresidencia Juridica)	Ingrid Juliet Torres Ospina	C.C. No. 52818441
Representante Legal (Abogado De La Vicepresidencia Juridica)	Adriana Lucia Galeano Galeano	C.C. No. 1110468886

Por Acta No. 426 del 12 de septiembre de 2022, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de septiembre de 2022 con el

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

No. 02881667 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal (Abogado De La Vicepresidencia Jurídica).	Juan Pablo Osorio Marin	C.C. No. 1053824988

Por Acta No. 432 del 17 de febrero de 2023, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de febrero de 2023 con el No. 02939024 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal (Abogado De La Vicepresidencia Jurídica)	Dora Sofia Morales Soto	C.C. No. 53107057

Por Acta No. 357 del 13 de octubre de 2017, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de noviembre de 2017 con el No. 02272863 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal (Abogado De La Vicepresidencia Jurídica)	Juan Pablo Vinueza Jurado	C.C. No. 80100616

Por Acta No. 434 del 9 de marzo de 2023, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de marzo de 2023 con el No. 02944067 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Suplente Del	Santiago Pardo Fajardo	C.C. No. 80425417

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Presidente

Por Documento Privado del 23 de mayo de 2011, de Representante Legal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de junio de 2011 con el No. 01485083 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente De Reclamaciones Del Cliente	Sonia Viviana Jimenez Valencia	C.C. No. 52252627

Por Acta No. 326 del 27 de abril de 2015, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de abril de 2015 con el No. 01933848 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal (Abogado De La Vicepresidencia Jurídica)	Evelio Hernan Arevalo Duque	C.C. No. 16536601

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Salvador Francisco Cortez Gomez	P.P. No. G11765902
Segundo Renglon	Oscar Von Von Hauske Solis	P.P. No. G16179650
Tercer Renglon	Rafael Couttolenc Urrea	P.P. No. G22563297
Cuarto Renglon	Andres Hidalgo Salazar	C.C. No. 79783138
Quinto Renglon	Gustavo Alberto Tamayo Arango	C.C. No. 79152549
Sexto Renglon	Carlos Hernan Zenteno De Los Santos	C.E. No. 590584

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SUPLENTE

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Juan Carlos Archila Cabal	C.C. No. 80409270
Segundo Renglon	Santiago Pardo Fajardo	C.C. No. 80425417
Tercer Renglon	Fernando Gonzalez Apango	C.E. No. 306817
Cuarto Renglon	Dario Cadena Lleras	C.C. No. 79939464
Quinto Renglon	Carlos Alberto Carvajal Moreno	C.C. No. 80756266
Sexto Renglon	Rodrigo De Gusmao Ribeiro	C.E. No. 302784

Por Acta No. 66 del 31 de marzo de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de abril de 2016 con el No. 02094121 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPAL

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Salvador Francisco Cortez Gomez	P.P. No. G11765902
Segundo Renglon	Oscar Von Von Hauske Solis	P.P. No. G16179650
Cuarto Renglon	Andres Hidalgo Salazar	C.C. No. 79783138
Quinto Renglon	Gustavo Alberto Tamayo Arango	C.C. No. 79152549

SUPLENTE

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Juan Carlos Archila Cabal	C.C. No. 80409270
Tercer Renglon	Fernando Gonzalez Apango	C.E. No. 306817

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Quinto Renglon Carlos Alberto C.C. No. 80756266
Carvajal Moreno

Por Acta No. 67 del 2 de junio de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de junio de 2016 con el No. 02113298 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Sexto Renglon	Carlos Hernan Zenteno De Los Santos	C.E. No. 590584

Por Acta No. 77 del 30 de marzo de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de junio de 2022 con el No. 02853739 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Tercer Renglon	Rafael Couttolenc Urrea	P.P. No. G22563297

SUPLENTE

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Cuarto Renglon	Dario Cadena Lleras	C.C. No. 79939464

Por Acta No. 79 del 31 de marzo de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de abril de 2023 con el No. 02954908 del Libro IX, se designó a:

SUPLENTE

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Renglon	Santiago Pardo Fajardo	C.C. No. 80425417
Sexto Renglon	Rodrigo De Gusmao Ribeiro	C.E. No. 302784

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 0000036 del 21 de marzo de 2002, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de abril de 2002 con el No. 00822241 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S	N.I.T. No. 860008890 5

Por Documento Privado No. 5843-22 del 17 de junio de 2022, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de junio de 2022 con el No. 02853433 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Angela Jaimes Delgado	C.C. No. 52085564 T.P. No. 62183-T

Por Documento Privado del 24 de agosto de 2023, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de septiembre de 2023 con el No. 03018711 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Revisor Fiscal	Camilo Ernesto Martinez Rivas	C.C. No. 1032384477 T.P. No. 167009 - T
Segundo Suplente Del Revisor Fiscal	Vicente Alonso Castillo Barrera	C.C. No. 1096483903 T.P. No. 257371 - T

PODERES

Por Escritura Pública No. 3476 de la Notaría 73 de Bogotá D.C., del 19 de octubre de 2020, inscrita el 30 de Octubre de 2020 bajo el registro No 00044237 del libro V, compareció Fernando González Apango identificado con cédula de extranjería No. 306.817 en su calidad de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Representante legal, por medio de la presente Escritura Pública, confiere poder especial, amplio y suficiente a Mauricio Acevedo Arias identificado con cédula ciudadanía No. 79.495.740 de Bogotá D.C., y/o Carlos Alberto Torres Rivera identificado con cédula ciudadanía No. 79.576.371 de Bogotá D.C., para que como apoderado especial, individual o colectivamente: (i) firme y presente en adelante las declaraciones de impuesto sobre la renta, impuesto al patrimonio, impuesto sobre las ventas, retenciones en la fuente de impuestos nacionales, y demás declaraciones tributarias a que haya lugar ante la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales - DIAN; (ii) firme y presente las declaraciones de impuestos municipales, distritales y departamentales, como es el caso de las declaraciones de impuesto de industria y comercio, autorretenciones y/o retenciones en la fuente de industria y comercio, impuestos prediales, impuestos de vehículos automotores, alumbrado público, sin limitarse a éstas, que se deban presentar ante las autoridades territoriales; (iii) suscriba y tramite derechos de petición, respuestas a requerimientos, mandamientos de pago, pliegos de cargos, emplazamientos proferidos por autoridades tributarias de todo orden, atienda visitas de inspección, verificación, fiscalizaciones y auditorias contables y/o tributarias que adelantes autoridades tributarias de todo orden a nombre de la Sociedad; (iv) El apoderado especial podrá suscribir y presentar las aclaraciones, modificaciones y correcciones que fuesen necesarias, respecto de todas las declaraciones consignadas en los numerales anterior, sea que hubiesen sido firmadas por el o por un tercero; (v) de igual manera queda facultado para firmar presentar todo tipo de formatos para el cumplimiento de obligaciones formales como por ejemplo, pero sin limitarse a ello, la presentación de información exógena en medios magnéticos. (vi) El apoderado especial podrá firmar todo tipo de trámites en Establecimientos de Comercio, Matricula Mercantil y RUP que comprendan la renovación, actualización, cancelación y/o cualquier otra solicitud a cargo de la Cámara de Comercio a nivel nacional. En ejercicio del poder conferido, el apoderado especial de la Sociedad podrá suscribir y presentar las aclaraciones, modificaciones y correcciones que fuesen necesarias sobre todas y cada una de las actuaciones anteriormente reseñadas.

Por Documento Privado del 24 de octubre de 2022, de representante legal, registrado en esta Cámara de Comercio el 31 de Octubre de 2022, con el No. 00048443 del libro V, la persona jurídica confirió

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

poder especial, amplio y suficiente a Mauricio Acevedo Arias, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79495740 expedida en Bogotá D.C., Carlos Alberto Torres Rivera, identificado con cedula de ciudadanía No. 79576371 expedida en Bogotá D.C., Para que como apoderado especial, individual o colectivamente: (i) firme y presente en adelante las declaraciones de impuesto sobre la renta, impuesto al patrimonio, impuesto sobre las ventas, retenciones en la fuente de impuestos nacionales, y demás declaraciones tributarias a que haya lugar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN (ii) firme y presente las declaraciones de impuestos municipales, distritales y departamentales, como es el caso de las declaraciones de impuesto de industria y comercio, autorretenciones, retenciones en la fuente de industria y comercio, impuestos prediales, impuestos de vehículos automotores, alumbrado público, sin limitarse a estas, que se deban presentar ante las autoridades territoriales; (iii) suscriba y tramite derechos de petición, repuestas a requerimientos, mandamientos de pago, pliegos de cargos, emplazamientos proferidos por autoridades tributarias de todo orden, atienda visitas de inspección, verificación, fiscalizaciones y auditorias contables y/o tributarias que adelantes autoridades tributarias de todo orden a nombre de la Sociedad; (iv) El apoderado especial podrá suscribir y presentar las aclaraciones, modificaciones y correcciones que fuesen necesarias, respecto de todas las declaraciones consignadas en los numerales anterior, sea que hubiesen sido firmadas por el o por un tercero; (v) de igual manera queda facultado para firmar y presentar todo tipo de formatos para el cumplimiento de obligaciones formales como por ejemplo, pero sin limitarse a ello la presentación de información exógena en medios magnéticos. (vi) El apoderado especial podrá firmar todo tipo de trámites en Establecimientos de Comercio, Matricula Mercantil y RUP que comprendan la renovación, actualización, cancelación y/o cualquier otra solicitud a cargo de la Cámara de Comercio a nivel nacional. En ejercicio del poder conferido, el apoderado especial de la Sociedad podrá suscribir y presentar las aclaraciones, modificaciones y correcciones que fuesen necesarias sobre todas y cada una de las actuaciones anteriormente reseñadas. Este poder especial se otorga en Bogotá D.C. el veinticuatro (24) del mes de octubre 2022 y estará vigente hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2023, inclusive.

Por Documento Privado del 1 de agosto de 2023, de Representante Legal, registrado en esta Cámara de Comercio el 4 de Agosto de 2023, con el No. 00050599 del libro V, la persona jurídica confirió poder

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

especial amplio y suficiente a los señores: 1. Luis Miguel Porto Velasquez, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.533.055, de Barranquilla, quien ostenta el cargo de Director Región 1 de la Compañía; 2. Diego Alejandro Marin Monsalve, identificado con cedula de ciudadanía No. 71.277.182, de Medellín, quien ostenta el cargo de Director Región 2 de la Compañía; 3. Carlos Mario Gonzalez Mejia, identificado con cedula de ciudadanía No. 94.411.150 de Cali, quien ostenta el cargo de Director Región 3 de la Compañía; 4. Jose Luis Vasco Garcia, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.861.675, de Bogotá, quien ostenta el cargo de Director Región 4 de la Compañía; 5. German Alfonso Velasquez Diaz, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.270.085, de Bucaramanga, quien ostenta el cargo de Director Región 5 de la Compañía; para que individualmente, por término indefinido y mientras ostenten el respectivo cargo de Director Región, ejerzan en nombre de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. la facultad de celebrar contratos de alquiler, arrendamiento, comodato para la instalación de estaciones base y/o equipos pasivos de red en terrazas o azoteas, con personas naturales o jurídicas, de cualquier naturaleza pública o privada, cuyo valor o forma de pago sea: (i) contraprestación de instalación de cortesías para la prestación -sin costo- del servicio(s) o (ii) Comodatos sin costo para la compañía. La suscripción de los mencionados contratos que tengan otra forma de contraprestación, no son objeto del presente poder conferido. Dentro de la facultad otorgadas en el presente poder, no se entiende incluida la suscripción de actos relacionados con la ejecución, adición, modificación, terminación. y liquidación de los citados contratos. Que no obstante el otorgamiento del presente poder, cualquiera de los Representante Legales de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. también podrá(n) suscribir los mencionados contratos y las modificaciones a los mismos. Este poder especial estará vigente desde el primero (1) de agosto de 2023.

Por Escritura Pública No. 5320 del 02 de octubre de 2023, otorgada en la Notaría 73 de Bogotá D.C., registrada en esta Cámara de Comercio el 11 de Octubre de 2023, con el No. 00051096 del libro V, la persona jurídica confirió poder especial, amplio y suficiente, para que de forma individual o conjunta la Abogada Lastenia Isabel Mosquera Ruiz, identificada con la cedula de ciudadanía número 55.224.911 expedida en Barranquilla y portadora de la Tarjeta Profesional de Abogada número 344.809 del Consejo Superior de la Judicatura para que como Apoderada Especial, firme, presente Recursos de Reconsideración, Recursos de Reposición, Escritos de Excepciones a Mandamientos de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Pago a que haya lugar ante las Autoridades Tributarias del país y/o Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, en procesos cuya cuantía no supere las quince mil unidades de valor tributario (15.000 UVT). En ejercicio del poder conferido, la Apoderada Especial de, la Sociedad podrá suscribir y presentar las aclaraciones, modificaciones y correcciones que fueren necesarias sobre todas y cada una de las actuaciones anteriormente señaladas.

Por Documento Privado del 10 de octubre de 2023, de Representante Legal, registrado en esta Cámara de Comercio el 26 de Octubre de 2023, con el No. 00051171 del libro V, la persona jurídica confirió poder especial, amplio y suficiente, a Mauricio Acevedo Arias, identificado con cedula de ciudadanía número 79.495.740 expedida en Bogotá D.C., y/o Carlos Alberto Torres Rivera, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.576.371 expedida en Bogotá D.C., para que como apoderado especial, individual o colectivamente (I) firme y presente en adelante las declaraciones de impuesto sobre la renta, impuesto al patrimonio, impuesto sobre las ventas, retenciones en la fuente de impuestos nacionales, y demás declaraciones tributarias a que haya lugar ante la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN; (II) firme y presente las declaraciones de impuestos municipales, distritales y departamentales, como es el caso de las declaraciones de impuesto de industria y comercio, autorretenciones y/o retenciones en la fuente de industria y comercio, impuestos prediales, impuestos de vehículos automotores, alumbrado público, sin limitarse a éstas, que se deban presentar ante las autoridades territoriales, (III) suscriba y tramite derechos de petición, respuestas a requerimientos, mandamientos de pago, pliegos de cargos, emplazamientos proferidos por autoridades tributarias de todo orden, atienda visitas de inspección, verificación, fiscalizaciones y auditorias contables y/o tributarias que adelante autoridades tributarias de todo orden a nombre de la Sociedad; (IV) El apoderado especial podrá suscribir y presentar las aclaraciones, modificaciones y correcciones que fuesen necesarias, respecto a todas las declaraciones consignadas en los numerales anteriores, sea que hubiesen sido firmadas por el o por un tercero; (V) de igual manera queda facultado para firmar y presentar todo tipo de formatos para el cumplimiento de obligaciones formales como por ejemplo, pero sin limitarse a ello, la presentación de Información exógena en medios magnéticos; (VI) El apoderado especial podrá firmar todo tipo de tramites en Establecimientos de Comercio, Matricula Mercantil y RUP que comprendan la renovación, actualización, cancelación y/o

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

cualquier otra solicitud a cargo de la Cámara de Comercio a nivel nacional. En ejercicio del poder conferido, el apoderado especial de la Sociedad podrá suscribir y presentar las aclaraciones, modificaciones y correcciones que fuesen necesarias sobre todas y cada una de las actuaciones anteriormente reseñadas. Este poder especial estará vigente hasta que sea revocado por el otorgante.

Por Documento Privado del 5 de diciembre de 2023, de Representante Legal, registrado en esta Cámara de Comercio el 7 de Diciembre de 2023, con el No. 00051443 del libro V, la persona jurídica confirió poder especial amplio y suficiente a la señora Maria Luisa Escolar Sundheim, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.781.111 de Barranquilla, en su calidad de Directora Ejecutiva de la Unidad Mercado Corporativo, por término indefinido y en tanto ocupe el mencionado cargo, para que ejerza en nombre de COMUNICACIÓN CELULAR S.A, COMCEL S.A. la facultad de presentar ofertas o propuestas y celebrar contratos con clientes corporativos y pymes o entidades de cualquier naturaleza pública o privada para el suministro a la venta de servicios que se encuentren dentro del objeto de la compañía, hasta por un monto anual en pesos colombianos equivalente a doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD \$250.000), calculado a la tasa representativa del mercado (TRM), del día de firma de la respectiva oferta o del respectivo contrato. La suscripción de los mencionados contratos con clientes que superen el monto en pesos colombianos equivalente a doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD \$250.000) anuales, no son objeto de este poder. Segundo: Dentro de las facultades otorgadas en el presente poder, igualmente se entiende incluida la suscripción de todo acto relacionado con la ejecución, adición, modificación, terminación y liquidación de los citados contratos, dentro de los límites aquí indicados. Tercero: Que no obstante el otorgamiento del presente poder, cualquiera de los representantes legales de COMUNICACIÓN CELULAR S.A., COMCEL S.A. También podrán suscribir los mencionados contratos y las modificaciones a los mismos.

Por Documento Privado del 01 de noviembre de 2023, de Representante Legal, registrado en esta Cámara de Comercio el 12 de Diciembre de 2023 con el No. 00051459 del libro V, la persona jurídica otorga en materia tributaria Poder Especial, amplio y suficiente, a la abogada Evelyn Mayerly Moncada Cortez, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.091.133.473 de La Esperanza (Antioquia) y Tarjeta Profesional de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Abogado No. 320.998 del Consejo Superior de la Judicatura para que como Apoderado Especial, firme y presente Recursos de Reconsideración, Recursos de Reposición, Escritos de Excepciones a Mandamientos de Pago y Revocatorias Directas que haya lugar ante las Autoridades Tributarias del país y/o Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, en todo tipo de procesos de orden Tributario hasta una cuantía de 7.500 UVT. En ejercicio del poder conferido, el Apoderado Especial de la Sociedad podrá suscribir y presentar las aclaraciones, modificaciones y correcciones que fueren necesarias sobre todas y cada una de las actuaciones anteriormente reseñadas. Este poder especial tiene vigencia desde el primero (01) del mes de noviembre de 2023 y su duración es de carácter indefinido, hasta tanto no sea revocado.

REFORMAS DE ESTATUTOS

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
3.763	14-V- 1992	4 STAFE BTA	19- V -1.992 NO.365425
2.746	29-VII-1992	13 STAFE BTA	30-VII-1.992 NO.373190
009	4- I-1994	22 STAFE BTA	6- I-1.994 NO.433.167
51	17- II-1994	55 STAFE BTA	25- II-1.994 NO.438.849
1.220	5- V- 1994	40 STAFE BTA	13-V- 1.994 NO.447.557
3.335	17 -X -1995	25 STAFE BTA	19- X -1.995 NO.512.990
20	11-III-1996	MIAMI-E.FLORIDA	18-III-1.996 NO.531.189
		ESTADOS UNIDOS.	
0.629	26-II--1997	25 STAFE BTA	05-III-1.997 NO.576.480

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0001231 del 2 de abril de 1998 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	00628684 del 2 de abril de 1998 del Libro IX
E. P. No. 0004515 del 24 de noviembre de 1998 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	00658182 del 26 de noviembre de 1998 del Libro IX
E. P. No. 0001425 del 9 de mayo de 2000 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	00728157 del 11 de mayo de 2000 del Libro IX
E. P. No. 0000151 del 24 de enero	00762167 del 26 de enero de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de 2001 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	2001 del Libro IX
E. P. No. 0000191 del 30 de enero de 2002 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	00813057 del 4 de febrero de 2002 del Libro IX
E. P. No. 0000360 del 20 de febrero de 2002 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	00815979 del 22 de febrero de 2002 del Libro IX
E. P. No. 0000445 del 1 de marzo de 2002 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	00817064 del 1 de marzo de 2002 del Libro IX
E. P. No. 0000755 del 8 de abril de 2002 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	00822360 del 12 de abril de 2002 del Libro IX
E. P. No. 0001196 del 27 de mayo de 2002 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	00829084 del 29 de mayo de 2002 del Libro IX
E. P. No. 0001774 del 26 de julio de 2002 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	00838467 del 2 de agosto de 2002 del Libro IX
Cert. Cap. del 30 de noviembre de 2002 de la Revisor Fiscal	00858711 del 23 de diciembre de 2002 del Libro IX
E. P. No. 0000892 del 7 de abril de 2004 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	00928817 del 12 de abril de 2004 del Libro IX
E. P. No. 0003799 del 21 de diciembre de 2004 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	00969083 del 27 de diciembre de 2004 del Libro IX
E. P. No. 0000143 del 20 de enero de 2005 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	00974105 del 27 de enero de 2005 del Libro IX
E. P. No. 0003599 del 6 de diciembre de 2005 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	01025017 del 7 de diciembre de 2005 del Libro IX
E. P. No. 0001647 del 28 de junio de 2006 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	01065192 del 6 de julio de 2006 del Libro IX
E. P. No. 0000778 del 30 de marzo de 2007 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	01121935 del 4 de abril de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0003418 del 12 de diciembre de 2007 de la Notaría 25	01177201 del 13 de diciembre de 2007 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de Bogotá D.C.

E. P. No. 0001035 del 24 de abril de 2008 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	01209504 del 28 de abril de 2008 del Libro IX
E. P. No. 0003341 del 22 de diciembre de 2008 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	01264952 del 23 de diciembre de 2008 del Libro IX
E. P. No. 1217 del 8 de junio de 2009 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	01306912 del 23 de junio de 2009 del Libro IX
E. P. No. 2013 del 15 de septiembre de 2009 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	01328250 del 21 de septiembre de 2009 del Libro IX
E. P. No. 0714 del 12 de abril de 2010 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	01375776 del 15 de abril de 2010 del Libro IX
E. P. No. 0714 del 12 de abril de 2010 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.	01380838 del 5 de mayo de 2010 del Libro IX
E. P. No. 2387 del 16 de octubre de 2012 de la Notaría 41 de Bogotá D.C.	01678301 del 2 de noviembre de 2012 del Libro IX
E. P. No. 1019 del 9 de junio de 2016 de la Notaría 41 de Bogotá D.C.	02113287 del 15 de junio de 2016 del Libro IX
E. P. No. 872 del 18 de mayo de 2017 de la Notaría 41 de Bogotá D.C.	02231536 del 7 de junio de 2017 del Libro IX
E. P. No. 1061 del 28 de mayo de 2019 de la Notaría 41 de Bogotá D.C.	02472324 del 31 de mayo de 2019 del Libro IX
E. P. No. 1753 del 22 de agosto de 2019 de la Notaría 41 de Bogotá D.C.	02498813 del 23 de agosto de 2019 del Libro IX
E. P. No. 111 del 29 de enero de 2020 de la Notaría 41 de Bogotá D.C.	02547358 del 30 de enero de 2020 del Libro IX
E. P. No. 4276 del 1 de noviembre de 2023 de la Notaría 41 de Bogotá D.C.	03040186 del 29 de noviembre de 2023 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado No. 0000001 del 14 de diciembre de 2005 de Representante Legal, inscrito el 3 de marzo de 2006 bajo el número 01042114 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matriz: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S A ESP QUE SE PODRA ABREVIAR EN INFRACEL S A ESP

Domicilio: Bogotá D.C.

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Por Documento Privado del 27 de enero de 2011 de Representante Legal, inscrito el 31 de enero de 2011 bajo el número 01448875 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matriz: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- TELMEX COLOMBIA S A

Domicilio: Bogotá D.C.

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Certifica:

Por Documento Privado No. 0000001 del 14 de diciembre de 2005 de Representante Legal, inscrito el 2 de marzo de 2006 bajo el número 01041846 del libro IX, comunicó la sociedad matriz:

- AMOV COLOMBIA S A

Domicilio: Bogotá D.C.

Presupuesto: No reportó

Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.

Por Documento Privado No. 0000001 del 13 de febrero de 2006 de Representación Legal, inscrito el 2 de marzo de 2006 bajo el número 01041848 del libro IX, comunicó la sociedad matriz:

- AMÉRICA MÓVIL S.A.B. DE C.V.

Domicilio: (Fuera Del País)

Nacionalidad: Mexicana

Actividad: Prestación y comercialización de servicios de telecomunicaciones inalámbricas tales como los servicios de telefonía móvil, móvil celular, valor agrado, telemáticos, portados y demás, y con tal propósito podrá emprender todas las actividades relacionadas con dichos servicios o que le sean

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

conexas o complementarias
Presupuesto: Numeral 1 artículo 261 de Código de Comercio y artículo 28 de la Ley 222 de 1995

Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.

Fecha de configuración de la situación de control : 2005-12-14

Por Documento Privado del 27 de enero de 2010 de Representante Legal, inscrito el 9 de febrero de 2010 bajo el número 01360388 del libro IX, comunicó la sociedad matriz:

- AMÉRICA MÓVIL S.A.B. DE C.V.

Domicilio: (Fuera Del País)

Nacionalidad: Mexicana

Actividad: Prestación y comercialización de servicios de telecomunicaciones inalámbricas tales como los servicios de telefonía móvil, móvil celular, valor agrado, telemáticos, portados y demás, y con tal propósito podrá emprender todas las actividades relacionadas con dichos servicios o que le sean conexas o complementarias

Presupuesto: Numeral 1 artículo 261 de Código de Comercio y artículo 28 de la Ley 222 de 1995

Que se ha configurado una situación de grupo empresarial con la sociedad de la referencia.

Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2015-05-26

Por Documento Privado de representación legal del 01 de abril de 2003, inscrito el 02 de mayo de 2003 bajo el No. 877585, la sociedad de la referencia COMCEL S.A. (matriz) actualiza la información relativa a los presupuestos que dan lugar al grupo empresarial según acuerdo de administración suscrito por la matriz COMCEL S.A. Y CELCARIBE S.A. EMPRESA REGIONAL DE COMUNICACIONES CELULARES DE LA COSTA ATLANTICA S. A. CELCARIBE S.A. (subordinada), modificando el registro inscrito bajo el No. 870427 del libro IX.

Se aclara la situación de control inscrita bajo el No. 01448875 del libro IX, en el sentido de indicar que la sociedad matriz COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. comunica que ejerce situación de control sobre la sociedad TELMEX COLOMBIA S.A. Subordinada.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Se aclara la situación de control y grupo empresarial inscrito el 2 de marzo de 2006 bajo el No. 01041848 del libro IX, modificado por Documento Privado del 27 de enero de 2010 del Representante Legal, inscrita el 9 de febrero de 2010 bajo el No. 01360388 del libro IX, modificado por Documento Privado del 31 de mayo de 2016 del representante legal, inscrito el 8 de mayo de 2016 bajo el No. 02110915 del libro IX, modificado por Documento Privado del 24 de mayo de 2018 del representante legal, inscrito el 1 de junio de 2018 bajo el No. 02346054 del libro IX, modificado por Documento Privado del 7 de diciembre de 2023 del Representante Legal, inscrito el 14 de Diciembre de 2023 bajo el No. 03045028 del Libro IX, en el sentido de indicar que la sociedad extranjera AMÉRICA MÓVIL S.A.B. DE C.V.(matriz) comunica que se configura situación de control y grupo empresarial con las sociedades AMOV COLOMBIA S.A., COMUNICACIÓN CELULAR S.A., IDEAS MUSICALES DE COLOMBIA S.A.S., OPERADORA DE PAGOS MOVILES DE COLOMBIA S.A.S, HITSS COLOMBIA S.A.S. y HITSS SOLUTIONS S.A. DE C.V. casa principal de HITSS SOLUTIONS S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA (subordinadas).

CERTIFICAS ESPECIALES

Que por resolución No.320-4642 del 27 de diciembre de 1.993 de la Superintendencia de Sociedades, inscrita el 29 de diciembre de 1.993 bajo el No. 432.314 del libro IX, mediante la cual autoriza realizar una emisión de bonos obligatoriamente convertibles en acciones de la sociedad, por una cantidad hasta de \$28.296'482.386,00 mcte.

Que por Acta No.17 de la Junta Directiva del 3 de diciembre de 1.993, inscrita el 29 de diciembre de 1.993 bajo el No. 432.315 del libro IX, se nombró como representante legal de los tenedores de bonos obligatoriamente convertibles en acciones a la sociedad: "CORPORACION FINANCIERA UNION S.A. CORFIUNION S.A.", para la emisión autorizada según resolución No. 320-4642 del 27 de diciembre de 1.993, de la Superintendencia de Sociedades.

Que por resolución No.320-783 del 19 de abril de 1.994 de la Superintendencia de Sociedades, inscrita el 21 de abril de 1.994 bajo el No. 444.770 del libro IX, por la cual se autoriza una emisión de bonos obligatoriamente convertibles en acciones.

Que por Acta No. 23 de la Junta Directiva del 23 de febrero de 1.994,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

inscrita el 15 de septiembre de 1.994, bajo el No. 463066 del libro IX, de cómo representante legal de los tenedores de bonos obligatoriamente convertibles en acciones a la sociedad "CORPORACION FINANCIERA UNION S.A." CORFIUNION S.A. Para la emisión autorizada según resolución No. 320-783 del 19 de abril de 1.994.

Que por resolución No. 320-812 del 30 de mayo de 1.995 de la Superintendencia de Sociedades, inscrita el 31 de mayo de 1.995, bajo el No. 494.830 del libro IX, se autorizó una emisión de bonos obligatoriamente convertibles en acciones boceas por cuarenta mil millones de pesos (\$40.000.000.000)

Que por Acta No.39 de la reunión de Junta Directiva del 29 de marzo de 1.995, inscrita el 31 de mayo de 1.995 bajo el No. 494.829 del libro IX, fue nombrada representante legal de los tenedores de bonos: LA CORPORACION FINANCIERA UNION S.A. CORFIUNION.

Que por Documento Privado del 31 de octubre de 2002 y resolución de la Superintendencia de Valores No. 0812 del 22 de octubre de 2002, inscrita el 30 de diciembre de 2002 bajo el No. 859962 del libro IX, fue nombrada representante legal de los tenedores de bonos a : HELM TRUST S.A. EMISION \$450.000.000.000.

Que por Documento Privado del 03 de febrero de 2006 inscrita el 21 de marzo de 2006 bajo el No. 1045029 del libro IX, fue nombrada representante legal de los tenedores de bonos a : HELM TRUST S.A. EMISION \$500.000.000.000.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Procedimiento Administrativo y de los Contenciosos Administrativos.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6120
Actividad secundaria Código CIIU: 6110
Otras actividades Código CIIU: 6190, 4741

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: COMCEL S A CAV CHICO
Matrícula No.: 00672319
Fecha de matrícula: 15 de noviembre de 1995
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Cra 15 N 94-38
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: COMCEL S A CAV VENECIA
Matrícula No.: 00931343
Fecha de matrícula: 31 de marzo de 1999
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Av 68 No 39I-37 Sur
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: COMCEL S A CAV AV SUBA
Matrícula No.: 01335181
Fecha de matrícula: 26 de enero de 2004
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Av Suba No 128-30

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	COMCEL S A CAV CEDRITOS
Matrícula No.:	01463294
Fecha de matrícula:	23 de marzo de 2005
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Calle 140 No 18-40
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	COMCEL S A CAV ALAMOS
Matrícula No.:	01545178
Fecha de matrícula:	3 de noviembre de 2005
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Calle 71 B No. 100-11 Local 201A Diver Plaza 2
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	COMCEL S.A CAV KENNEDY
Matrícula No.:	01657921
Fecha de matrícula:	7 de diciembre de 2006
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Av 80 No. 44 19 Sur
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	COMCEL S.A CAV RESTREPO
Matrícula No.:	01674219
Fecha de matrícula:	15 de febrero de 2007
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Ak 14 No. 10-09 Sur
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	COMCEL S.A CAV SOACHA
Matrícula No.:	01679383
Fecha de matrícula:	1 de marzo de 2007
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Aut Sur Cc Mercurio L 155-154
Municipio:	Bogotá D.C.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre: COMCEL S.A CAV CHAPINERO
Matrícula No.: 01679384
Fecha de matrícula: 1 de marzo de 2007
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Cr 13 No. 59-52
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: COMCEL S A CAV GRAN ESTACION
Matrícula No.: 01760527
Fecha de matrícula: 14 de diciembre de 2007
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Cl 26 No. 62-47 Lc 1-47
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: TELMEX COLOMBIA PLAZA IMPERIAL
Matrícula No.: 01849536
Fecha de matrícula: 4 de noviembre de 2008
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Ak 104 No. 148-07 Lc 147-7
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: CAV UNICENTRO COMCEL SA
Matrícula No.: 01856342
Fecha de matrícula: 9 de diciembre de 2008
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Cc Unicentro L 2-202
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: TELMEX PORTAL 80
Matrícula No.: 01943358
Fecha de matrícula: 5 de noviembre de 2009
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Tv 100 A No. 80A-20 Lc 3002
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: TELMEX COLOMBIA C.C. SANTAFE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Matrícula No.:	02122907
Fecha de matrícula:	21 de julio de 2011
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cl 183 No. 45-03
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	TELMEX COLOMBIA HAYUELOS
Matrícula No.:	02216619
Fecha de matrícula:	23 de mayo de 2012
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cl 20 No. 82 52
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	COMCEL S A CAV FLORESTA
Matrícula No.:	02329546
Fecha de matrícula:	7 de junio de 2013
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 67 A No. 95 63 Cc 68 Av Street Mall
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	COMCEL SA CAV CHIA
Matrícula No.:	02394920
Fecha de matrícula:	17 de diciembre de 2013
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cl 10 No. 11 36 Cc La Libertad
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	CAV SAC FONTIBON
Matrícula No.:	02515924
Fecha de matrícula:	5 de noviembre de 2014
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 100 No. 19 57 65
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	CAV SAC TOBERIN
Matrícula No.:	02525224
Fecha de matrícula:	4 de diciembre de 2014

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 45 No. 166 65
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	CAV CALIMA
Matrícula No.:	02797361
Fecha de matrícula:	24 de marzo de 2017
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 30 Con Av 19 Lc B1 Al B19
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	TELMEX COLOMBIA CENTRO MAYOR
Matrícula No.:	02819027
Fecha de matrícula:	19 de mayo de 2017
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cl 38 A Sur No. 34 D - 50 Lc 1 - 200
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	CAV LA FELICIDAD
Matrícula No.:	02938880
Fecha de matrícula:	26 de marzo de 2018
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cl 19 A No. 72 - 57
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	TIENDA CLARO GRAN PLAZA BOSA-CENTRO DE VENTAS
Matrícula No.:	03048449
Fecha de matrícula:	8 de enero de 2019
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cl 65 Sur No. 78 H - 51
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	CAV FONTANAR
Matrícula No.:	03100453
Fecha de matrícula:	15 de abril de 2019
Último año renovado:	2023

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Via Chia Km 2.5 Cajica - Fontanar Lc 308 / 10 - 11
Municipio:	Chía (Cundinamarca)
Nombre:	CAV SOACHA TERRERO FIJA
Matrícula No.:	03100465
Fecha de matrícula:	15 de abril de 2019
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 1 No. 38 - 53 Cc Ventura Terreros Lc 113
Municipio:	Soacha (Cundinamarca)
Nombre:	CAV TITAN BOGOTA MOVIL
Matrícula No.:	03100437
Fecha de matrícula:	15 de abril de 2019
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Av Boyaca No. 80 - 94 - Cc Titan Plaza Lc 362 - 363
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	CAV PLAZA CLARO
Matrícula No.:	03100446
Fecha de matrícula:	15 de abril de 2019
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 68 A No. 24 B - 10 To 1 Lc 1 Cc Plaza Claro
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	CAV GRAN PLAZA ENSUEÑO PERDOMO
Matrícula No.:	03100461
Fecha de matrícula:	15 de abril de 2019
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 51 No. 59 C Sur 93 Lc 123 - 124
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	CAV FUSAGASUGA
Matrícula No.:	03235831

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Fecha de matrícula:	18 de marzo de 2020
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Av Las Palmas # 8 - 44
Municipio:	Fusagasugá (Cundinamarca)
Nombre:	TIENDA BOGOTÁ PASEO VILLA DEL RIO
Matrícula No.:	03318479
Fecha de matrícula:	14 de diciembre de 2020
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cl 57 D Sur No. 78 H - 14
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	CAV TIENDA ANDINO
Matrícula No.:	03372718
Fecha de matrícula:	29 de abril de 2021
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 11 No 82 - 71 Cc Andino Lc 276
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	TIENDA BOGOTA COLINA
Matrícula No.:	03436413
Fecha de matrícula:	30 de septiembre de 2021
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 58 D No 146 - 51 Par La Colonia Cc
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	CAV PLAZA DE LAS AMERICAS
Matrícula No.:	03455505
Fecha de matrícula:	18 de noviembre de 2021
Último año renovado:	2023
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 71 D # 6-94 Sur Cc Plaza De Las Americas Lc 1639
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	COMCEL CAV ZIPAQUIRA
Matrícula No.:	03464157
Fecha de matrícula:	27 de diciembre de 2021

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Cl 1 No. 10 - 08 P 1 Lc 103 - 108 Cc La Casona
Municipio: Zipaquirá (Cundinamarca)

Nombre: CAV BOGOTÁ CRA 7
Matrícula No.: 03572367
Fecha de matrícula: 22 de agosto de 2022
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Carrera 7 22 20
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: CLARO TECH
Matrícula No.: 03690133
Fecha de matrícula: 7 de junio de 2023
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Carrera 68 A 24 B 10
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Ingresos por actividad ordinaria \$ 14.613.999.381.000Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
período - CIIU : 6120

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 22 de abril de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 15 de febrero de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de marzo de 2024 Hora: 09:54:21

Recibo No. AA24274713

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2427471319E19

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

Poder Dr. Luis Fernando Salazar - Recurso extraordinario de Anulación - Proceso Arbitral de COMCEL S.A. vs EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P

Notificaciones Claro <NotificacionesClaro@claro.com.co>23 de abril de 2024, 11:30

Para: "ccya@ccc.org.co" <ccya@ccc.org.co>, "rubriaelena@gmail.com" <rubriaelena@gmail.com>, "solisguzman@hotmail.com" <solisguzman@hotmail.com>, "marinospina@hotmail.com" <marinospina@hotmail.com>, "procjudadm18@procuraduria.gov.co" <procjudadm18@procuraduria.gov.co>, "soguzman@procuraduria.gov.co" <soguzman@procuraduria.gov.co>, "notificaciones@emcali.com.co" <notificaciones@emcali.com.co>, "csolanilla@procuraduria.gov.co" <csolanilla@procuraduria.gov.co>

Cc: Felipe Alejandro Garcia Avila <felipe.garcia@claro.com.co>, "lfsalazar@syrabogados.com" <lfsalazar@syrabogados.com>, Dora Sofia Morales Soto <dora.morales@claro.com.co>

- Doctores
- Dr. Iván Ramírez Württemberger– Presidente.

Dr. Luz Stella Alvarado Orozco- Árbitro.

Dr. Henry Sanabria Santos– Árbitro.

Dr. Rubria Elena Gómez Estupiñán- Secretaria
- E.S.D.

Referencia : Proceso Arbitral de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. vs EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P

Radicado Interno :A-20220927/ 0873

Asunto : Poder Especial Recurso Extraordinario de Anulación Laudo arbitral

Respetados Árbitros buenos días.

Por el presente remito poder especial en favor del Dr. Luis Fernando Salazar, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.083.331 expedida en Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional de Abogado 12.386 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, con el objeto de que en nombre y representación de Comcel S.A. proceda a presentar recurso extraordinario de anulación en contra del Laudo Arbitral proferido el día 5 de marzo de 2024, dentro del Proceso Arbitral promovido por Comcel S.A. contra Emcali, cuyas solicitudes de aclaración, corrección y adición, propuestas por ambas partes fueron negadas mediante Auto No. 47 de 13 de marzo de 2024; trámite identificado bajo el radicado No. A-20220927/ 0873.

Se copia en este correo al Señor Representante del Ministerio Público, esto es, Procurador 18 Judicial II para Asuntos Administrativos del Valle del Cauca y al apoderado de Emcali

Atentamente,

Claro Colombia

Notificacionesclaro@claro.com.co

Conmutador: Bogotá: 7480000 - 7500300, Cali: 4880000, Medellín: 6041000, B/quilla: 3870000

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:



Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o

entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de Comunicación Celular S.A Comcel S.A está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, Comunicación Celular S.A Comcel S.A tendrá derecho a los daños y perjuicios que esto le cause.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This e-mail message including attachments, if any, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and /or privileged material. Any review, use, disclosure or distribution of such confidential information without the written authorization of Comunicación Celular S.A Comcel S.A is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. By receiving this e-mail you acknowledge that any breach by you and/or your representatives of the above provisions may entitle Comunicación Celular S.A Comcel S.A to seek for damages.

2 adjuntos

-  **Poder Dr. Luis Fernando Salazar - Anulación Laudo Emcali.pdf**
514K
-  **Certificado de existencia y reptesentación legal Comcel - marzo 2024.pdf**
299K



EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

100 GERENCIA GENERAL

100000197

RESOLUCIÓN No. DE 25 ABR 2024

"Por medio de la cual se realiza una delegación en materia de Representación Legal"

La Gerente General (E) de las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E. E.S.P., encargada mediante Resolución No 4112.010.20.0249 de abril 22 del 2024 expedida por Alcalde de Santiago de Cali Álvaro Alejandro Eder Garcés, en uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia indica que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la descongestión de funciones.

Que el artículo 9º de la Ley 489 de 1998 señala:

"Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente Ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias. Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente Ley".



@emcalioficial

www.emcali.com.co



EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
100 GERENCIA GENERAL

100000197

RESOLUCIÓN No. DE 25 ABR 2024

"Por medio de la cual se realiza una delegación en materia de Representación Legal"

Que la antes mencionada Resolución, establece como funciones del Área Funcional Administración – Dirección Jurídica *"Las demás que le sean asignadas por normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las responsabilidades comunes a todas las dependencias de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. definidas en la presente Resolución que estén de acuerdo con su naturaleza"*

Considerando lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DELEGAR en el funcionario EDINSON ZAMBRANO MARTINEZ identificado con la cédula de ciudadanía No 1.117.497.373 en su calidad de Director Jurídico, cargo que acredita conforme Resolución No 100000052 del 05 de febrero de 2024, con el fin que ejerza la representación judicial y extrajudicial de la empresa, constituya apoderados y sustituya otorgando poderes especiales a otros abogados que formen parte de la planta de cargos de EMCALI EICE ESP, y/o abogados contratistas que dentro del objeto de sus contratos o responsabilidades contractuales, tengan la representación jurídica de la empresa así como que y reasuma este el ejercicio de la representación judicial mediante la revocación del mandato de representación.

ARTÍCULO SEGUNDO. VIGENCIA Y DEROGATORIAS: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, deroga las resoluciones anteriores y todas las disposiciones que le se sean contrarias.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE


NURY DOLORES DEVIA CRIOLLO
Gerente General (E)



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

www.emcali.com.co
@emcalioficial
YouTube, Instagram, Facebook, Twitter icons

DECRETO No. 4112.010.20.0249

DE 2024

(Abril 22 de 2024)

"POR EL CUAL SE CONFIERE COMISIÓN DE SERVICIOS Y SE EFECTÚA ENCARGO SIN EFECTOS FISCALES EN LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E. E.S.P"

El Alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali, en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el artículo 209 y 315 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 91 de la Ley 136 de junio 2 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, el Decreto No. 1083 del 26 de mayo de 2017 y,

CONSIDERANDO

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece:

"(...) La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones (...)"

Que el artículo 315, en su numeral 3° de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece las atribuciones del Alcalde, a saber:

"(...) 3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente (...)"

Que el artículo Primero de la Ley 1960 de 2019, modifica el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, el cual quedará así:

"(...) Artículo 24. Encargo (...)"

"(...) Los cargos de Libre nombramiento y Remoción, en caso de vacancia temporal o definitiva, podrán ser provistos a través del encargo, de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño (...)"

Que el Decreto No. 1083 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública", señala:

"(...) Artículo 2.2.5.4.1 Movimientos de personal. A los empleados que se encuentren en servicio activo se les podrá efectuar los siguientes movimientos de personal (...)"

"(...) 2. Encargo (...)"





ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. 4112.010.20.0249

DE 2024

(Aprobado 22 de 2024)

"POR. EL CUAL SE CONFIERE COMISIÓN DE SERVICIOS Y SE EFECTÚA ENCARGO SIN EFECTOS FISCALES EN LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E. E.S.P"

"(...) Artículo 2.2.5.5.43 Encargo en empleos de Libre Nombramiento y Remoción. Los empleos de Libre nombramiento y Remoción en caso de vacancia temporal o definitiva, podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño.

En caso de vacancia temporal, el encargo se efectuará durante el término de éste.

Artículo 2.2.5.5.44. Diferencia salarial. El empleado encargado tendrá derecho al salario señalado para el empleo que desempeña temporalmente, siempre que no deba ser percibido por su titular (...)"

Que la norma ibidem respecto de la comisión de servicios señala:

"(...) Artículo 2.2.5.5.1 Situaciones administrativas. El empleado público durante su relación legal y reglamentaria se puede encontrar en las siguientes situaciones administrativas (...)"

"(...) 4. En comisión (...)"

"(...) Artículo 2.2.5.5.21 Comisión. El empleado se encuentra en comisión cuando cumple misiones, adelanta estudios, atiende determinadas actividades especiales en sede diferente a la habitual o desempeña otro empleo, previa autorización del jefe del organismo. La comisión puede otorgarse al interior del país o al exterior (...)"

"(...) Artículo 2.2.5.5.22 Clases de comisión. Las comisiones pueden ser:

1. De servicios (...)"

"(...) Artículo 2.2.5.5.25 Comisión de servicio. La comisión de servicios se puede conferir al interior o al exterior del país, no constituye forma de provisión de empleos, se otorga para ejercer las funciones propias del empleo en un lugar diferente al de la sede del cargo, cumplir misiones especiales conferidas por los superiores, asistir a reuniones, conferencias o seminarios, realizar visitas de observación que interesen a la administración y que se relacionen con el ramo en que presta sus servicios el empleado.

Esta comisión hace parte de los deberes de todo empleado, por tanto, no puede rehusarse a su cumplimiento (...)"

"(...) ARTÍCULO 2.2.5.5.27 Derechos del empleado en comisión de servicios. El empleado en comisión de servicios en una sede diferente a la habitual tendrá derecho al reconocimiento de la remuneración mensual que corresponde al cargo que desempeña y al pago de viáticos y, además, a gastos de

DECRETO No. 4112.010.20.0249
(Abril 22 de 2024)

DE 2024

"POR EL CUAL SE CONFIERE COMISIÓN DE SERVICIOS Y SE EFECTÚA ENCARGO SIN EFECTOS FISCALES EN LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E. E.S.P"

Si los gastos que genera la comisión son asumidos de forma parcial por otro organismo o entidad, únicamente se reconocerá la diferencia (...)"

"(...) ARTÍCULO 2.2.11.1.9 Abandono del cargo. El abandono del cargo se produce cuando un empleado público sin justa causa:

1. No reasume sus funciones al vencimiento de una licencia, permiso, vacaciones, comisión, o dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de la prestación del servicio militar (...)"

Que mediante oficio con radicado Orfeo No. 20244-120100002051 del veintidós (22) de abril de 2024, fue delegado al servidor público Roger Mina Carbonero, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.130.625.393, quien es titular del empleo de naturaleza del libre nombramiento y remoción denominado Gerente General, adscrito a las Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P, para participar en comisión de servicios del evento "Colombia Investment Roadshow", organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el respaldo de la Embajada de Colombia en el Reino Unido, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Londres - Inglaterra, los días veintitrés (23) y veinticuatro (24) de abril de 2024, de conformidad con la carta de invitación y agenda que se adjuntan para que hagan parte integral del presente acto administrativo.

Que a través de oficio del veintidós (22) de abril de 2024, el servidor público Roger Mina Carbonero, manifiesta la aceptación de su delegación y solicita que en su ausencia, debido a la comisión de servicios, se encargue sin efectos fiscales a la Gerente de Área Financiera – Nury Dolores Devia Criollo, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.226.110, desde el día veintidós (22) y hasta el día veinticinco (25) de abril de 2024.

Que para el cumplimiento de la comisión de servicios que se confiere mediante el presente acto administrativo, los gastos de viáticos, tiquetes aéreos y transporte terrestre serán asumidos en su totalidad por las Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

Que mediante revisión de cumplimiento de perfil No. 8000006652024 del diecinueve (19) de abril de 2024, el cual se anexa para que haga parte integral del presente acto administrativo, se establece que Nury Dolores Devia Criollo, identificada con la cédula de



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. 4112.010.20.0249

DE 2024

(Abril 22 de 2024)

"POR EL CUAL SE CONFIERE COMISIÓN DE SERVICIOS Y SE EFECTÚA ENCARGO SIN EFECTOS FISCALES EN LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E. E.S.P"

DECRETA

Artículo Primero: Conferir comisión de servicios sin viáticos, ni tiquetes aéreos, ni transporte terrestre al servidor público Roger Mina Carbonero, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.130.625.393, quien es titular del empleo de naturaleza de libre nombramiento y remoción denominado Gerente General, adscrito a las Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P, para desplazarse a la ciudad de Londres – Inglaterra, desde el día veintidós (22) y hasta el día veinticinco (25) de abril de 2024, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Parágrafo: Que para el cumplimiento de la comisión de servicios que se confiere mediante el presente acto administrativo, los gastos de viáticos, tiquetes aéreos y transporte terrestre serán asumidos en su totalidad por las Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

Artículo Segundo: El servidor público Roger Mina Carbonero, deberá presentar ante su superior inmediato o ante quien haga sus veces, dentro de los tres (03) días siguientes a la finalización de la comisión que le ha sido conferida, un informe ejecutivo sobre las actividades desplegadas en desarrollo de la misma, conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.5.5.29 del Decreto No. 1083 del 2015.

Artículo Tercero: Encargar sin efectos fiscales a la servidora pública Nury Dolores Devia Criollo, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.226.110, quien desempeña el empleo denominado Gerente de Área Financiera, para que de manera conjunta desempeñe el empleo denominado Gerente General, ambos empleos adscritos a las Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P, a partir del día veintidós (22) y hasta el día veinticinco (25) de abril de 2024 inclusive, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Artículo Cuarto: Para efectos de legalizar la presente situación administrativa, se requiere de la previa posesión del cargo.

Artículo Quinto: Comunicar el contenido del presente Acto Administrativo al servidor



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. 4112.010.20.0249
(Abril 22 de 2024)

DE 2024

"POR EL CUAL SE CONFIERE COMISIÓN DE SERVICIOS Y SE EFECTÚA ENCARGO SIN EFECTOS FISCALES EN LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E. E.S.P"

Artículo Séptimo: Remitir Copia del presente Acto Administrativo a las Empresas Municipales de Cali - EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y al Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional: Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano: Proceso Gestión y Desarrollo Humano: Subproceso Administración de Historias Laborales para lo de su competencia respecto de los servidores públicos Roger Mina Carbonero y Nury Dolores Devia Criollo.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Distrito Especial de Santiago de Cali, a los ()
días del mes de del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

ÁLVARO ALEJANDRO EDER GARCÉS
Alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali

Elaboró: Joyce Díaz Correa - Contratista JOC

Revisó: Lilia Marleny Camargo Segura - Profesional Especializado

Jacqueline Cruz Arteaga - Profesional Universitario

Martha Yaneth Niño Bautista - Subdirectora de Gestión Estratégica del Talento Humano

Neicy Lara Useche - Asesor

John Néstor Acosta Moreno - Director (E) del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional

María Ximena Román García - Directora Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública

Ángela María Catalán Gutiérrez - Subdirectora de Doctrina y Asuntos Normativos

Andrés Felipe Stapper Segrera - Secretario de Gobierno



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
ACTA DE POSESIÓN No. 010

Hoy, a los cinco (05) días de febrero de 2024, se presentó el Doctor EDINSON ZAMBRANO MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.497.373, de Florencia-Caquetá, quien tomó posesión en el cargo de DIRECTOR JURIDICO, Área Funcional Administración Dirección, de la Dirección Jurídica, adscrita a la Gerencia General, mediante Resolución GG. 100000052 del 05 de febrero de 2024.

Nota: Cumple con los requisitos de Ley y adjunta estampillas por valor de \$ 662.534

Enterado del contenido del artículo 122 de la Constitución Nacional, inciso segundo, JURO CUMPLIR Y DEFENDER LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY, en el desempeño de las funciones del cargo para la cual tomo posesión.

Para constancia se firma la presente Acta de Posesión a los cinco (05) días del mes de febrero de 2024.

EDINSON ZAMBRANO MARTINEZ
CC. No. 1.117.497.373
Registro: 200074

ROGER MINA CARBONERO
GERENTE GENERAL

ELABORO: SORAYA HERRERA S. – PROFESIONAL ADMINISTRATIVO I
REVISÓ: MARIA DEL PILAR HERNANDEZ- JEFE DE UNIDAD GESTION HUMANA Y ORGANIZACIONAL
APROBO: PAOLA ANDREA RIVEROS RENGIFO – GERENTE DE AREA GESTION HUMANA Y ACTIVOS



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, EMCALI E.I.C.E E.S.P.
RESOLUCIÓN GG. NO. 100000052 DE 05 FEB 2024

(Por la cual se ordena un nombramiento)

El Gerente General de EMCALI E.I.C.E E.S.P, designado por la Alcaldía de Santiago de Cali mediante Decreto No 4112.010.20.0005 del 02 de enero de 2024, uso de sus facultades.

RESUELVE

ARTICULO ÚNICO: Nombrar al Abogado EDINSON ZAMBRANO MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.1.117.497.373, en el empleo Público de DIRECTOR JURIDICO Código de Cargo 905.006, Área Funcional ADMINISTRACION DIRECCION, Code, 7731001, de la GERENCIA GENERAL con una asignación salarial de Catorce Millones Seiscientos Siete Mil Cuatrocientos Treinta y Tres Pesos M/Cte. (\$14.607.433.00)

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ROGER MINA CARBONERO
GERENTE GENERAL

ELABORO: SORAYA HERRERA S. - PROFESIONAL ADMINISTRATIVO
REVISÓ: MARIA DEL PILAR HERNANDEZ- JEFE DE UNIDAD GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL
APROBO: PAOLA ANDREA RIVEROS RENGIFO - GERENTE DE AREA GESTION HUMANA Y ACTIVOS